

Los movimientos sociales en el MERCOSUR: Nuevas formas de expresión y de acción colectiva



**PLATAFORMA
MERCOSUR
SOCIAL Y
SOLIDARIO**

Fotos de tapa:



Fernando Der Meguerditchian



Temuco, revista de frente



Rebelarte



Articulação de Organizações de Mulheres Negras (AMNB) (Facebook)



Archivo Decidamos

Los movimientos sociales en el MERCOSUR:

Nuevas formas de expresión y de acción colectiva

Este trabajo se realizó el segundo semestre de 2019, antes de la crisis sanitaria generada por el coronavirus

Equipo de Análisis de Movimientos Sociales

Plataforma MERCOSUR Social y Solidario

Mario Garcés (Chile)

María Rosa Goldar y Carlos Zagni (Argentina)

Ana Patricia Sampaio (Brasil)

Dania Pilz (Paraguay)

Ignacio Arbolea y Alvaro Moreno (Uruguay)

www.mercosursocialsolidario.org

 Plataforma Mercosur Social y Solidario

 @MercosurSocial

 @MercosurSocial

París 1031

Asunción, febrero de 2020

ÍNDICE

ARGENTINA



7

BRASIL



33

CHILE



55

PARAGUAY



71

URUGUAY



89

PROBLEMATIZANDO NUESTRAS LECTURAS
SOBRE LA POLITICIDAD DE LOS MOVIMIENTOS
SOCIALES

109

INTRODUCCIÓN

Las organizaciones y movimientos sociales constituyen actores que han intervenido a lo largo de la historia en la realidad social y política latinoamericana, sin embargo, pocas veces su experiencia y su desarrollo forman parte de los análisis políticos, que tienden a concentrarse en los partidos y alianzas políticas, las coyunturas electorales, los programas de gobierno y sus respectivos oponentes. En otros casos, el análisis político se nutre de los estudios económicos y sociales que dan cuenta del estado de desarrollo de la economía o de indicadores de desarrollo social que comprometen a los pobres y a los grupos sociales más desfavorecidos.

La ausencia e invisibilización de las prácticas y proyectos de las organizaciones y movimientos sociales no solo representa un sesgo analítico (que prescinde o pone en un segundo plano a los movimientos) sino que al mismo tiempo representa una forma de negación de su actoría y de sus modos de intervenir y disputar espacios, sentidos y proyectos de cambio en la sociedad.

Es verdad, por otra parte, que las organizaciones y movimientos sociales establecen relaciones con los partidos, las alianzas políticas y el Estado, pero ello no agota su historicidad ni sus grados de autonomía con relación al Estado y los sistemas políticos.

En nuestra Plataforma MERCOSUR Social y Solidario han convivido diversas visiones sobre los movimientos sociales y las alternativas políticas, que dependen de las historias de nuestros países, así como de las “culturas políticas” nacionales. Los cambios en el contexto regional, en los últimos años, así como nuestras propias prácticas que se desenvuelven en alianzas y relaciones con los movimientos y organizaciones sociales, nos obligan a repensar y enriquecer nuestras miradas a la “realidad” y a los movimientos y organizaciones sociales como “actores” que están interviniendo, disputando, proponiendo y desarrollando “alternativas” de cambios sociales, culturales y políticos.



Esta perspectiva, que no es nueva y que alcanzó importantes desarrollos con la Educación Popular, nos pone nuevos desafíos, que básicamente apuntan a producir análisis social y político, cuyo punto de partida sea la propia experiencia y el protagonismo de los movimientos y organizaciones sociales. Ello no descarta la relación que los movimientos establecen con las alternativas políticas partidarias, con la economía o con las instituciones del Estado, pero pone el acento en la propia “actoría” de las organizaciones y los movimientos sociales. Esta es, por lo demás, un modo de procesar el protagonismo y la historicidad de nuestros propios pueblos.

Para avanzar en nuevas formas de análisis político, que tengan en consideración las prácticas de los movimientos sociales en la Plataforma MERCOSUR Social y Solidario, nos propusimos dar un primer paso, y realizar un “mapeo” de los movimientos sociales en cada uno de nuestros países, que presentamos a continuación. Como se trataba de un primer paso, enfatizamos en hacer, por ahora, una mirada más bien descriptiva, sin embargo, de acuerdo con la realidad de cada país, más de uno de los trabajos avanzó también en perspectivas analíticas nuevas o formas en que se está haciendo la lectura de los movimientos sociales, desde las ciencias sociales, en cada uno de nuestros países.

Incluimos, al final de este dossier, algunos comentarios generales que apuntan a problematizar nuestras miradas e invitan a plantearnos nuevos problemas relativos al carácter de los movimientos sociales y a su impacto en el campo político.

Mario Garcés
Coordinador del Dossier

Argentina





Argentina

MAPEO DE MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA¹

María Rosa Goldar

Lic. Trabajadora Social y Magíster en Ciencias Política y
Sociología

Asociación Ecuménica de Cuyo/FEC. Mendoza

Carlos Zagni

Arquitecto

Acción Educativa. Santa Fe

INTRODUCCIÓN

Los movimientos sociales con mayor vigor en la actualidad en la Argentina expresan los esfuerzos de reconstrucción de los lazos sociales a través de nuevas formas de organización y de desarrollar diferentes modos de resistencia a las condiciones hegemónicas del neoliberalismo y neoconservadurismo vigentes en nuestro país y en gran parte de la región. Todos ellos tienen distintos antecedentes que permiten, en las actuales condiciones, recrear tanto sus aspectos identitarios como afianzar, expandir, ampliar y/o crear renovadas demandas y reivindicaciones como así también expresarlas en distintos modos de visibilidad pública y en diferentes formatos de repertorios de lucha.

Un común denominador de la presente etapa política en nuestro país es que todos ellos han sido, por distintos caminos y con diferentes argumentos, estigmatizados por el discurso neoliberal expresado fundamentalmente por los gobiernos nacional, provinciales y locales y por los medios masivos de comunicación hegemónica. Además, en muchos casos han sido foco de una marcada represión por parte del Estado ya sea a través de la violencia estatal (policías federales, provinciales y municipales, gendarmería, prefectura) como así también por otros caminos sancionatorios: multas por utilizar el espacio

¹ Documento elaborado en septiembre y octubre 2019, en proceso electoral con posibles recambios gubernamentales a nivel nacional y en algunas provincias argentinas.



Argentina

público, declaración de ilegalidad de sus acciones, quita de salario por realizar huelga, entre las más frecuentes.

Cabe señalar que la Argentina posee una larga trayectoria de movilización social y organización popular que, en términos de Pérez y Natalucci (2012), presentan una **gramática movimientista**. Esta gramática hace que la acción de estos movimientos se articule en dos fases primordialmente: resistencia y ofensiva. La primera tiene que ver con todas las acciones y estrategias que se desarrollan en momentos de ataque a los intereses populares. La segunda, con la posibilidad de avanzar en momentos propicios para la consecución de sus reivindicaciones. Para los movimientos sociales que se mueven en esta gramática, los momentos de ofensiva se ligan a ocupar espacios y/o poder incidir fuertemente en el Estado. A diferencia de los movimientos inscriptos en una gramática *autonomista* (cuya acción se establece en la reivindicación de sus luchas por fuera de toda estatalidad –entendiendo al Estado como mero aparato al servicio de los intereses de los sectores dominantes–) y en una gramática *clasista* (articulada a partidos de clase), la mayor parte de los movimientos sociales en Argentina, o aquellos con mayor caudal de acumulación política y representatividad, se inscriben en esa gramática movimientista y marca por ende, la acción tanto en momentos de resistencia (como el actual) como los dilemas en los momentos de ofensiva bajo la presencia de gobiernos de carácter popular, en la experiencia argentina, el peronismo.

Eso está presente en las condiciones actuales de los movimientos sociales en la argentina y en la actual fase de resistencia en todos los movimientos que describiremos se encuentran expresiones organizativas variadas que dan cuenta de la presencia –con distintos grados de fuerza– de las tres gramáticas descriptas.

Los movimientos sociales que en la etapa actual de la Argentina identificamos con mayor vitalidad y presencia son:

- 1- Movimiento de la Economía Popular
- 2- Movimiento campesino, trabajadores de la tierra y de la agricultura familiar
- 3- Movimiento de Derechos Humanos
 - a- Memoria, Verdad y Justicia
 - b- Presos políticos
 - c- Violencia institucional
- 4- Movimiento sindical
- 5- Movimiento feminista
- 6- Movimiento indígena
- 7- Movimiento ambientalista



Argentina



1

MOVIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR

Los cambios en las formas del trabajo, en sus dimensiones contractuales y organizativas, sostienen un enfoque más atento a la construcción social de los movimientos y no sólo a sus formas de protesta y movilización, concebidas aquí como emergentes de una actividad más vasta de creación de lazos y formas organizativas.

Los emprendimientos encarados por los movimientos de trabajadores de empresas recuperadas, organizaciones de desocupados, organizaciones territoriales, asambleas barriales y otras, se inscriben en lo que tiende a denominarse actualmente “economía social”, un espacio público donde el trabajo no se intercambia sólo ni principalmente por remuneraciones monetarias. Pero a diferencia de las formas que prevalecieron anteriormente en este campo, las impulsadas actualmente por los movimientos adquieren una dimensión política, en tanto sostienen reivindicaciones que interpelan a la economía neoliberal desde sus fundamentos en tanto que ésta pretende erigirse como “la economía” y naturalizándose como la única organización económica posible.

Los movimientos sociales de la economía popular se orientan hacia la construcción de redes de economía alternativa que les posibiliten consolidar su desarrollo, partiendo de las necesidades propias e impulsando la generación de actividades en el marco de una nueva economía social. Esta estrategia plantea una respuesta al problema central que ni el funcionamiento de la economía formal ni las iniciativas estatales pueden resolver en el corto plazo: la generación de empleos.

Los antecedentes de muchos de los emprendimientos enmarcados en la economía popular datan fundamentalmente de los movimientos de desocupados surgidos en la etapa neoliberal de la década del '90, denominados *piqueteros* (porque su principal acción de protesta fue el piquete de corte de ruta, para lograr visibilización y capacidad de negociación). Luego de su consolidación y habiéndose conformado por varias decenas de grupos, a partir del 2003 y a lo largo de los gobiernos Kirchneristas (2003-2015),



Argentina

fueron estructurándose y respondiendo a orientaciones políticas diferentes: algunos se vinculan con partidos políticos o centrales sindicales; otros privilegian su autonomía con respecto a los mismos. Lo que sí fueron alcanzando a lo largo del tiempo es un gran impacto político y sobre todo mediático.

Aunque algunos grupos piqueteros se limitaron en su momento sólo a sostener como reclamos los vinculados a la demanda de subsidios para desocupados/as, otros fueron destinando recursos y orientándose hacia actividades diversas, desarrollando desde hace varios años acciones de alcance más vasto en el seno de las comunidades en las que están implantados territorialmente: merenderos y comedores, centros educativos y, sobre todo, emprendimientos productivos en los que vuelcan los subsidios y alimentos obtenidos a través de las movilizaciones, como el desarrollo de huertas comunitarias, la venta directa de la producción a través de redes de comercialización alternativas, la elaboración y manufactura artesanal e industrial de productos frutihortícolas, panaderías, tejidos y confecciones artesanales e industriales, entre otras. De este modo, los cortes de ruta constituyeron sólo la punta del iceberg de una construcción social mucho más compleja.

En Argentina existe desde el 2011 la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Posee una gran capacidad de movilización y de articulación de distintas expresiones de la economía popular con una agenda reivindicativa amplia. En su última plataforma reivindicativa y en el marco de la crisis argentina actual, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular reclamó:

- Aumento del 50% del Salario Social Complementario en la misma proporción que el salario mínimo, vital y móvil, y la incorporación del sector al Consejo del Salario².
- Aumento del 40% de las partidas para meriendas y almuerzo en los comedores.
- Un bono de \$ 2000, como el que se anunció para el sector formal.
- El cese de las suspensiones de los programas laborales y mayor oferta para la Economía Popular.
- Ley de Emergencia Alimentaria y prórroga de la Emergencia Social.
- Aumento extraordinario para las jubilaciones y pensiones mínimas.³

2 El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil es un ámbito institucional permanente de diálogo entre representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado Nacional y el Consejo Federal del Trabajo (gobiernos provinciales) para evaluar temas referidos a las relaciones laborales como redistribución del ingreso, asistencia a desempleados, generación de empleo genuino y decente y combate al trabajo no registrado, entre otros.

3 "Los Movimientos Sociales reclaman los mismos beneficios que el resto de los trabajadores". En: Página 12. 14/08/19



Como puede apreciarse, el arco de reivindicaciones es mucho más abarcativo que el reclamo de subsidios para desocupados/as y busca articular y expresar demandas que vinculan la economía popular a las condiciones de protección y retribución de los/as trabajadores/as de la economía formal.

Movimiento de Trabajadores/as de empresas recuperadas

La visibilidad pública del “movimiento” de las empresas recuperadas por los/as trabajadores/as puede inscribirse como tal, entrado ya el siglo XXI. Hacia mediados de los años noventa comenzaron a registrarse movimientos de trabajadores que intentaban reactivar empresas paralizadas, las que presentaban rasgos comunes: habían sido afectadas por la importación o por dificultades para exportar (frigoríficos, textiles, tractores, acoplados, metalúrgicas, plásticos, agroalimentarias, entre otras) y se encontraban en proceso de quiebra, convocatoria de acreedores o abandonadas por los empresarios. Los/as trabajadores/as de estas empresas en quiebra, eran acreedores o damnificados, ya que en general la crisis de cada empresa fue precedida por la ruptura de los contratos de trabajo, traducida en disminuciones de sueldos y salarios, pago en vales, falta de cumplimiento empresario de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social, etcétera.

La recuperación de las empresas supone la transición hacia un nuevo régimen jurídico en el que los/as trabajadores/as toman a su cargo la producción, estableciendo acuerdos con proveedores y/o clientes que les aseguran un cierto capital de trabajo, y fijan una retribución mínima para su trabajo consistente en retiros periódicos equivalentes a un sueldo mínimo, a veces combinados con pagos en especie o mercaderías.

Si bien los/as trabajadores/as de empresas recuperadas son percibidos como un movimiento, contienen diversas corrientes, actores y organizaciones que se consolidaron y renovaron a partir del colapso institucional de diciembre de 2001: en el seno de la crisis económica, la recuperación de empresas fue percibida como una respuesta adecuada para sostener los esfuerzos productivos de la sociedad. Las distintas organizaciones del movimiento proporcionan asesoría legal, técnica y política a los trabajadores y, al recoger las diversas experiencias, reproducen y difunden la exploración y el aprendizaje de una nueva economía.

Los/as trabajadores/as que recuperan empresas replantean la jerarquía relativa del derecho al trabajo y de la propiedad privada. Frente a los valores de la sociedad mercantil que privilegian el derecho de propiedad, los/as trabajadores erigen como central el



derecho al trabajo y ponen en discusión la función social de la propiedad. No se trata de una discusión puramente retórica, sino que se traduce en la instalación de procedimientos jurídicos inéditos, que anteponen la necesidad de preservar las fuentes de trabajo frente a las rutinas de quiebra y liquidación de bienes productivos que prevalecen en el derecho mercantil.



2

MOVIMIENTO CAMPESINO, DE TRABAJADORES DE LA TIERRA Y DE LA AGRICULTURA FAMILIAR

En Argentina es posible diferenciar dos estructuras agrarias dominantes, una con modalidad de desarrollo capitalista clásico que tiene, históricamente, como foco a la extensa llanura pampeana asentada en condiciones de suelo, clima, etc., de alta productividad, con una renta diferencial en la que se sustentó el modelo agro exportador de producción de granos y carne, desde fines del siglo XIX, valorizando la tierra por sobre la fuerza de trabajo.

La segunda, es la que se encuentra en la región extra-pampeana (Patagonia, Oeste, Norte y Noreste del país), en donde –exceptuando la Patagonia– el capitalismo agrario se basó en explotaciones agroindustriales (caña de azúcar, tabaco, algodón, yerba mate, vid, etc.), forestal extractiva y/o minera, con presencia de economía campesina con una subsunción indirecta por la oferta de alimentos y fuerza de trabajo estacional, dinamizando así al mercado interno nacional y a las denominadas economías regionales.

Este escenario ha cambiado fuertemente desde los años 90’.



Argentina

Destacamos, en primer término, la incidencia en el espacio rural de procesos que tienen al agronegocio en su versión sojera como estandarte, mediado por un desarrollo tecnológico (transgénicos, agroquímicos, etc.) que permitió poner en valor por parte del capital territorios otrora marginales a sus parámetros de productividad y rentabilidad.

Estas condiciones –siempre asociadas al modelo neoliberal y de mercados cada vez más globalizados– habilitaron una nueva dinámica por el control de los bienes naturales y el destino de la producción, y vida campesina en su conjunto, habilitando lo que ha dado en denominarse para Latinoamérica, fase de articulación subordinada excluyente de la producción campesina.

Estas transformaciones se vieron acentuadas en concordancia con la implementación de un modelo basado en la explotación de bienes naturales, marcando así el ingreso en un nuevo orden, económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo cada vez más demandados por los países centrales y las potencias emergentes; donde para el caso argentino, debido al destino de la producción de soja, cobra preponderancia el proceso de proletarianización en China (así como a nivel internacional la vertiginosa suba de precios de minerales derivada de la creciente demanda de la potencia asiática).

En la referida región extra-pampeana, en el presente siglo se acentuó la dirección enfatizada en los 90', y la territorialización del capital no se agota en la producción agropecuaria. Se incorpora así, un segundo eje marcado por la irrupción de importantes emprendimientos mineros (fundamentalmente en el cordón montañoso de la cordillera y precordillera andina) que, con la modalidad de explotación a gran escala (minería “a cielo abierto”), impactan en territorios campesinos, no solo mediante la ocupación y enajenación directa de la tierra y conjunto de “recursos” naturales in situ, sino también, mediante la contaminación de los acuíferos de la zona cordillerana y piedemonte andinos, así como el fenómeno de las inundaciones que alcanzan la zona pampeana. Este panorama, desde la soja a la mega minería, configura una matriz extractiva protagonizada por una variada trama de corporaciones transnacionales que han encontrado en los trazos de las políticas y administraciones provinciales y nacional, un sólido respaldo.

Un tercer eje de la transformación económica y social en el espacio rural se asienta en la presencia del capital en renovadas formas de despojo que implicaron un abanico que va de la apropiación y explotación de tierras, a la especulación inmobiliaria vinculada; a la oferta de servicios turísticos y procesos de urbanización/gentrificación. Así, a partir de una variada combinación de los factores mencionados, los territorios con presencia campesina e indígena como así también los espacios poblados por trabajadores precarizados, que históricamente forman parte de redes parentales y de solidaridad campo/



Argentina

ciudad, se vieron fuertemente impactados. Este proceso ha agudizado la conflictividad campesina, sumando nuevos sujetos vinculados a fracciones del capital no exclusivamente agrario.

Ante esta serie de impactos socio-ambientales, las poblaciones campesinas pugnaron por organizarse reformulando procesos de resistencia y lucha. Surgieron así, al filo del siglo, organizaciones colectivas de carácter autogestivo que desde entonces desarrollan su accionar en oposición a empresarios agropecuarios, inversores/especuladores inmobiliarios, así como frente a instituciones, funcionarios y/o el aparato represivo del Estado.

La intensificación de reclamos y mayor toma de conciencia de la complejidad de la cuestión agraria en Argentina, llevó a procesos de articulación entre y con otros movimientos campesinos del país y de América Latina. Así, de manera correlativa se construyó un espacio político de mayor alcance territorial en el cual participan otras organizaciones de carácter provincial y regional. Experiencias de trabajo fortalecieron a las organizaciones y permitieron la integración en espacios de articulación política.

De manera contraria al modelo del agronegocio, las reivindicaciones del movimiento campesino indígena, de las organizaciones de trabajadores/as de la tierra y de la agricultura familiar, apuntan a garantizar la diversidad y calidad de los alimentos, el abastecimiento de mercados locales, la existencia de identidad cultural local y la protección y uso sustentable de los bienes naturales. Los campesinos despliegan una lucha cotidiana por la defensa del territorio, consistente en el sostenimiento de un sistema productivo basado en reciprocidades sociales y con la naturaleza; así también, quienes están organizados colectivamente, despliegan una serie de estrategias de lucha política a distintos niveles.

El modelo del agronegocio tiene un proceso de consolidación en nuestro país y en la región, que no es reciente. El mismo ha propiciado el crecimiento económico, conjugándose en algunos momentos con mayor énfasis en políticas distributivas. Sin embargo, las políticas neoliberales del último período han fomentado e incrementado las políticas del agronegocio intensificando y afianzando la concentración económica y la exclusión social, impactando así negativamente sobre las condiciones estructurales del campesinado. Sin embargo, a pesar de problemas y dificultades crecientes, las organizaciones campesinas, de trabajadores/as de la tierra y de la Agricultura Familiar, como la Asociación de Ferias y Mercados Populares, la Corriente Agraria Nacional y Popular, Federación de Cooperativas Federadas, entre otras, permitieron a las poblaciones campesinas no sólo producir alimentos para la provisión del mercado y consumo interno –contribuyendo sustancialmente a la soberanía alimentaria a nivel nacional– sino también, para el logro de la propia reproducción campesina.



Argentina

Con una gran experiencia de luchas que se profundizan en décadas, vinculadas al histórico Movimiento Agrario Misionero (MAM), el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), la Red Puna (de Jujuy, extremo noroeste argentino) surge de la convergencia de un trabajo conjunto fuertemente articulado promediando los años 90', a los que se sumaron el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra (UST) de Mendoza, el Encuentro Calchaquí, de la zona de los Valles de Salta, entre otras; lo que permitió que en septiembre del 2010, se realizara el I Congreso del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) en el cual, “más de mil campesinos, indígenas y trabajadores rurales” expresaron una proclama que recoge más de veinte años de trabajo, reafirmando a la soberanía alimentaria como una de sus banderas de lucha más fuerte, un sentido opuesto al modelo imperante, y una direccionalidad política anti-capitalista (Comunicado del MNCI, Buenos Aires, 26 de marzo de 2008).

Por su parte, de diversos procesos de resistencias al modelo del agronegocio y sus consecuencias, y de organización en torno a la producción agraria y abastecimiento de productos para la economía popular, surgen nuevas organizaciones como la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), organizaciones de la Agricultura Familiar, como la Asociación de Ferias y Mercados Populares, la Corriente Agraria Nacional y Popular, etc.).

Las familias campesinas han podido desarrollar la producción y reproducirse como economías domésticas, resistiendo los avances del sistema capitalista, orientando fuertemente sus reivindicaciones en la prosecución de la soberanía alimentaria y el sostenimiento de la diversidad ambiental y social. Con el uso del principal factor de producción –la tierra– logran sobrevivir en estas condiciones, aunque debemos considerar que un altísimo porcentaje de explotaciones de menor escala fueron desplazadas del sistema y expulsadas del campo, con índices de migración en constante ascenso.

Más allá de algunos logros obtenidos en el período Kirchnerista, trascurridos años desde aquel marzo del 2008 –las políticas oficiales hacia el campesinado de manera dominante no superaron el carácter asistencialista, ni han considerado al campesinado como un sujeto económico, productivo, con una particular identidad cultural, sino como parte marginal y subsumida a un modelo agro-alimentario dentro de los parámetros dominantes. Los datos del censo agropecuario del 2018 hablan de la pérdida de 100 mil unidades productivas y arrojan una mayor concentración de la tierra.

El gobierno de Cambiemos está subordinado y conducido por los intereses de las corporaciones transnacionales y los agronegocios, profundizados por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ha desatado una fuerte ofensiva contra todas las instituciones y políticas agrarias para la Agricultura Familiar y Campesina. Se desmanteló y desfinanció la Ex Secretaria de Agricultura Familiar, se desguazó el sector



Argentina

de la Agricultura Familiar del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y se ajusta al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) cerrando los Instituto de Investigación para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF), apuntando a favorecer a sectores concentradores que no se corresponden con las características de la Agricultura Familiar.

Argentina, en la actualidad, ni siquiera cuenta con un ministerio de Agricultura, y las economías regionales y las miles de familias de pequeños productores y agricultores familiares no cuentan con ningún tipo de incentivo estatal; por el contrario, el Macrismo abrió la importación de productos agropecuarios deliberadamente. Los impactos en las provincias han sido desastrosos. Las organizaciones campesinas e indígenas como las referidas, continuaron enfrentando la violencia del agronegocio, procurando desarrollar un modelo distinto, en una diversidad, que produce alimentos sanos para los pueblos, respetando la naturaleza y la vida.



3

MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS (DDHH)

El movimiento de Derechos Humanos tiene en la Argentina una larga y fructífera trayectoria que lo constituye en uno de los pilares de procesos históricos de gran trascendencia. Nacido en plena dictadura en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, fue conformándose en torno a organizaciones señeras, siendo Madres y Abuelas de Plaza de Mayo los íconos en esta lucha.

A lo largo de su historia los organismos de DDHH fueron construyendo una vasta trayectoria que permitió llegar al juzgamiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar como crímenes de lesa humanidad. A lo largo y a lo ancho del país se han desarrollado numerosos juicios que hacen de nuestro país un pionero en estos juzgamientos, que han alcanzado no sólo a integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, sino también a miembros eclesiásticos y del poder judicial.



Un presente complejo

La situación actual de la lucha por los derechos humanos en Argentina a partir del Gobierno de Cambiemos atraviesa un momento difícil. Se verifica un proceso de “debilitamiento” de la democracia y aumento del autoritarismo que se produce en conjunción con un proceso de constitución de hegemonía en el plano simbólico cultural que tiende a la construcción de “subjetividades permeables” a los cambios y regresiones en términos sociales, políticos y económicos por parte de la población.

En esta dimensión simbólico-cultural, también está en juego el poder: qué se dice, qué se oculta, qué se pone en valor, qué se desvaloriza. Y esto tiene que ver con las correlaciones de fuerzas que intervienen histórica y socialmente en los diversos contextos.

En ese sentido, la presentación del Gobierno de Cambiemos para que cientos de genocidas puedan acceder a la libertad condicional o la prisión domiciliaria sea visto solamente como “un hecho más”, es necesario el “**negacionismo oficial**”. Es necesario también el desmantelamiento de las dependencias estatales que investigaban y acompañaban los procesos de memoria, verdad y justicia, el avance represivo de la violencia estatal y la marcada **criminalización de la protesta** social, entre otros aspectos.

Desde el regreso a la vida democrática y a través de los diferentes gobiernos desde 1983, pero sobre todo ante los retrocesos democráticos en los últimos años, el Movimiento de DDHH fue albergando otras problemáticas de vulneración de DDHH. Es por ello que a los efectos de esta presentación y de dar cuenta de la actualidad en nuestro país los describiremos bajo 3 apartados: Procesos de Memoria, Verdad y Justicia; Presos políticos y Violencia Institucional.

Procesos de Memoria, Verdad y Justicia

Desde la perspectiva de este Gobierno, existe un “cambio de paradigma ideológico” que se evidencia en este nuevo mecanismo de impunidad que plantea que los genocidas “terminen de cumplir sus condenas en sus casas”. Haciéndose eco de las demandas de sectores ligados a una ideología de derecha que considera que hubo una guerra (teoría de los dos demonios), pero –al mismo tiempo– sin poder revertir el consenso social que los procesos de juzgamiento han tenido en gran parte de la sociedad, el gobierno de Cambiemos ha utilizado distintas estrategias para mejorar las condiciones de quienes ya han sido juzgados y condenados y relentizar, no colaborar y entorpecer los procesos judiciales de los juicios en curso.



Argentina

El hecho más reciente fue la difusión de una lista impulsada por el Poder Ejecutivo que plantea la liberación o el beneficio de la prisión domiciliaria para decenas de represores condenados.

“Tenemos la tristeza y la vergüenza de vivir este nuevo retroceso en materia de derechos que estamos padeciendo en el país desde que asumió el actual gobierno” (Carlos Pisoni de la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio –H.I.J.O.S.–).

El movimiento de derechos humanos argentino tiene una serie de particularidades específicas que lo diferencian del de otras partes del mundo. En ese sentido, si bien la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) fue fundada en 1937, la mayoría de los organismos aún vigentes se han constituido centralmente a la luz del Terrorismo de Estado.

Para la reconocida abogada Elizabeth Gómez Alcorta (reconocida penalista, defensora en numerosas y emblemáticas causas de violación a los derechos humanos como el caso de Milagro Sala), el movimiento de DDHH en Argentina es un movimiento “muy potente, muy creativo, muy tenaz” que ha sido “un faro democrático en la lucha por la justicia y nunca por la venganza”. En definitiva, según ella, de la lucha “por la verdad, por saber lo ocurrido y construir una memoria colectiva”.

La persistencia de organizaciones como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, HIJOS (acrónimo de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Movimiento Ecueménico por los Derechos Humanos –entre otros numerosos– se entroncan y se nutren en la actualidad con nuevas expresiones organizativas que luchan por Memoria, Verdad y Justicia como es el caso de la Agrupación Historias Desobedientes que se encuentra conformada por hijas, hijos y familiares de personal de las fuerzas armadas y de seguridad responsables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar en Argentina.

Persecución política: presos políticos

La etapa que vive América Latina actualmente y en particular la Región Cono Sur y nuestro país, ha llevado a un creciente autoritarismo en la gestión pública (persecución, desprestigio y estigmatización de organizaciones y dirigentes sociales, etc.) y a un aumento inusitado de la criminalización de la vida pública –no sólo la protesta social– y a un contexto de permanente represión a la acción política opositora.



El primer caso y que se constituyó en el ícono de la persecución y hostigamiento político para desarticular la acción de una organización social, fue el de Milagro Sala, líder y referente de la Organización Tupac Amaru en Jujuy, junto a otros y otras integrantes de esa organización en Jujuy y en Mendoza. Sin embargo, como señala la abogada defensora de la presa política Milagro Sala y defensora de los derechos humanos, Elizabeth Gómez Alcorta, esta iniciativa no constituyó un caso aislado. Se trata de “una serie de acciones que han sido llevadas adelante de modo ininterrumpido”. Es así que también se produjo la judicialización de actos de gobierno desarrollados durante los gobiernos kirchneristas, haciendo un uso para el rédito político y la estigmatización, con un abuso inusitado de la prisión preventiva (procedimiento observado y sancionado por organismos internacionales de observancia de los estándares en materia de derechos humanos de la OEA y de la ONU). Numerosos funcionarios del Gobierno anterior padecieron estos procedimientos, entre ellos el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, fue encarcelado y otras víctimas de persecución y hostigamiento sistemático por parte del poder judicial.

Así, el caso de Milagro Sala y otros y otras dirigentes de la Organización social Tupac Amaru en Jujuy y en Mendoza fueron casos emblemáticos, pero no los únicos de persecución política a partir del Gobierno de Cambiemos, haciendo de la persecución política una de las maneras de desarticular la militancia social y política y al mismo tiempo de un pretendido disciplinamiento social a través del miedo.

Asimismo, la criminalización de la protesta social, con la sanción punitiva de medidas de fuerza como cortes de ruta o de calles, como así también la utilización de la fuerza pública y posterior procesamiento en las protestas sociales, hicieron que en poco tiempo un gran número de militantes y/o simples participantes de protestas tuvieran días de encarcelamiento y procesamientos judiciales.

Violencia institucional

Las referencias que marcaron el gobierno de Cambiemos en cuanto a su política de otorgarle atribuciones a las fuerzas de seguridad para que actuaran abandonando procedimientos de respeto de derechos de los ciudadanos, remite inicialmente a dos casos de violencia institucional que se constataron a poco de iniciado este gobierno. Por un lado, el del policía Luis Chocobar que, como se ve en un video de cámaras de seguridad, mató por la espalda a un ladrón desarmado. El uniformado fue recibido por el presidente Mauricio Macri a pesar de estar procesado por la Justicia. De hecho, ante la apelación de sus abogados, los jueces decidieron confirmar su procesamiento e irá a juicio oral, tal como informó el diario Clarín. El aval gubernamental del propio presidente como así



también el de su Ministra de Seguridad, dio lugar a la luego extendida Doctrina Chocobar: disparar en cualquier situación. El otro caso es la muerte de un joven de 12 años llamado Facundo en la provincia de Tucumán, también a manos de la Policía.

Pero además vale mencionar la muerte de Santiago Maldonado en el 2018, que estuvo casi 80 días desaparecido luego de una represión de parte de la Gendarmería. Luego del fallecimiento del joven mapuche Rafael Nahuel, también en la Patagonia, tras recibir un disparo por la espalda durante un operativo llevado a cabo por la Gendarmería. Otros casos fueron los procedimientos de “disuasión” con la utilización de gases y balas de goma lanzados contra quienes se manifiestan, como sucedió en diciembre 2017 ante el proyecto de reforma previsional impulsado por el gobierno.

Se amplía el accionar de las organizaciones de DDHH

Ante la política de Cambiemos y los retrocesos sufridos en materia de DDHH, surgen nuevas organizaciones y/o las existentes amplían su accionar. Es por ello que Gómez Alcorta se refirió a la importancia de pensar en un “nosotros” que va “más allá de la temporalidad” e incluye a “los que estamos hoy, los que vendrán, nuestros hijos y nietos”. Para con quienes tenemos la responsabilidad de “conocer lo que nos pasó como sociedad”, que permita marcar siempre “un límite infranqueable sobre las capacidades de letalidad, brutalidad y crueldad que puede tener el ser humano”.

En el escenario de las políticas neoconservadoras, aparece como principal estrategia la eliminación de la pluralidad y el disenso, las políticas de represión, encausamiento, judicialización y detenciones arbitrarias de dirigentes e integrantes de organizaciones sociales.

Los mecanismos para desintegrar a las organizaciones sociales se producen, al menos en dos planos consecutivos. Por un lado, atacando a las cabezas de las organizaciones y movimientos sociales (líderes, referentes, activistas), dejando a la orgánica sin “representantes” que visibilicen y activen políticamente la lucha; por el otro, golpeando a la periferia (Svampa, 2005), es decir, les participantes que se incluyen en las organizaciones sin una identidad política de pertenencia con los movimientos; este conjunto de integrantes son quienes sufren la asfixia de recortes en planes sociales y este es uno de los motores por el que cortan el lazo comunitario con los movimientos.

Pese a las dificultades de sostenimiento y a la extrema criminalización, las organizaciones sociales encaran procesos de resistencia de la mano de conjuntos de militantes, aquellos con mayores posibilidades de enfrentar la embestida bien sea por la identidad



Argentina

política construida, por las condiciones socio-económicas o por las complejas y diversas vinculaciones con la organización comunal. Son quienes sostienen las prácticas político educativas y la lucha en las calles.

Las políticas estatales de desintegración de las organizaciones sociales son acompañadas desde el discurso de los medios de comunicación, quienes reavivan miradas estigmatizantes y se construye consenso sobre los movimientos sociales y sus miembros como clientelistas, vagos, estafadores, criminales.

Con el aval del gobierno y el acompañamiento de gran parte de la clase media que se desmarca de los sectores más empobrecidos, los gobiernos provinciales recurrieron a la intimidación, la represión y la criminalización como forma de resolver conflictos sociales.

Este consenso represivo también incluye la legitimación de la intervención violenta de las fuerzas policiales, del accionar irregular (ilegítimo) del poder judicial y de la arbitrariedad del poder ejecutivo. Más adelante, conforme se irá agudizando el mapa de represiones nacionales, quedará socialmente aceptada la desobediencia y el desacatamiento a los petitorios constantes de distintos organismos entre ellos, los de derechos humanos.

Se puede afirmar en consecuencia que los mecanismos de desintegración y de criminalización se producen en escalada, la violación a los derechos están *encadenados* (tanto hacia el interior de las provincias como a lo largo del país) dando cuenta de un mapa general de persecuciones y hostigamientos *en incremento*, frente a los cuales son las organizaciones de DDHH quienes actúan.



4

MOVIMIENTO SINDICAL

Históricamente, en los “últimos 70 años”, el movimiento obrero, aún con diferencias internas, se había mantenido dentro del peronismo, del que se consideraba “columna vertebral”. Eso le permitió actuar como sujeto político, algo que el poder económico y especialmente las dictaduras, siempre resintieron.



Argentina

La política neoliberal que llevó adelante el menemismo no eliminó la “columna vertebral” sindical, pero la dañó seriamente. La separación de algunos sindicatos de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) para crear la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), dando fin a “70 años” de central única, así como la fractura interna de la CGT, disminuyó notablemente la acción del movimiento obrero como sujeto político colectivo. La central sindical es la que organiza al trabajador como sujeto político.

Si bien el gobierno kirchnerista empoderó al sindicalismo y logró una inédita estabilidad del Ministerio de Trabajo (con un mismo Ministro) durante tres presidencias, el movimiento obrero no logró reconstituirse plenamente como sujeto político y nuevas divisiones dentro de la CGT y de la CTA fueron aprovechadas para que en el 2015 llegaran con posiciones debilitadas frente al proceso electoral.

Si bien el gobierno de Macri cuando asume hacia finales de 2015, tiene entre sus objetivos la destrucción/debilitamiento del movimiento sindical argentino, sin embargo, llegó a la presidencia con el apoyo de una parte del mismo, ya que se encontraban enfrentados a la ex presidenta Cristina Fernández y no apoyaron la fórmula de Scioli-Zanini. Es por ello que uno de los desafíos que debió afrontar el movimiento sindical, no sólo fue el de hacer frente a las políticas de ajustes del nuevo gobierno neoliberal, sino reconstituir la fuerza de ese movimiento en cuyo seno convergen vertientes de muy distinto carácter y que, a pesar de que algunos dirigentes/sectores gremiales fueron aliados, rápidamente sus bases sintieron la estigmatización y la fuerza de la embestida del gobierno de Macri contra ellos. Fue por eso que advirtieron que debían salir de esa encerrona y alejarse de lo que constituyó un “gobierno de empresarios para empresarios con un gabinete de CEOs”. Fue necesario intentar recuperar el lugar del sindicalismo como sujeto político colectivo, enfrentando al mismo tiempo la necesidad de reconstituirse unitariamente, incorporando en su seno las motivaciones de los nuevos movimientos populares.

El objetivo del gobierno de Macri es disminuir el nivel de vida y la estructura productiva de Argentina, para poder insertarla en la dinámica de la competitividad a la baja, que mueve el mercado de capitales global. Para ello necesita eliminar las instituciones creadas por el peronismo, que distinguen a la Argentina del resto de los países de América Latina, principalmente los sindicatos, las jubilaciones, la industrialización, la ciencia y la tecnología, los remanentes del Estado de bienestar y el tamaño de la clase media. En Argentina se mantiene un alto nivel de sindicalización, comparado con otros países de la región, como así mismo los sindicatos tienen una importante actividad respecto a sus afiliados, principalmente por poseer el manejo de las obras sociales (régimen de seguridad social de protección de la salud, de aporte obligatorio por parte de empleadores y trabajadores formalizados).



Argentina

Se sostiene –desde el gobierno– que sin terminar con el actual modelo sindical argentino no es posible instalar el modelo económico que exigen “los mercados” y propone eliminar lo que llama “los cánceres” del sindicalismo argentino: la actividad política de los sindicatos, la personería gremial para el sindicato más representativo, las paritarias y las obras sociales sindicales.

Así, la capacidad de resistencia como así mismo el nivel de movilización social de los sindicatos y de las centrales sindicales durante los cuatro años del Gobierno de Macri, dependieron en gran medida de la rama de actividad a la que se perteneciera y de la trayectoria organizativa. Así, los sindicatos ligados a servicios: principalmente bancarios, camioneros, entre otros, fueron quienes pudieron alcanzar conquistas (salariales) más importantes por su capacidad de disputa ya que su actividad (y por tanto su movilización) se producen en el seno de sectores económicos que poseen grados de rentabilidad en el actual modelo económico. No sucede lo mismo con sindicatos de sectores cuya actividad productiva se vio seriamente afectada por el modelo económico de Macri, fundamentalmente los ligados a la industria con una sostenida caída de la actividad económica del sector.

Sin embargo, los sindicatos ligados a la actividad estatal fueron quienes sufrieron las mayores embestidas, siendo uno de los más golpeados el gremio docente, ya que por decreto a inicios del 2016 se modificó la ley de financiamiento educativo y se eliminó la paritaria nacional docente. Los sindicatos docentes de las distintas provincias como así a nivel nacional los universitarios, mantuvieron a lo largo de todo el gobierno de Macri un importante nivel de movilización y lucha. Los sindicatos estatales en general (salud, educación, trabajadores del estado nacional), nuevos colectivos sindicales (como el de ciencia y técnica), los de trabajadores de prensa por la embestida contra los medios de comunicación públicos (Agencia Telam, canales de TV) fueron los que tuvieron una fuerte movilización tanto por los despidos sistemáticos en el achicamiento del Estado promovido por el gobierno de Cambiemos, como así también por la sistemática deslegitimación de lo público y el intento gubernamental de desacreditar el sector y –particularmente– a sus trabajadores/as.

Todo este proceso de permanente movilización sindical y social desde el inicio del gobierno de Macri, en el que además numerosos sindicatos se articularon a movilizaciones y luchas de los denominados “movimientos sociales” que representan básicamente a trabajadores de la economía popular, hizo que la cúpula de la CGT se viera rebasada en su capacidad de conducción política por su cercanía al gobierno.

Surgió así, en el seno de la CGT, la Corriente Federal de Trabajadores que articuló su movilización con la CTA Autónoma y CTA de los Argentinos, en el denominado Frente



Argentina

Sindical. Recordemos que durante el gobierno de Cristina Fernández la CTA –Central de Trabajadores Argentinos– creada en el año 1992 frente a las políticas neoliberales de Carlos Menem, se dividió en esas dos CTA: Autónoma y de los Argentinos.

De modo que uno de los hechos políticos más significativos a nivel del movimiento sindical, lo constituyó el anuncio en el mes de octubre de 2019, de la decisión del Congreso de la CTA de los Argentinos de iniciar el proceso de unificación con la CGT, hecho al que asistieron la conducción de la CTA Autónoma.

Finalmente hay que destacar otros fenómenos que se desarrollan actualmente dentro del movimiento obrero argentino. Uno de ellos es la revolución interna que ha significado la multiplicación por cinco de los delegados y delegadas sindicales elegidos en los lugares de trabajo. Si en el año 2000 había 20.000 delegados y delegadas, actualmente la cantidad se estima entre 75.000 y 100.000. Decenas de miles de jóvenes han ingresado a la militancia sindical en la última década y media, incluyendo una cantidad inédita de mujeres. El proceso es potencialmente muy positivo, pero también hay que tener presente que esos y esas jóvenes han ingresado al sindicalismo cuando los lazos entre la política y el movimiento obrero se habían debilitado. Los y las jóvenes sindicalistas precisan capacitación, una ética militante basada en la solidaridad y el amor al pueblo, y sobre todo participación con poder real en las instancias orgánicas de los sindicatos.

Otro de los grandes desafíos al interior de los sindicatos tiene que ver con la creciente cantidad de mujeres que se han incorporado a la actividad sindical. Las reivindicaciones de paridad, de denuncia por la violencia de género al interior de los sindicatos y en los lugares de trabajo y de conformación de intersindical de mujeres constituyen una nueva agenda sindical y revelan una nueva etapa en el mundo sindical, tradicionalmente masculino y machista y, pasan de ser espacios masculinos de trabajadores formales, para constituirse en puentes de formalización de los excluidos y excluidas (vinculándose al movimiento de la economía popular), así como para incorporar herramientas de la igualdad de género.



Argentina



5

MOVIMIENTOS FEMINISTAS Y DE DISIDENCIAS. LA OLA VERDE⁴

El devenir del movimiento feminista de Argentina, va desde sus orígenes a inicios del siglo XX hasta nuestros días, pasando por la lucha por el voto femenino, el reconocimiento político y la lucha contra la violencia doméstica, hasta el reclamo que reúne hoy a la casi totalidad de las feministas: la legalización del aborto. En este proceso histórico es sumamente importante mencionar a los Encuentros Nacionales de Mujeres que desde el año 1986, se realizan en nuestro país de forma anual. En ellos se abordan y discuten las problemáticas centrales del género y es la expresión mayor del movimiento feminista y de mujeres en Argentina, que se da cita una vez por año en un encuentro de tres días, cada vez más multitudinario (llegando a doscientas mil participantes en La Plata en octubre 2019) en distintos lugares del país y totalmente autogestionado.

“Entre los principales logros de estos Encuentros podemos destacar que la gran mayoría de las mujeres que concurren a un Encuentro –así sea por una sola vez– al volver a su casa ya no son las mismas personas (tres o cuatro días de viaje, dedicados a ellas y a compartir su situación personal y su inserción en la sociedad con otras pares produce una revolución por dentro). Esto tiene un significado desde el feminismo: mujeres del movimiento de mujeres, que comienzan a tomar conciencia de sí mismas y de enmarcar sus demandas como derechos, que sin duda enriquece para la construcción de una sociedad más democrática, justa, igualitaria y solidaria para todo el conjunto social.” (Brugo Marcó, 2014).

⁴ Para la elaboración del presente apartado se toma como base lo referido a este tema en: *Documento del Colectivo Argentino de CEAAL: HACIA UNA LECTURA DE CONTEXTO, DE NUESTRAS ACCIONES Y DESAFÍOS COMO EDUCADORES Y EDUCADORAS POPULARES*. Elaborado para Asamblea Intermedia/Encuentro de Formación Política. Noviembre de 2018.



Argentina

Este proceso de ampliación de derechos y de la ciudadanía femenina y del colectivo LGTBIQ, se identifican como uno de los cambios más notorios en nuestro país, y con ello la fuerza del movimiento feminista argentino, cada vez más diverso, provocador e intergeneracional, en cuyo seno es posible reivindicar y reconocer distintos *feminismos* como así también organizaciones y movimientos que luchan por el reconocimiento de las diversidades (de identidades, sexuales, de género) y de disidencias respecto a la heteronormatividad y al sexismo binario.

“El movimiento feminista –recuperado después del terrorismo de Estado– emprendió una campaña contra la violencia, situando esta reivindicación entre las primeras de la agenda. Desde entonces no ha cesado el reclamo por exterminar la calamidad, lo que ha permitido conquistar las primeras leyes nacionales y provinciales que atendieron en primer lugar al orden doméstico. Pero la sanción de la ley 26.485 en 2010 para prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres fue un paso decisivo.” (Barrancos, 2017).

El feminismo, y sus diversas corrientes, se instalan cada vez con mayor fuerza como actor/ movimiento político en el escenario de nuestro país y región. Hoy se convirtió en una gran marea verde, multicolor, violeta, donde “Ni una Menos” se instala como hito en la historia de estas luchas, entramando a la diversidad de mujeres, organizaciones, jóvenes, estudiantes, trans, travestis y más, en un aullido de reafirmación de una lucha común. “Ni una Menos” surge como grito colectivo contra la violencia machista ante la necesidad de decir basta de femicidios, traspasando las fronteras y los límites de los distintos países en un reclamo colectivo, en un ejercicio de ciudadanía mundial, en la reivindicación del derecho de las mujeres a vidas libres de violencia machista. Grito de denuncia de la precarización de las condiciones de vida de mujeres, lesbianas, travestis y trans a causa de las políticas neoliberales y del ajuste estructural que nos afectan de manera diferencial; del sistema socioeconómico que habitamos que es capitalista y también profundamente patriarcal.

Estamos viviendo un momento histórico en nuestro país. Por primera vez se logra en el año 2018 que el debate por la legalización del aborto se instale en el Congreso de la Nación alcanzando su aprobación en la Cámara de Diputados, no así en la Cámara de Senadores. En el año 2019 nuevamente se presenta y si bien no se llegó aún al tratamiento parlamentario, los debates desarrollados durante su tratamiento en el 2018, hicieron que la gran marea verde se instalara en simultáneo en las calles, en los medios de comunicación, en las instituciones. Y fue uno de los ejes de debate en la campaña electoral 2019.

La aprobación de la ley es necesaria, son necesarias las condiciones de legalidad para el acceso igualitario, para evitar muertes, para garantizar el acceso a la salud integral y



Argentina

para que las mujeres y personas gestantes puedan gozar de una sexualidad que no sea meramente reproductiva, y para que las posibilidades de habitar en el deseo también sean reales.

El lema de la Campaña por la Legalización del Aborto es “Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no Abortar, Aborto Legal para no morir”. En él se sintetiza la concepción que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos y tal como se expuso en el debate del Senado por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), esta ley es la culminación de un proceso que comienza con la ley de educación sexual integral (ESI), la de salud sexual y reproductiva y por tanto, esta ley viene a completar en el plano legal esa secuencia.

La ESI, vigente desde 2006 por la Ley N° 26.150, no busca adoctrinar, sino escuchar, atender, acompañar y responder a las necesidades de chicos y chicas, habilitar el placer, busca ampliar la educación sexual para decidir y disfrutar. El respeto por la diversidad sexual, el cuidado de los cuerpos, la equidad de género y la valorización de la afectividad son algunos de los ejes que quedan solapados cuando hablamos sólo de educación sexual.

El tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo llevó cuatro meses de histórico tratamiento en el Congreso. Después de 13 años de su primera presentación, el 14 de junio de este año, luego de múltiples exposiciones (700) en comisión y una sesión maratónica de veintitrés horas, una coalición transversal de diputados y diputadas, acompañadas por una multitud en las calles, le dio media sanción “y el tema pasó a la Cámara Alta con un impulso sorprendente”. La presión de sectores conservadores políticos y religiosos logró que el Senado no aprobara la ley pero el cambio cultural que dejó el debate y la multitud comprometida, prefiguran que la aprobación es tan sólo y tan mucho, una cuestión de sostener y profundizar la disputa cultural en el mediano y largo plazo, a seguir defendiendo el derecho a decidir sobre su cuerpo de toda mujer.

“Si no se avanza en la ampliación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, significará mucho más que un fracaso para el movimiento feminista. Será el fracaso de una sociedad que se dejó amedrentar y manipular por los sectores más conservadores aliados a la jerarquía católica, los mismos que siempre pretendieron dejarnos como ciudadanas de segunda categoría...” (Carbajal, M: 2018). El movimiento feminista en su heterogeneidad, viene a recordarnos que es necesaria la pregunta, la deconstrucción de lo que aparece como dado, la irrupción de aquello que aparece como novedoso y por ende, por momentos, molesta e incómoda. En este sentido, el papel de les adolescentes es central.



Argentina

Hoy, en Argentina, la marea está integrada por un gran número de adolescentes y jóvenes; el feminismo se anuda, reafirma y revive su fuerza, su fuego, en ese encuentro entre los/as hijos/as y los/as nietos/as de las primeras feministas de nuestro país, en el impulso aguerrido y seguro de les adolescentes que vienen a indignarse frente a las injusticias y las violencias, contra el lenguaje, contra la reproducción de maneras solapadas de poderes patriarcales; que vienen a construir con novedosas y creativas maneras, a irrumpir con nuevas estrategias.

En las calles, en las plazas, en las escuelas secundarias, late una complicidad verde, única, que tiene como bandera la lucha por las autonomías, las libertades y el derecho al goce de les pibes, que tiene como bandera el derecho a SER y a construirse más allá de las categorías. Irrumpir- irrumpirse, siempre en colectivo, en marea. La lucha es pasado, presente y futuro, “no nos van a callar más, nos despertamos de la opresión, y cada vez somos más”.

De este modo, al fragor de la marea verde, se suman otras reivindicaciones y convergen otros movimientos como el llamado de las disidencias. La sigla LGBTTIQ contiene en su seno una gran heterogeneidad de grupos, colectivos, organizaciones que reivindican su derecho a SER. Luego de la conquista de la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Igualdad de Género, colocó un marco para las reivindicaciones de estos movimientos. Entre ellas destacamos dos de muy diverso carácter, pero que ponen en evidencia organizaciones y movimientos que entroncan en estas luchas: una es la de separación de Iglesia y Estado. La otra es la de cupo laboral trans.



6

MOVIMIENTO INDÍGENA

El movimiento indígena en la Argentina reviste muy diverso carácter según las zonas del país y las capacidades, tradiciones, organizaciones, etc., de los distintos pueblos. Todos los pueblos tienen una serie de reivindicaciones que son comunes: el derecho a su lengua, y por ello la educación intercultural bilingüe –reconocida en la Ley de Educación Nacional– fue una de sus conquistas. Sus formas organizativas, sus reivindicaciones y su capacidad de demanda y de lucha, como así también su integración con otros



Argentina

movimientos (por ejemplo, con expresiones del movimiento campesino) varían según las regiones y sus pueblos de pertenencia. No hay una consolidación de una articulación organizativa que sea representativa del conjunto y en los distintos momentos históricos las relaciones con los gobiernos nacional y provinciales son de muy diverso carácter.

La reivindicación del derecho a la tierra y a los bienes comunes y la defensa de territorios ancestrales, compartida por todos los grupos y organizaciones de pueblos indígenas, cobra significación en diversos sentidos: por un lado, frente a la expansión del desmonte hacia el Norte del país en función del modelo del agronegocio. Por otro lado, la resistencia y movilización ante el avance de la privatización y extranjerización de la tierra sobre todo en la Patagonia donde tiene particular peso la lucha del pueblo mapuche. Y una tercera son las resistencias frente a las prácticas extractivistas y de explotación mega minera, particularmente en la provincia de Neuquén contra el fracking en la explotación de Vaca Muerta pero también en Mendoza contra la explotación de potasio en Malargüe contra Potasio Río Colorado.

Las movilizaciones y acciones de resistencia y lucha de los pueblos indígenas han sido objeto de criminalización y brutal represión por parte del gobierno de Macri. En ese marco la desaparición y luego dudosa aparición de Santiago Maldonado en el marco de una represión y persecución llevada adelante por gendarmería, como así también el asesinato de Rafael Nahuel, fueron dos hechos que marcaron tanto el enfrentamiento del gobierno con el pueblo mapuche y quienes se solidarizan con esa lucha (el caso de Santiago Maldonado) como la movilización que se alcanzó en solidaridad desde diversos sectores sociales hacia esas luchas.



7

MOVIMIENTO AMBIENTALISTA

Al igual que el movimiento indígena, el movimiento ambientalista en Argentina tiene numerosas expresiones organizativas, distinto carácter reivindicativo y variados repertorios de lucha. En la actualidad no cuentan con una articulación unificada y se articulan con diversos actores sociales y expresan sus luchas reivindicativas en distintas expresiones político-partidarias.



Argentina

Una articulación con mayor presencia hace algunos años es la Unión de Asambleas Ciudadanas, que en su origen nucleó a las Asambleas por el Agua y en contra de la Mega minería. Estas asambleas de carácter más local y con presencia sobre todo en las provincias localizadas a lo largo de todo el macizo andino, fueron y en algunos casos actualmente son expresión de la movilización local en contra de los emprendimientos mineros y contra el fracking para la explotación gasífera y petrolera.

También pueden reconocerse como de defensa ambiental las organizaciones que luchan contra los agrotóxicos y cuya presencia son significativa en las provincias con plantaciones de soja y otras siembras sobre las que se realizan fumigaciones con glifosato. Estas organizaciones están trabajando en toda la zona con cultivos transgénicos y también donde se expande el desmonte con la pretensión de expandir la frontera agrícola con el modelo de los agronegocios. Estas resistencias en algunos casos se articulan a las luchas de los pueblos y organizaciones indígenas en su lucha por el derecho a la tierra como así también con organizaciones del movimiento campesino y de Agricultura Familiar.

La capacidad de movilización y de acción depende de coyunturas específicas y sobre todo de escenarios y condiciones locales, de cuánto las poblaciones de esos territorios asumen o no estas reivindicaciones, el carácter de las explotaciones a las que se oponen, los posicionamientos de los gobiernos locales y provinciales frente a estos temas, entre los más relevantes.

Bibliografía citada

- Abrevaya, S. (2018). “Nadie puede parar el viento”. En: <http://www.pagina12.com.ar/134017-nadie-puede-parar-el-viento>
- Barrancos, D. (2014). “Los caminos del feminismo en la Argentina: historia y derivas”. En Voces en el Fénix N° 32. Magnolias de Acero. Género. En: <http://www.vocesenelfenix.com/category/ediciones/n%C2%BA-32>
- (2017). “Violencia contra las Mujeres” en Documento: #NiUnaMenos, Vivas Nos Queremos.
- Brugo Marcó, N. “Historia sobre los Encuentros Nacionales de Mujeres”. En Voces en el Fénix N° 32. Magnolias de Acero. Género. En: <http://www.vocesenelfenix.com/content/historia-sobre-los-encuentros-nacionales-de-mujeres>
- Carabajal, M. (2018). “No negocien con nuestros cuerpos”. En: <https://www.pagina12.com.ar/131888-no-negocien-con-nuestros-cuerpos>. Visitada el 02 08 18
- Pérez, G; Natalucci, A. (Ed.) (2012). “Vamos las bandas. Organizaciones y militancia kirchnerista”. Buenos Aires: Nueva Trilce Editorial.



Argentina





Brasil





Brasil

MOVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL HOJE

Ana Patrícia Sampaio de Almeida, Socióloga,
Mestre e Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina
Grande, Assessora Técnica do Centro de Ação Cultural – CENTRAC.

INTRODUÇÃO

No início deste século, o surgimento de movimentos sociais transnacionais e articulados em redes, constituíram a grande novidade no Brasil. O avanço da constituição de movimentos sociais em torno dos direitos civis (movimento de mulheres, movimento LGBTI+, movimento negro, quilombola e indígena) denunciava a invisibilidade social desses indivíduos e a profunda desigualdade, característica da sociedade brasileira e latino-americana. Foi um período de surgimento do que Gohn (2013) denominou política de identidades e as experiências de gestão participativa (conselhos gestores de políticas públicas e orçamentos participativos) em cidades administradas pelo partido dos trabalhadores (PT), que se apresentaram como modelos de reconhecimento desses movimentos sociais como sujeitos políticos e interlocutores no espaço público. Programas públicos e a criação de conselhos e secretarias voltados para esses grupos populacionais foram desenvolvidos no interior das políticas de saúde, educação e assistência social por governos do campo democrático popular.

A luta pelo direito a ter direitos, que caracterizou os anos 1970 e 1980, colocou a construção da cidadania no centro das reivindicações dos movimentos sociais que se constituíram no período. Os movimentos sociais que se organizaram nos bairros das cidades de grande e médio porte em defesa da constituição de políticas de moradia, saúde, educação, emprego, e, no campo, pelo acesso a terra e regularização dos vínculos trabalhistas, além dos movimentos que se organizaram para defender os direitos de mulheres, população negra e população LGBTI+, compreendiam a democracia não apenas como modelo, como fórmula para acesso ao poder estatal, mas como condição para que a própria definição de quais os direitos da população brasileira pudesse ser feita por esses novos sujeitos políticos (os movimentos sociais) (Dagnino, 1994).



Neste contexto, a articulação em redes de movimentos sociais, sindicatos e ONG's conectados em fóruns e coletivos, organizados em encontros e plenárias, a partir de determinados temas e demandas, se apresentou como estratégia para enfrentar a nova realidade econômica e política. As redes se caracterizam pela fluidez na participação de seus membros, pela ausência de hierarquias, pela descentralização e pelo pluralismo organizacional e ideológico. Nesse sentido, as características das redes de movimentos sociais indicadas por Scherer-Warren têm similaridades com as características dos movimentos que se constroem em redes por meio das novas tecnologias de informação (Castells, 2013) e dos “novíssimos movimentos sociais” surgidos depois da grande crise capitalista de 2008 e criados a partir das ocupações de praças e ruas na chamada primavera árabe, movimento dos indignados em Portugal e Espanha e as jornadas de junho de 2013 no Brasil.

Durante as gestões do Partido dos Trabalhadores no executivo federal o desemprego diminuiu, o acesso ao crédito para o consumo aumentou e o programa Bolsa Família tirou milhões de famílias brasileiras da pobreza absoluta (Fagnani, 2011). Entretanto, a massa de empregos criada caracterizaram-se pela baixa remuneração e precariedade e não havendo uma melhoria substantiva nas condições de vida dos milhões de pessoas trabalhadoras que dependem de transporte público e dos serviços públicos de educação e saúde. Os investimentos federais nessas políticas simplesmente não cresceram ou tiveram um crescimento residual nesse período (Pochmann, 2012). Ou seja, as condições de vida da população brasileira em nossas cidades continuaram muito ruins.

Nos últimos anos houve um aumento significativo no número de greves realizadas no país. Cresceram também o ativismo virtual e os coletivos de jovens organizados de maneira horizontal, descentralizada e em defesa dos direitos da população negra, das mulheres e da população LGBTI+. Também cresceram os coletivos de artistas das mais diversas áreas (artes plásticas, cinema, teatro, música, dança, artesanato) cuja principal característica tem sido o uso das novas tecnologias de informação e das mídias sociais (*facebook, twitter, instagram, whatsapp*) como formas de comunicação, articulação e divulgação das ideias e bandeiras dos movimentos. Ou seja, o quadro de deterioração da economia e das condições de vida e trabalho da população brasileira criou um ambiente para a organização e a mobilização de parcelas significativas da sociedade, ainda que sem uma direção ou projeto político bem definido.

Embora algumas das atuais características dos movimentos sociais estivessem presentes desde o final dos anos 1990 e início dos anos 2000, as novas mídias sociais e tecnologias de informação e comunicação parecem ter proporcionado uma maior visibilidade a um número também crescente de inquietações e demandas e aumentado sua capacidade de articulação, pela rapidez e facilidade com que ideias e propostas circulam não ape-



Brasil

nas entre as pessoas diretamente interessadas na questão, mas também entre os seus próximos em progressão geométrica. O que se por um lado, aumenta a capilaridade de movimentos que agora se organizam como redes, fóruns, frentes e coletivos, por outro, os tornam cada vez mais plurais em suas formas de organização e em seus horizontes ideológicos e políticos e dificulta a construção de projetos societários de oposição e enfrentamento à ordem do capital.

Na construção dos atuais movimentos sociais parece sobressair a necessidade de constituição, no mundo virtual e no mundo real, de espaços e formas de sociabilidade em que diferentes ideias, posições e mesmo projetos societários possam ser expressos. O mais importante parece ser a própria existência do movimento e as formas de expressão de seus anseios (a música, o teatro, o escracho, o filme, o meme). Uma vez que pouco se espera das estruturas políticas existentes (partidos, sindicatos, parlamentos), a maior conquista, no momento, parece ser o desejo, ainda que sem direção, de mudar. Quais mudanças e como essas mudanças serão processadas é uma questão em aberto.

OS MOVIMENTOS SOCIAIS MAIS ATIVOS NO BRASIL



1

MOVIMENTO FEMINISTA E DE MULHERES

O movimento feminista brasileiro é formado por associações e coletivos de diferentes orientações e características, organizados de maneira mais ou menos informal, muitos dos quais preferem utilizar como referência a denominação “movimento de mulheres”. Não existe uma separação ou hierarquia entre um movimento de mulheres e um movimento de feministas. É a partir de um forte movimento de base, popular, do campo e da



cidade que se constitui uma prática feminista que parte das lutas por mudanças. Com a participação, formação e radicalização, o conjunto das mulheres vai incorporando de forma mais consciente e explícita o feminismo.

O movimento feminista no Brasil acompanhou as demandas do novo milênio com a inclusão de novos temas à sua agenda como a diversidade sexual, racial e o questionamento da maternidade como uma obrigação. E através das redes sociais e blogs, a nova geração de feministas encontrou uma plataforma para expor suas ideias.

O Movimento feminista e de mulheres compreende que a igualdade só existirá de fato se alcançar o conjunto das mulheres. Isso remete não só à incorporação da dimensão de classe, mas também às outras formas de opressão e discriminação com que vivem as mulheres, como é a questão da opressão racial, da sexualidade e de geração. A experiência feminista é de construção de uma nova identidade coletiva das mulheres e de seu reconhecimento como sujeitos. Isso significa também forjar uma nova subjetividade, de desmercantilização da sexualidade e de autonomia. A utopia do feminismo antipitalista aponta para um questionamento global do modelo atual e para a construção de novas práticas que buscam superar as falsas dicotomias, que opõem razão e emoção, objetivo e subjetivo, público e privado.

Em 2006, durante o governo Lula, foi sancionada a Lei Maria da Penha que pune com mais rigor os casos de violência doméstica. A lei foi saudada como um grande passo para a prevenção da violência doméstica contra as mulheres.

Igualmente, cresceu dentro do movimento feminista, a preocupação com o corpo da mulher e o uso que a sociedade, os homens e ela mesma fazem deste corpo. Neste sentido, a organização **Marcha das Vadias** é um exemplo do uso do corpo feminino como protesto.

– *Marcha das Vadias*

A Marcha das Vadias (Slutwalk) teve início em 2011, na cidade de Toronto, no Canadá, quando, após diversos casos de estupro, um policial responsável por orientar a comunidade sobre segurança, “aconselhou” às mulheres a não se vestirem como sluts⁵ (vadias, em inglês), para evitar o estupro. A partir desse posicionamento, universitárias de Toronto se reuniram e organizaram a Slutwalk, onde marcharam contra a culpabilização das vítimas de estupro e a criminalização da sexualidade feminina e, ainda, a favor da liberdade das mulheres na escolha do que e como vestir.

5 A palavra utilizada em inglês foi “Slut” que, além de vadia – termo utilizado nas Marchas do Brasil –, pode significar puta ou ainda outras traduções possíveis. Por exemplo, em Portugal é utilizado o termo “Marcha das Galdérias” e na Argentina é utilizado o termo “Marcha de las putas”.



A primeira marcha no Brasil ocorreu na cidade de São Paulo, no mesmo ano (2011), reunindo cerca de 300 pessoas, com o lema central inspirado no fato ocorrido no Canadá e se espalhou pelas principais cidades do país desde então em edições anuais, sendo compostos, majoritariamente, por mulheres jovens.

Por se tratar de um movimento contemporâneo, em que cada localidade e edição têm características únicas, que está em constante mudança e transformação, fica difícil pontuar o que a Marcha das Vadias de fato é e a que se propõe de modo unívoco.

Sobre a forma de comunicação utilizada pelas manifestantes, tem-se uma seleção de mensagens com conteúdos críticos em cartazes e inscrições no corpo que busca expressar as formas de resistência cultural expressada pelos movimentos sociais e a forma de comunicação utilizada virtualmente é a organização pelo Facebook o que caracteriza um momento contemporâneo de ativismo em que muitas das manifestações acabam ocorrendo a partir de envolvimento com as redes sociais. Desde a sua primeira edição, a divulgação das marchas se inicia de forma virtual, seguida da criação de materiais específicos para divulgação: blogs, cartazes digitais, banners e vídeos. O uso da internet contribui para organizações que buscam ser descentralizada e horizontalizada, ou seja, sem lideranças oficiais –o que não significa que não existam lideranças “informais” – ou, necessariamente, pré-vinculações com outros coletivos, organizações, tampouco partidos políticos.

Aqui o próprio corpo é utilizado enquanto plataforma, constituindo um “corpo político”, um corpo agente na esfera pública e política. Por isso, a Marcha das Vadias pode ser entendida enquanto um conjunto de performances individuais e/ou coletivas, que se dão no espaço urbano, reafirmando o impacto de ocupar as ruas, sendo uma prática política compreendida enquanto uma atuação feminista que se desloca da dicotomia público e privado.

– *Marcha Mundial das Mulheres*

As principais características que levaram à construção da Marcha Mundial das Mulheres como um movimento permanente no Brasil e em todo o mundo foram a intenção de mudar a vida das mulheres em um só movimento. Igualdade para todas. Fortalecimento de espaços coletivos das mulheres: populares, autônomos e diversos. Ações com criatividade para enfrentar o capitalismo patriarcal, racista e lesbofóbico. Construção de alianças com os movimentos sociais em luta para transformar o mundo. Vincular o trabalho permanente em âmbito local com os temas e processos globais. Solidariedade e internacionalismo.



A Marcha Mundial das Mulheres no Brasil se fortalece no 1º Fórum Social Mundial -2001-quando se formula a “Carta das Mulheres Brasileiras” que exigia terra, trabalho, direitos sociais, auto determinação das mulheres e soberania do país. Atualmente, a MMM está organizada em 20 estados do Brasil a partir de núcleos e comitês, nas cidades e estados.

A cada reunião nacional, os comitês estaduais indicam representantes para participar. Além disso, uma coordenação executiva é responsável pelo seguimento das tarefas e processos. O coletivo de comunicadoras da MMM tem como objetivo construir uma comunicação popular e feminista, em convergência com os movimentos sociais, integrando o feminismo da MMM nas redes, no campo e na cidade.

– *Marcha das Margaridas*

A ação, voltada à luta da mulher no campo é organizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), acontece em Brasília, sempre em agosto, em referência a morte da trabalhadora rural e líder sindicalista Margarida Maria Alves, assassinada em 12 de agosto de 1983 quando lutava por direitos trabalhistas para população trabalhadora da zona canavieira do estado da Paraíba, na região nordeste do Brasil.

A Marcha acontece desde 2000 e se repete a cada 4 anos. A primeira edição, reuniu cerca de 20 mil agricultoras, quilombolas, pescadoras e extrativistas de todo o Brasil. A marcha se repetiu nos anos de 2003, 2007, 2011, 2015 e neste ano de 2019, reunindo cerca de 100 mil mulheres de todo o país e representantes de cerca de 26 países, como Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Guatemala, Austrália, Inglaterra, Suíça e Quênia.

Em sua sexta edição, o evento trouxe uma plataforma política em vez de uma pauta. O documento, produzido a partir de diálogos e debates com mulheres da base, reafirma a defesa de temas como a terra, a água, as práticas agroecológicas, as políticas de educação e saúde, o combate à violência de gênero, a preservação da Previdência social, entre outros.

Desde o seu surgimento, a Marcha vem se construindo como a maior e mais efetiva ação de luta das mulheres do campo, da floresta e das águas, contra a exploração, a dominação e todas as formas de violência e em favor de igualdade, autonomia e liberdade para as mulheres.

– *Marcha das Mulheres Indígenas*

Com o tema “Território: nosso corpo e nosso espírito”, mais de 2 mil mulheres de mais 300 diferentes povos indígenas de todo o Brasil se reuniram entre os dias 9 e 13 de agos-



to de 2019, na primeira Marcha das Mulheres Indígenas, em Brasília (DF). Surge com o objetivo de dar visibilidade e reconhecimento à luta das mulheres indígenas pelos direitos humanos e pelo cuidado com a Mãe Terra, discutindo temas como a violência familiar e interétnica, o acesso aos meios técnicos e financeiros para a geração de renda, a saúde reprodutiva, a soberania alimentar, a participação das mulheres nas decisões de políticas dos governos e vários outros temas, tudo com base na luta pelo território, pauta central para as indígenas.

– *Marcha das Mulheres Negras*

Ato que reúne uma diversidade de mulheres e organizações que atuam em defesa da população negra e que militam pelo fim do racismo e se opõe a atual conjuntura política. O carro-chefe da mobilização é o fim da opressão racial, mas também grita pela extinção do feminicídio, LGBTfobia, mortalidade materna, violência obstétrica e racismo religioso e ambiental. O evento acontece no dia 25 de julho, reconhecido pela ONU como o Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha. No Brasil, a data também celebra o Dia Nacional de Teresa de Benguela, líder quilombola que viveu no século XVIII e ajudou comunidades negras e indígenas na resistência à escravidão.



2

MOVIMENTO NEGRO

O Movimento Negro é uma forma de sintetizar todas as reivindicações ao longo da História pelos direitos da população negra no Brasil, que sofre há séculos com o racismo estrutural e suas consequências. Uma estrutura perversa e histórica pautada em racismo, domínio e poder sobre os territórios, corpos, culturas, saberes e conhecimentos dessa parcela significativa da população brasileira.

Atualmente, o Movimento Negro é considerado plural, levantando bandeiras progressistas que vão do combate ao racismo a diversas outras vertentes, como feminismo, LGBTI+ e tolerância religiosa, mas a marca que permanece é o discurso da denúncia explícita, contundente e recorrente do racismo como algo não só existente, mas atuante



na sociedade brasileira, da dívida histórica dos mais de 300 anos de escravidão e da igualdade de oportunidades e inclusão social.

Atualmente o problema de maior relevância para o Movimento Negro no Brasil é o aumento alarmante de mortes de jovens negros, pobres e das periferias, evidenciando o genocídio em curso em todo o país. As mortes são em sua maioria execuções cometidas, sobretudo, pelas forças policiais. Os dados falam por si: no Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Todo ano, 23.100 jovens negros de 15 a 29 anos são mortos.

Uma narrativa oficial que legitima estas mortes é a famosa “guerra às drogas”, que banaliza a morte de corpos negros em favelas e periferias. Tal projeto encontra seu complementar no sistema penal brasileiro, cuja população carcerária já é a terceira maior do mundo — e novamente: são corpos negros de homens e mulheres que seguem nas prisões brasileiras.

Tal situação está agravada com as políticas ultraliberais do governo Jair Bolsonaro e o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sergio Moro, que dá carta branca para o genocídio da população negra e pobre, respaldando a violência da polícia, do Estado e da “guerra às drogas”, como política de criminalização da juventude e não de enfrentamento efetivo ao narcotráfico.

Atualmente o Movimento Negro tem como principais representantes:

– ***MNU - Movimento Negro Unificado***

Organização pioneira na luta do Povo Negro no Brasil. Desde seu surgimento em 1978 (em plena ditadura militar) sempre foi um referencial na luta contra a discriminação racial no país.

– ***Uneafro - União de Núcleos de Educação Popular para Negras/os e Classe Trabalhadora***

Rede de articulação e formação de jovens e adultos moradores de regiões periféricas do Brasil que se organiza em torno de núcleos: de cursinhos preparatórios para vestibulares e concursos, formação para o mercado de trabalho, cursos de formação política, de gênero, antirracista, diversidade sexual, combate às drogas e aperfeiçoamento jurídico.

– ***Coalizão Negra por Direitos***

Reúne entidades do movimento negro de todo o país para a incidência política no Congresso Nacional e em fóruns internacionais.



– *Articulação de Organizações de Mulheres Negras (AMNB)*

É uma rede de organizações de mulheres negras, constituída atualmente por 29 organizações distribuídas por todas as Regiões do Brasil. A AMNB tem como missão institucional promover a ação política articulada de grupos e organizações não governamentais de mulheres negras brasileiras, realizando o enfrentamento ao racismo, ao sexismo, à opressão de classe, à lesbofobia e a toda as formas de discriminação, a fim de contribuir para a transformação das relações de poder existentes no Brasil.



3

MOVIMENTOS DE JUVENTUDE

Ao se observar algumas das principais e mais visíveis mobilizações populares na contemporaneidade, encontramos a juventude em evidência. Ela tem estado presente em diferentes tipos de agrupamentos: coletivos, movimentos, comunidades virtuais, etc. As estratégias e métodos de atuação são vários: atos, marchas, tweetadas, ocupações de prédios públicos, apresentações culturais, escrachos, etc. As diferentes mobilizações encabeçadas por jovens possuem algumas características similares. São grupos não institucionalizados que se autodenominam apartidários, utilizam as redes sociais como estratégia de convocação, não possuem lideranças ou estruturas hierárquicas, se pautam pela horizontalidade, conciliam demandas pragmáticas e imediatas com insatisfações difusas e direcionadas ao sistema político e econômico como um todo. Essas juventudes têm produzido novas formas de participar, por meio da cultura, do engajamento socioambiental, das múltiplas identidades e pertencimentos religiosos e reinventaram táticas conhecidas, como manifestação de rua e ocupações, dando a elas novo sentido político. Sua atuação nas redes sociais também ressignificam a noção de esfera pública/ espaço público e pautam o debate político com frequência.

Depois de junho de 2013 e das ocupações das escolas em 2016, confirma-se o que alguns pesquisadores do tema indicavam: os/as jovens não rejeitam a política, mas querem reinventá-la. Ao extrapolarem a política institucional, os/as jovens ativistas disputam o sentido de ação política e criam uma nova gramática social, que ainda estamos por decifrar. Em 2013, por exemplo, o Movimento Passe Livre (MPL) insistia que a decisão



sobre o preço da tarifa do transporte público deve ser política e não técnica. Não é que ignorem a técnica, mas rejeitam a escala de prioridades das instituições e lideranças políticas.

Esses/as ativistas autônomos, isto é, não ligados a instituições ou movimentos tradicionais, recebem muitas críticas. Dizem que lhes faltam estratégias e definições programáticas que apontem para a finalidade futura da ação. O desafio talvez seja compreender essa perspectiva dentro da alteração da própria noção de futuro e projeto. Se os projetos e desejos, na sociedade governada pelo risco, voltam-se mais para o presente, a ação política também não estaria nessa mesma direção? Ao mesmo tempo, alterar o presente, não seria justamente a condição de possibilidade de projetar e alterar o futuro?

Num cenário polarizado como o que vivemos muitas forças e interesses estão em disputa. Portanto as juventudes não devem ser compreendidas como uma massa homogênea isenta das desigualdades e conflitos sociais. É preciso considerar que elas também se engajam em movimentos conservadores, autoritários e contraditórios. Pesquisas apontam que o apreço pela democracia vem crescendo década a década, mas é geralmente resultado de uma sofisticação política, associada à escolarização. De antemão, não podemos supor que jovens sejam naturalmente progressistas, mas que são mais dispostos/as a romper com a ordem social vigente, com um potencial revitalizador da sociedade, já que não estão ainda enredados/as pelo *status quo*.

– ***Movimento Estudantil***

O movimento estudantil tem sido o maior catalisador de insatisfação com o governo Bolsonaro. No primeiro semestre, a juventude foi responsável pelo maior movimento de resistência em 2019, com grandes atos nos dias 15 e 30 de maio e as mobilizações de 14 de junho e 13 de agosto, em defesa da Educação, contra cortes orçamentários e o esvaziamento de diversos programas de incremento ao ensino básico das redes estaduais e municipais (como alimentação escolar, transporte escolar e manutenção de escolas de período integral). Também estão nas pautas a participação estudantil, o debate e a desconstrução de racismo, machismo e LGBTfobia e a luta pela liberdade de cátedra (contra a perseguição de professoras/es) e contra a ampliação de escolas militarizadas.

Por todo o Brasil, foram duramente criticados os cortes no orçamento do Ministério da Educação e ainda o Projeto “Future-se”, apresentado pelo MEC em julho e visto como tentativa de privatização e descaso com a rede federal de ensino.

Nos atos do 7 de setembro (dia da Independência), as pautas foram a defesa da educação, da democracia, do emprego, da aposentadoria e do meio ambiente.



– ***UNE - União Nacional dos Estudantes***

A UNE é a maior entidade estudantil do país, representando estudantes de universidades de todos os 26 estados brasileiros. Fundada em 1937, a entidade participou das principais lutas políticas da história recente do Brasil como a luta contra a Ditadura militar de 1964, as Diretas Já e o Fora Collor. Além disso, a UNE defende as principais bandeiras de luta do movimento estudantil como o direito ao passe livre, o reconhecimento da meia-entrada e a destinação de mais recursos do governo para a educação.

– ***UBES - União Brasileira dos Estudantes Secundaristas***

A UBES foi fundada em 1948 no Rio de Janeiro e representa estudantes das instituições de ensino fundamental, médio e técnico em todo território nacional, tendo como objetivo defender uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade. Durante sua história, a UBES participou dos grandes acontecimentos políticos do país, conquistou direitos e fortaleceu o movimento estudantil como uma importante força política do país.

– ***Levante Popular da Juventude***

O Levante Popular da Juventude é um movimento de abrangência nacional que se auto-denomina politicamente alinhado à esquerda, tendo surgido originalmente no estado do Rio Grande do Sul por influência da Consulta Popular, do MST e do Fórum Social Mundial, no ano de 2005. Está presente em todos os estados brasileiros e se organiza a partir de três campos de atuação: Frente Estudantil, frente Territorial e Frente Camponesa.

A partir de um trabalho de educação popular, vem se consolidando nas periferias das principais cidades brasileiras na luta por direitos. Enquanto movimento social, o Levante Popular da Juventude fomenta processos de formação e organização de jovens nas comunidades, visando à constituição de lideranças oriundas destes contextos. Seu modo de recrutamento, visibilidade e denúncia faz uso das expressões juvenis que remetem a diversas formas de lazer como música, grafismo, faixas, gritos de luta, dança, teatro, escracho, dentre outras.

A carta de compromisso da organização defende a construção do que denominam democracia popular, com a reivindicação de socializar “as terras, a água, a energia, os meios de comunicação, o acesso à saúde, à educação, à moradia, ao transporte”. Comprometem-se em lutar pela soberania nacional contra o imperialismo e a favor de um “desenvolvimento sustentável” aos interesses do povo, ao lado do movimento feminista e contra o machismo, junto ao movimento negro contra o racismo, considerando que os setores oprimidos são os mais explorados pelo sistema capitalista. Inserem também na Carta Compromisso a luta contra a lesbofobia, a transfobia e a homofobia.



Brasil



4

MOVIMENTO LGBTI+ (LÉSBICAS, GAYS, BISEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSSEXUAIS, INTERSEXUAIS, QUEER+)

De uma forma geral, as principais pautas dos movimentos sociais LGBTs dentro no contexto político e social do Brasil dizem respeito a criminalização da homo-lesbo-bi-transfobia; reconhecimento de gênero através da inclusão do nome social - que já está sendo utilizado pelo poder público baseado no decreto federal nº 8.727 de 28 de abril de 2016; a despatologização das identidades trans; fim da cura gay; casamento civil igualitário; laicidade do Estado e o fim da influência da religião na política; leis e políticas públicas que garantam discriminação em lugares públicos, como escolas e empresas e fim da estereotipização da comunidade LGBTI na mídia.

As mobilizações públicas dos grupos como as Paradas (grandes atos públicos de caráter festivo e visibilidade) além de possuírem um caráter reivindicatório, servem para trazer à tona uma visibilidade do movimento, representando uma forma de luta pela afirmação da cidadania do sujeito LGBTI, e expressando a busca por políticas públicas que garantam as inserções desses sujeitos na esfera pública.

– ***Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais***
(ABGLT)

Primeira e maior rede de organizações LGBT brasileiras, que reúne cerca de 200 organizações espalhadas por todo o país, sendo considerada a maior rede do tipo em toda a América Latina. Com a criação da ABGLT, várias redes nacionais surgem pelo país, como a Associação Brasileira de Lésbicas (ABL), a Liga Brasileira de Lésbicas (LBL), a Associação Nacional de Travestis (Antra), o Coletivo Nacional de Transexuais (CNT), o Coletivo Brasileiro de Bissexuais (CBB) e a Rede Afro LGBT. Nesse novo momento, uma das características é a diferenciação de vários sujeitos políticos internos ao movimento: lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, com foco em demandas específicas de cada um desses coletivos.



Brasil



5

MOVIMENTOS SOCIAIS RURAIS

– *MAB - Movimento dos Atingidos por Barragens*

O MAB foi um movimento popular nacional criado nos anos 1970 para fazer frente aos planos de construção das grandes barragens hidroelétricas e organizar e lutar pelos direitos das famílias atingidas pela construção das barragens. Defende outro modelo de apropriação dos recursos naturais, justo, democrático e sustentável, que contemple as necessidades do povo brasileiro e não do grande capital. Para isso, defende a revisão do modelo energético brasileiro, que é baseado nas grandes hidrelétricas que fornecem energia subsidiada a grandes conglomerados industriais.

– *MMC - Movimento de Mulheres Camponesas*

Identifica-se como um movimento autônomo, democrático, popular, feminista e camponês, que tem empreendido lutas pelos direitos das mulheres e pela efetivação de um Projeto Popular para a Agricultura no Brasil. Em sua trajetória, tem reafirmado a luta das mulheres pela igualdade de direitos e pelo fim de qualquer forma de violência, opressão e exploração praticada contra a mulher e a classe trabalhadora. Dessa forma, se identificam com a produção de alimentos saudáveis, pela construção de um projeto de agricultura ecológico e pela luta pela libertação da mulher.

Organizado em dezoito estados brasileiros, resiste no campo às consequências econômicas, políticas, sociais e culturais do projeto capitalista e patriarcal que intensifica a exploração de trabalhadoras e trabalhadores, aumentando a violência e a discriminação contra as mulheres.

– *MAM - Movimento pela Soberania Popular na Mineração*

A expansão intensa da atividade mineradora na última década no Brasil causou, na mesma proporção, violações aos Direitos Humanos e conflitos nos territórios onde a mineração se estabelece. Diante deste quadro, um conjunto de militantes ligados a Articulação da Via Campesina Brasil passou a se dedicar na construção do movimento que tem como pauta o complexo da mineração no Brasil. Dessa articulação surge o MAM



em 2012 no estado do Pará, no enfrentamento ao Projeto Grande Carajás da empresa Vale. Atualmente, o MAM se organiza em nove estados mais o Distrito Federal: Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Piauí, São Paulo e Tocantins e tem atuado na busca de garantia de direitos das vítimas do rompimento das Barragens de Mariana (em 2015) e Brumadinho (2019), ambas em Minas Gerais.

O movimento atua, sobretudo, com camponeses/as, nas suas mais diferentes formas: quilombola, indígena, ribeirinha, cabocla, camponês de fronteira (que migrou de outros espaços), população prejudicada pelo desapossamento territorial pela crise estrutural do capitalismo no Brasil.

5.1 Movimento Sindical Rural

– *CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura*

A CONTAG foi fundada em 20 de dezembro de 1963 tornando-se a primeira entidade sindical nacional do campo composta por 27 Federações de Trabalhadores na Agricultura e 4.000 Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais.

– *Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (CONTRAF-BRASIL/CUT)*

Surgiu em 2004 no contexto do novo sindicalismo da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Atualmente está organizada em 20 estados congregando mais de 900 sindicatos e associações e 500 mil agricultores e agricultoras familiares.

– *Via Campesina Brasil*

Movimento internacional que reúne milhões de camponeses, pequenos e médios agricultores, sem terra, jovens e mulheres rurais, indígenas, migrantes e trabalhadores agrícolas. Construída sobre um forte senso de unidade, a solidariedade entre esses grupos, que defende a soberania alimentar, lutar pela terra e reforma agrária; a promoção da agroecologia e defesa de sementes locais e a promoção dos direitos camponeses e combate à criminalização dos camponeses como forma de promover a justiça social e a dignidade, opõe-se fortemente aos agronegócios que destroem as relações sociais e a natureza. No Brasil é composto por diversos movimentos sociais, entre eles MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra), MPA (Movimento dos Pequenos Agricultores), MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens), MMC (Movimento de Mulheres Camponesas) e MTD (Movimento dos Trabalhadores Desempregados).



– ***MST - Movimento dos Trabalhadores Sem Terra***

O MST surgiu da luta pela terra e pela Reforma Agrária nas regiões Sul e Sudeste em 1984 a partir da atuação da Comissão Pastoral da Terra – CPT. Hoje está organizado em 24 estados e cinco regiões do país organizando 350 mil famílias assentadas e acampadas através de estrutura democrática e participativa buscando a democratização do acesso a terra e a produção agroecológica de alimentos.

– ***Articulação dos Povos Indígenas do Brasil***

A APIB é uma instância de aglutinação e referência nacional do movimento indígena no Brasil, que nasceu em 2005 com o propósito de fortalecer a união dos povos indígenas, a articulação entre as diferentes regiões e organizações indígenas do país; unificar as lutas dos povos indígenas, a pauta de reivindicações e demandas e a política do movimento indígena; mobilizar os povos e organizações indígenas do país contra as ameaças e agressões aos direitos indígenas.

O movimento indígena articulado pela APIB reivindica do Estado Brasileiro o atendimento das demandas por Demarcação, desintrusão e proteção das terras indígenas. Fazem parte da APIB as seguintes organizações indígenas regionais: Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME), Conselho do Povo Terena, Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste (ARPINSUDESTE), Articulação dos Povos Indígenas do Sul (ARPINSUL), Grande Assembleia do povo Guarani (ATY GUASU), Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) e Comissão Guarani Yvyrupa.

– ***Ativismo alimentar***

O ativismo alimentar desenvolve-se como um guarda chuva que abriga diferentes movimentos e discussões de amplo alcance nas sociedades nos quais a comida segura aparece como elemento transversal. Dentro dele estão a agroecologia e a agricultura familiar; o movimento da segurança alimentar e nutricional; a agroecologia e os sistemas agroalimentares sustentáveis; o comércio justo; o *slow food*; o locavorismo ou local food; o vegetarianismo; o veganismo; o freeganismo, a alimentação viva e o mais recente, denominado *Banquetaço*, que envolve as famílias agricultoras, estudantes, intelectuais, chefes de cozinha, servidoras/es públicos e ativistas.

As ações do ativismo alimentar são voltadas para assuntos diversos como o agrobiopoder, a reforma agrária e a soberania alimentar; a ecogastronomia; as contaminações alimentares; a insegurança alimentar e a fome; o fortalecimento dos atores sociais que produzem comida (agricultores familiares, agroflorestais, quilombolas, ribeirinhos,



pescadores, indígenas, neoruralistas); o fomento de sistemas agroalimentares tradicionais; a valorização do prazer de comer; a importância da comensalidade; o bem estar animal; o questionamento das visões antropocêntricas; as questões de gêneros e valorização do feminino ligadas a diferentes instâncias do ato de comer. Todos esses temas, mesmo guardando suas especificidades, miram a busca pela “comida de verdade” termo cunhado na V Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, realizada em 2015.

A organização e divulgação dos eventos ocorrem através das redes sociais e as ações acontecem em espaços públicos sendo discutidas coletivamente. Em fevereiro de 2019, mais de mil pessoas, distribuídas em 41 cidades e vinte estados da federação, organizaram uma manifestação pública para protestar contra a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (Consea), considerado um “espaço institucional para o controle social e participação da sociedade na formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, com vistas a promover a realização progressiva do Direito Humano à Alimentação Adequada”. A ideia também foi comparar a comida agroecológica, livre de venenos, proveniente da agricultura familiar com o sistema agroalimentar hegemônico e o agronegócio, comandados pela indústria de agrotóxicos, insumos agrícolas, alimentos ultra processados e grandes redes varejistas.



6

MOVIMENTOS SOCIAIS URBANOS

6.1 Movimento Sindical urbano

O movimento sindical brasileiro desenvolveu-se sob um modelo de produção baseado em pilares que se encontram em franca corrosão ou já não mais existem. Durante o período fordista, a classe trabalhadora era predominantemente masculina, majoritariamente formal, concentrada em grandes locais de trabalho, com trabalhadores em tempo integral. Com as transformações do modelo de produção, o movimento sindical passou a ter muitas dificuldades em lidar com uma classe trabalhadora mais diversa e



regida por relações de trabalho mais inseguras, flexíveis e complexas. O conjunto de jovens trabalhadoras/es precárias/os possuem novas demandas, nova composição e, muitas vezes, uma nova forma contestatória.

As jornadas de junho de 2013 ocorridas nos principais centros urbanos brasileiros trouxeram algumas inquietações. Enquanto as manifestações se desenvolviam, uma pergunta pairava no ar: diante de tantos protestos e mobilizações nos quais a juventude dava a tônica, por que os sindicatos não estavam entre as forças motoras dos protestos? Para aumentar a ausência dessas organizações no cenário, uma greve geral foi convocada, pelas redes sociais, sem que os sindicatos, como outrora, protagonizassem a convocação.

Os acontecimentos das Jornadas de 2013 provocaram uma ruptura com a passividade produzida pelas conquistas no âmbito institucional na década anterior e uma nova relação geracional com a luta. Eram novos atores, sobretudo jovens, com novas demandas procurando novas saídas. Instaura-se, dessa forma, um novo ciclo grevista. A luta pelo direito à cidade e a luta por condições dignas de trabalho se entrelaçam nos grandes centros urbanos. As greves e as mobilizações dos/as trabalhadores/as voltam às ruas, ocupam a cidade e não se limitam mais aos arredores dos locais de trabalho.

Apesar da nova composição da classe trabalhadora, sua precarização no mundo do trabalho contemporâneo e a emergência de novos atores, os sindicatos não atualizaram sua atuação na mesma velocidade. De maneira geral, gerações que outrora protagonizaram momentos de combatividade permaneceram dirigindo e hegemонizando os sindicatos, deixando pouco espaço para renovação. Paulatinamente, essas organizações perderam relação com as necessidades da base que representam. Assim, de maneira geral, foi diminuindo a capacidade crítica dos sindicatos historicamente combativos e aumentando a distância das demandas cotidianas de novos grupos de trabalhadores e trabalhadoras.

A precarização, garantida sobretudo através da flexibilização das relações de trabalho, é o ponto chave contemporâneo dessa nova etapa. Assim, o trabalho intermitente, informal ou temporário, associado à fixação de metas inalcançáveis e ao prolongamento e intensificação das jornadas impõem, ao trabalhador e trabalhadora, uma realidade mais dura, insegura e alienante. Há diferentes conceitos usados para abordar esse sujeito social do mundo do trabalho contemporâneo: o “infoproletário” (Antunes; Braga, 2009); o “cibertariado”, (Huws, 2009); ou até mesmo o “precariado” (Braga, 2012).

Além dos referidos limites, o Movimento Sindical passou por profunda reestruturação com o reconhecimento das centrais sindicais em 2008, novos critérios de representatividade e repasse da contribuição sindical o que provocou a multiplicação de centrais sindicais em representação a um número considerável de sindicatos (certa de 17 mil).



Atualmente, as Centrais Sindicais de maior relevância no Brasil são: a Central Única dos Trabalhadores - **CUT** (1983); Central Geral dos Trabalhadores do Brasil - **CGTB** (1983); **Força Sindical** (1991); Nova Central Sindical dos Trabalhadores - **NCST** (2005); Central Sindical e Popular **CSP-CONLUTAS** (2004); **Intersindical** (2006); União Geral dos Trabalhadores - **UGT** (2007); Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - **CTB** (2007) e Central dos Sindicatos Brasileiros - **CSB** (2008).

O movimento sindical também muda a forma de ação, optando por agir mais na esfera parlamentar no papel de lobby, na tentativa de criar mecanismos legais de regularização das relações de trabalho em detrimento das negociações coletivas através da pressão imposta por mobilizações paredistas, assembleias, dentre outras formas. O fortalecimento das centrais com orçamentos expressivos permitiu que construíssem canais estreitos com os partidos políticos. Neste sentido, a ordem sindical elitizou a sua forma de ação pública participando da composição de partidos políticos e dos espaços de poder com sua agenda.

A consequência desse processo foi o distanciamento ainda maior entre a direção sindical e a base, retirando o senso de identidade, passando a/o dirigente sindical a ser vista/o como um ator político profissional, que ascende aos postos de poder utilizando a máquina sindical.

6.2 Movimentos Sociais de Luta por Moradia

– *CMP - Central dos Movimentos Populares*

Originária dos movimentos sociais dos anos 80 a CNP foi fundada em outubro de 1993 congregando representantes dos diferentes movimentos sociais buscando articular e fortalecer os movimentos sociais na luta por direitos e políticas públicas.

– *MLB - Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas*

Movimento social de abrangência nacional formado pelas famílias sem teto que lutam pela reforma urbana e pelo direito à moradia digna, buscando agregar famílias sem-teto na luta contra a especulação fundiária e imobiliária. É filiado à Central de Movimentos Populares (CMP).

– *MNLM - Movimento Nacional de Luta por Moradia*

O MNLM foi criado em 1990 no I Encontro Nacional dos Movimentos por Moradia. Atualmente está presente em 14 estados e no Distrito Federal estimulando a organização e articulação nacional dos movimentos de luta pela moradia.



– ***CONAM - Confederação Nacional das Associações de Moradores***

A CONAM foi fundada em 1982 a partir da luta dos movimentos populares e comunitários. Tem como objetivo organizar as federações estaduais, uniões municipais, associações comunitárias e entidades de bairro para atuar na questão do direito às cidades.

– ***MTST - Movimento dos Trabalhadores Sem Teto***

É um movimento social que organiza trabalhadores e trabalhadoras urbanos nos territórios periféricos para lutar por moradia digna, pela Reforma Urbana e pela construção do poder popular contra o capital e o Estado capitalista. Sua forma de atuação principal é a ação direta através da ocupação de bens imóveis que não atendem à sua função social, tendo também consolidado seu protagonismo entre os movimentos sociais através de manifestações e protestos a partir das Jornadas de junho de 2013. Atualmente o movimento organiza 55 mil famílias em 14 estados do Brasil.

– ***UNMP - União Nacional por Moradia Popular***

A UNMP iniciou sua atuação em 1989 a partir dos movimentos sociais por moradia do Paraná, São Paulo e Minas Gerais sendo consolidada em 1993 estando presente atualmente em 16 estados brasileiros lutando por moradia, direito à cidade, participação popular, produção habitacional com autogestão e propriedade coletiva.

– ***FPSM - Frente Povo Sem Medo***

Organização formada em 2015 como uma frente nacional de mobilização popular, a partir da associação entre partidos políticos, coletivos, movimentos sociais e centrais sindicais de esquerda. Atualmente luta contra os retrocessos e supressão de direitos imposto pelo atual governo e o conservadorismo.

– ***FBP - Frente Brasil Popular***

Tem origem em 2015 e reúne militantes de vários movimentos sociais, parlamentares e dirigentes de diversos partidos e correntes partidárias de centro esquerda de todo o Brasil em defesa da democracia e da construção de um país justo para o povo. Atualmente luta contra os retrocessos e supressão de direitos imposto pelo atual governo e uma nova política econômica.



Bibliografia consultada

- Antunes, R. e Braga, R. (orgs.). (2009). *Infoproletários: degradação real do trabalho virtual*. São Paulo: Boitempo.
- Braga, R. (2012). *A política do precariado: do populismo à hegemonia lulista*. São Paulo: Boitempo.
- Castells, M. (2013). *Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet*. 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar.
- Dagnino, E. Os movimentos sociais e a emergência de uma nova noção de cidadania. In: Dagnino, E. (Org.). *Os anos 90: política e sociedade no Brasil*. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 103-115.
- Fagnani, E. A política social do governo Lula (2003-2010): perspectiva histórica. In: *Revista Ser Social*, Brasília, v. 13, n. 28, p. 41-80, jan./jun. 2011.
- Gohn, M. DA G. (2013). *Movimentos sociais e redes de mobilizações sociais civis no Brasil contemporâneo*. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes.
- Hardt, M. E; Negri, A. (2014). *Multidão: Guerra e Democracia na era do Império*. Rio de Janeiro: Record.
- Huws, U. (2009). “A construção de um cibertariado? Trabalho virtual num mundo real”. In: Antunes, R. e Braga, R. (orgs.). *Infoproletários: degradação real do trabalho virtual*. São Paulo: Boitempo.
- CPDOC. Fundação Getúlio Vargas. Disponível em: <<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/>>
- CONTAG. Disponível em: <<http://www.contag.org.br/>>
- CONTRAF. Disponível em: <<https://contrafbrasil.org.br/>>
- CMP. Disponível em: <<http://cmp-sp.blogspot.com/>>
- MLB. Disponível em: <<https://www.mlbbrazil.org/>>
- CONAM. Disponível em: <<https://conam.org.br/>>
- VIACAMPESINA. Disponível em: <<https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-la-voz-las-campesinas-los-campesinos-del-mundo/>>
- MAM. Disponível em: <<http://mamnacional.org.br/mam/quem-somos/>>
- AMNB. Disponível em: <<http://www.amnb.org.br/sobre.asp#ancora>>
- UNMP. Disponível em: <<https://www.unmp.org.br/>>

Brasil



© Abraão Moura

LEVANTAMENTO POPULAR

LEVANTAMENTO POPULAR

Chile





Chile

MAPEO DE MOVIMIENTOS SOCIALES EN CHILE

Mario Garcés D.

Historiador, director de ECO, Educación y Comunicaciones

INTRODUCCIÓN

Los movimientos sociales han sido actores fundamentales en la historia social y política chilena. Prácticamente, no hay ningún capítulo importante, al menos desde el siglo XX, en que los movimientos sociales no hayan participado activamente como impulsores o como oponentes de reformas políticas, de mejoras en sus condiciones de vida o de proyectos de transformación social de mayor alcance.⁶

Hasta el golpe de estado de 1973, los principales movimientos sociales, de raíz popular, fueron el movimiento obrero, campesino y de pobladores (los pobres de la ciudad) que, en este texto, hemos denominados “movimientos históricos”. La represión sobre estos movimientos, desencadenada por la dictadura militar, encabezada por Augusto Pinochet, fue devastadora y de diversos alcances.

No obstante, la dictadura no pudo evitar la reorganización de algunos sectores y la emergencia de nuevas formas de acción colectiva, especialmente entre los jóvenes, las mujeres y los pobladores. De este modo, ya para los años ochenta, se comenzó a debatir y a admitir que estaban surgiendo “nuevos” movimientos sociales, noción a la que hemos asimilado, en este trabajo, a los movimientos sociales actuales más activos. Se trata, por cierto, de una opción discutible, ya que los actuales movimientos sociales son portadores de continuidades, pero también de sus propias innovaciones, tanto en lo relativo a los actores implicados, sus enfoques, repertorios de acción y propósitos. Con todo, la distinción nos permite no solo marcar la mayor diversificación de la acción colectiva, sino también identificar mejor a los nuevos sujetos sociales en movimiento⁷.

6 Para una mirada histórica de los movimientos sociales en Chile, se puede consultar, Mario Garcés. *El despertar de la sociedad. Los movimientos sociales en América Latina y Chile*. LOM Ediciones, Santiago, 2012. Pp. 73 y ss.

7 Para el debate sobre la noción de “nuevos” movimientos sociales, se puede consultar: Geoffrey Pleyers. *Movimientos sociales en el siglo XXI*. CLACSO, Buenos Aires, 2018. Pp. 27 y ss.



Chile

Finalmente, nos hemos visto obligados a incluir una *adenda*, ya que este trabajo lo elaboramos con anterioridad al 18 de octubre de 2019, día en el cual se desencadenó en Chile el mayor estallido social de los últimos 30 años. Los movimientos sociales, en este nuevo contexto, recuperaron un inusitado y vigoroso protagonismo e instalaron la demanda de una nueva Constitución Política del Estado, que reemplace a la actual, heredada de la dictadura que restringe y limita la democracia y consagra institucionalmente el neoliberalismo.



1

PRINCIPALES MOVIMIENTOS SOCIALES

1.1. Históricos, pero que mantienen algunas formas de expresión actual, aunque claramente más debilitada (o en estado de *latencia* siguiendo la categoría de Alberto Melucci):

- Movimiento Obrero
- Movimiento Campesino
- Movimiento de Pobladores

1.2. Los nuevos (o actuales) movimientos sociales más activos en la fase actual:

- Estudiantil
- Mapuche
- Mujeres/feminismo
- Socio ambientales
- Profesores
- Regionales
- Derechos Humanos
- No + AFP



Chile



2

BREVE CARACTERIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS HISTÓRICOS

- **Movimiento Obrero**

El movimiento obrero se encuentra hoy fuertemente debilitado, tanto por razones estructurales (los cambios en el modelo de desarrollo que se verificó en dictadura y la legislación neoliberal correspondiente) como por razones de tipo organizativo y político (la convivencia de distintas, y en algunos casos burocratizadas, Centrales Sindicales).

Se trata de un sector social visiblemente transformado en el tiempo reciente, con episodios de movilización sectorial importantes (forestales, subcontratistas del cobre, salmoneeros), pero con débil continuidad en el tiempo. En rigor, el movimiento obrero chileno, que fue una referencia obligada para comprender la historicidad de los movimientos sociales del siglo XX chileno, sufrió los mayores efectos, primero de la represión y luego de la desindustrialización provocada por la dictadura, y más ampliamente, hacia fines del siglo XX, por los efectos del nuevo capitalismo postfordista, transnacional, globalizado y neoliberal que se impuso en Chile y América Latina.

Ya no se trata de un “capitalismo genérico”, con orientaciones keynesianas, sino de un nuevo ordenamiento del gran capital que en nuestro país transformó estructuralmente la sociedad y el lugar y la gravitación del trabajo asalariado de tipo industrial y también del sector de servicios, tanto públicos como privados. En este nuevo contexto, el análisis de la clase obrera y en un sentido más amplio de la “clase trabajadora” chilena se ha vuelto complejo, tanto por su diversificación y convivencia de trabajos formales e informales (éstos últimos alcanzan a un 30% de la fuerza de trabajo), como por las dificultades para organizar sindicatos (que no superan el 12% o 14% de los trabajadores en la etapa de la transición) producto de una legislación restrictiva que hace del trabajo



una “mercancía” desprotegida y débilmente regulada (lo que eufemísticamente los neoliberales denominan “flexibilización del mercado laboral”).

- **Movimiento Campesino**

El movimiento campesino, que alcanzó gran desarrollo a fines de los años sesenta, en medio de la Reforma Agraria y la sindicalización campesina, vivió en la dictadura los mayores efectos de la represión y del proceso de contrarreforma agraria que no solo devolvió parte de las tierras expropiadas a sus antiguos dueños, sino que preparó las condiciones para el desarrollo de una nueva fase de capitalismo agrario, que con los años, potenció el surgimiento de una burguesía agraria –debidamente tras nacionalizada–, expandió el negocio de las frutas, el vino y las forestales y transformó a grandes masas de campesinos en pequeños productores empobrecidos o en trabajadores temporales. Con todo, algunos sectores lograron resistir recreando economías campesinas locales y nuevas asociaciones, especialmente de mujeres temporeras.

Una de las expresiones del actual movimiento campesino es el que se expresa en la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), organización de carácter nacional que ha levantado el protagonismo de mujeres rurales e indígenas en la defensa de un modelo campesino agroecológico y de escala familiar. Como organización son referentes en Chile para la Vía Campesina y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC). Hoy sus luchas apuntan a defender los territorios del avance de los tratados de libre comercio que privatizarán las semillas y la defensa de una memoria campesina de lucha y resistencia.

- **El movimiento de Pobladores**

Los pobladores alcanzaron un alto protagonismo en la lucha por la vivienda y por la creación de los barrios populares entre los años cincuenta y sesenta. En dictadura, fueron los más activos, tanto en la multiplicación de experiencias de solidaridad social dando lugar a nuevas formas de asociación (Comedores Populares, Bolsas de Cesantes, Centro de Apoyo Escolar, Grupos Juveniles y Culturales) como en la protesta social en los años ochenta. Sin embargo, no lograron recrear horizontes políticos compartidos suficientes y la transición a la democracia –de sesgos centristas, partidocráticos e institucionales– obturó los procesos de aprendizaje político –en el sentido de la clase, el territorio y la vida comunitaria– que pudieron haber contribuido a democratizar la vida social de los barrios populares y los gobiernos locales. El resultado, es que hoy predo-



minan en las “poblaciones” de nuestras grandes ciudades, el consumo, las políticas públicas compensatorias y el narcotráfico. Aun así, han surgido durante estos últimos 10 años, diversas agrupaciones sectoriales que reivindican el derecho a la vivienda en tiempos actuales (Movimiento de Pobladores en Lucha; UKAMAU), uno de cuyos focos de lucha es la autogestión inmobiliaria ante la falta de políticas públicas que garanticen el acceso a vivienda digna para sectores vulnerables.

Además, están emergiendo nuevas agrupaciones –en distintos lugares del país, especialmente en el norte, en ciudades como Antofagasta– que vuelven sobre los problemas de la vivienda popular en un contexto nuevo, dominado por las empresas inmobiliarias y una débil capacidad para influir sobre las políticas de vivienda que controla y administra el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (MINVU). Algunas de estas agrupaciones han creado el Frente de Resistencias Urbanas (FRU), plataforma que agrupa a diversas organizaciones territoriales con demandas específicas en contra de la depredación inmobiliaria y la gestión de la vivienda social.



3

BREVE CARACTERIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES ACTUALES

- **Estudiantil**

A los estudiantes universitarios les tomaría largo tiempo, desde los años noventa, reconstituirse como movimiento social, superando lógicas reivindicativas sectoriales. Más rápido caminaron los estudiantes secundarios que desafiaron al gobierno de Lagos con “El Mochilazo” de 2002 (con demandas relativas al “pase” escolar), y en 2006, con



la denominada “Revolución Pinguina”⁸ que instaló la crisis del sistema educativo neoliberal, en el sentido tanto de la desigualdad como de la precariedad del sistema público de educación.

En rigor, sin embargo, los estudiantes universitarios como secundarios, remecieron el espacio público, en 2011, cuando salieron de las aulas, ocuparon las calles e innovaron en sus repertorios de acción⁹, para hacer visible más ampliamente la crisis del modelo neoliberal en la educación chilena, que no solo había hecho de la educación un negocio rentable para las nuevas universidades privadas y los bancos, sino que provocado un manifiesto deterioro de la educación pública. En sucesivas marchas, de hasta 400 mil estudiantes, durante 2011 y 2012, demandaron “educación pública, gratuita y de calidad” sin grandes logros durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, pero instalando la profunda denuncia del desregulado lucro aplicado a un derecho humano básico que el modelo democrático neoliberal no estaba garantizando.

En la segunda administración de Michelle Bachelet se acogieron parcialmente algunas de las demandas estudiantiles, sin que el gobierno fuera capaz de constituir al movimiento estudiantil en un aliado o interlocutor para los cambios. Sus principales líderes hicieron carrera política y al menos tres de ellos son hoy en día diputados de la República. A pesar de ello, el movimiento estudiantil se ha debilitado significativamente en los últimos años, en medio de la constitución de colectivos y asociaciones políticas, pero ha sido también la base para el desarrollo de nuevos movimientos, especialmente el feminista desde 2017 hasta la fecha.

- Mapuche

El movimiento mapuche, tiene por cierto una larga tradición, pero a partir de los años ochenta inició un nuevo ciclo de mayor autonomía de los partidos políticos chilenos y con mayor énfasis en sus demandas como “pueblo-nación” y desde 1997 (intervención del gobierno de la Corporación Nacional Indígena, para favorecer inversiones hidroeléctricas y la quema de camiones de las forestales en Lumaco, en la Región de la Araucanía) inició una nueva fase más diversificada y radicalizada en sus luchas.

En el contexto de la transición surgieron nuevas organizaciones mapuche: en 1990, se constituyó el Consejo de Todas las Tierras; en 1997, se realizó el Congreso Nacional

⁸ Se denomina “pingüinos” en Chile a los estudiantes secundarios, por las características del uniforme escolar.

⁹ La innovación de los repertorios incluyó una diversidad de manifestaciones estéticas en el espacio público: murgas, performance, 1800 horas corriendo alrededor de la Moneda, besatones, etc.



mapuche; y en 1998, se fundó la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Particularmente con esta última el conflicto entre los mapuche y el Estado chileno adquirió mayor intensidad, debido a las estrategias de control territorial que comenzaron en diversos territorios. Se iniciaron recuperaciones de tierras, ataques a fundos privados y empresas forestales, acciones que fueron respondidas por el Estado mediante la represión, la militarización de la Región de la Araucanía, la aplicación de la Ley Antiterrorista, y en términos más amplios, la criminalización de las movilizaciones, el encarcelamiento de dirigentes y autoridades ancestrales mapuche y la muerte de algunos de ellos, que alcanzaron gran visibilidad pública: Alex Lemún, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío, todos jóvenes combatientes de comunidades.

En este nuevo ciclo de movilizaciones mapuche, el 14 de noviembre de 2018, el país se estremeció cuando se conoció la noticia de la muerte del joven comunero mapuche, Camilo Catrillanca, de la Comunidad Temucuicui, en la comuna de Ercilla. En pocas horas y en los días siguientes, se hizo evidente que no se había tratado de un enfrentamiento –como lo quiso presentar la policía y el gobierno– sino de un homicidio perpetrado por fuerzas de Carabineros, quienes omitieron pruebas y mintieron ante la Fiscalía para argumentar un falso motivo criminal. Se desencadenó entonces una crisis en la policía uniformada chilena, ya que no era la primera vez que se faltaba a la verdad, mediante montajes y falsas acusaciones, sino que, además, el asesinato de Catrillanca hizo patente para amplios sectores de la sociedad los límites y el sin sentido de la política oficial represiva frente a las demandas del pueblo mapuche.

El movimiento mapuche, desde fines de los años noventa, al ganar en autonomía, denuncia y llama la atención sobre la relación colonial que el Estado chileno ha establecido con su pueblo, relación colonial que no solo compromete la política de despojo de su territorio por parte del Estado chileno, desde la denominada “pacificación de la Araucanía” a fines del siglo XIX, sino que en las actitudes y visiones de inferiorización racial que acompañaron estas políticas.

En la actualidad, conviven entre los mapuche dos grandes orientaciones políticas, una de carácter más institucional (alianza de municipios mapuche e incidencia en las políticas públicas) y otra más “autonomista” y confrontacional con el Estado chileno. Ambas, sin embargo, comparten una propuesta global en favor del reconocimiento de derechos sociales y políticos, que hagan posible la autonomía y la autodeterminación del pueblo mapuche. En este contexto se demanda no solo la devolución de tierras usurpadas, sino autodeterminación, control y soberanía territorial.

El movimiento mapuche ha generado, además, en los últimos años una significativa y original producción artística, intelectual y comunicacional que nutre y actualiza cons-



tantemente el pensamiento mapuche y la relación entre colonialidad, territorio y nación, interpelando al Estado, a los movimientos sociales y a la izquierda chilena.¹⁰

- **Mujeres/feminismo**

El movimiento feminista actual se reconoce como una “Tercera ola feminista” teniendo en cuenta el sufragismo de los años cuarenta y el movimiento de mujeres en dictadura.

En mayo de 2018, se desencadenó una ola de *tomas feministas* de las principales universidades chilenas, protestando en contra del abuso y el acoso sexual y exigiendo protocolos que pongan fin a estas prácticas en los centros de educación superior.

En esta nueva “ola feminista” se han replanteado nuevas miradas y enfoques, que enriquecen el feminismo con temáticas relativas al género, el cuerpo, las identidades sexuales, la despatriarcalización, la interseccionalidad (el impacto de las diversas dominaciones, o el cruce de múltiples discriminaciones) así como también respecto de la política de evidentes rasgos patriarcales.

Resulta difícil, por ahora, caracterizar las estructuras orgánicas del movimiento feminista, ya que conviven diversas asociaciones e iniciativas, algunas de carácter más permanentes y otras más episódicas¹¹. Entre las primeras, La Red Chilena en contra de la Violencia hacia las Mujeres, organización que desde hace más de 10 años sostiene la campaña “Cuidado: el machismo mata”; el Movimiento Ni Una Menos (2015-16) que dio paso luego a la Coordinadora “8 M” que fue el motor de la Marcha del 8 de marzo de 2019, y que convocó a unas 300 mil mujeres en Santiago y aproximadamente 800 mil, a nivel nacional.

- **Los movimientos socio ambientales**

Los movimientos socio ambientales comenzaron a surgir en dictadura y se han visto reforzados en la misma medida que el “modelo extractivista” ha puesto en evidencia los daños al medio ambiente y a diversas comunidades locales.

Los movimientos socio ambientales, que sostienen la noción de “soberanía territorial” han alcanzado desarrollo a lo largo de la geografía nacional, en medio de variados con-

¹⁰ Ver ECO, Revista Cal y Canto N° 7 (en prensa)

¹¹ Ver, ECO, Revista Cal y Canto N° 5, marzo de 2019, que da cuenta de diálogos y conversaciones con diversas experiencias feministas. Se puede consultar en www.ongeco.cl



flictos, tanto así que el Instituto Nacional de Derechos Humanos reconoció en 2012, la existencia de 97 “zonas de conflicto ambiental” de norte a sur del país que subieron a 116 en 2018 (proyectos mineros, forestales, centrales termoeléctricas, usurpación de aguas, etc.), incluyendo las denominadas “zonas de sacrificio”¹².

El 22 de agosto de 2018, una nube tóxica se levantó en la zona de Quintero, Loncura y Puchuncavi (en la V Región de Valparaíso), obligando a que más de 300 jóvenes tuvieran que ser atendidos por desmayos, náuseas y mareos en los centros asistenciales; para septiembre el número de intoxicados alcanzaba a mil personas en esta denominada “zona de sacrificio”. Se sucedieron entonces las protestas de las organizaciones sociales locales, que organizaron el Cabildo Abierto Quintero-Pichuncaví y los estudiantes secundarios cortaron la carretera. La contaminación ambiental ya no podía ser negada ni minimizada en esta localidad, pero son más de un centenar los conflictos locales ambientales, a lo largo del país, asociados a las mineras, las termoeléctricas y la industria forestal.

La crítica al extractivismo, que sostienen y levantan los movimientos socioambientales, hace visibles los efectos de la actual inserción dependiente de América Latina en la economía mundial globalizada y neoliberal. Se trata de efectos directos sobre la naturaleza (despojo, abuso, daño ambiental) y sobre las comunidades locales que ven secarse los ríos, contaminadas las aguas, o intoxicado el aire que respiran.

Frente a estas nuevas realidades, los movimientos socioambientalistas estimulan la organización de las comunidades y el control y defensa de sus propios territorios, estimulando el desarrollo de nuevas visiones sobre el desarrollo, el uso comunitario de las aguas, la agroecología, la soberanía alimentaria y el “buen vivir”.

Una expresión nacional del movimiento lo constituye el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT)¹³ que articula a diversas asociaciones locales desde Arica hasta Aysén, que confrontan al Estado y a las empresas privadas buscando modificar al Código de Aguas (que privatizó el derecho al uso de las aguas en Chile) así como conflictos ambientales locales.

- Profesores

Los profesores han sido un sector de trabajadores que ha protagonizado diversas movilizaciones en los últimos años, a propósito de la radical precarización que vivieron en dictadura y en contra de los efectos del deterioro de la educación pública.

¹² Zonas saturadas de contaminación ambiental.

¹³ Ver ECO, Revista Cal y Canto N° 6, agosto de 2019. Se puede consultar en www.ongeco.cl



Desde la “rebelión de las bases” en 2014, se entró a una fase de mayor confrontación con los gobiernos y con la antigua directiva del Colegio de Profesores, históricamente en manos del Partido Comunista. Luchas en contra de la precarización que implicó la municipalización, en contra de sucesivos despidos de maestros en Santiago y provincias culminaron en 2019 en un prologando “paro” de 7 semanas de duración que planteó una nutrida agenda de cambios al Ministerio de Educación: 1) Deuda histórica, 2) Agobio laboral y fortalecimiento del sentido educativo, 3) Estabilidad laboral y extensión, 4) Igualdad de trato profesionales de la educación (Pago de la mención), 5) Fin al doble proceso de evaluación docente, 6) Escuelas democráticas, profesionales y especializadas, 7) Carrera directiva, 8) Superar la educación estandarizada para avanzar a concepciones educativas integrales y complejas, 9) Carrera profesional docente, 10) Nueva Educación Pública, 11) Agilizar entrega de bono retiro, 12) Cambio curricular. Se agregó el rechazo a los descuentos vía la recuperación de clases.

El movimiento incluyó marchas, alianzas con estudiantes universitarios, enfrentamientos con la Policía y “mesa de negociaciones” con el Ministerio de Educación. Cada resultado de esas negociaciones fue consultado a las bases, inaugurándose un inédito proceso de democratización en la toma de decisiones.

- **Demandas Regionales**

Se trata de una diversidad de movimientos locales, que han alcanzado gran visibilidad pública en medio de coyunturas ambientales críticas o de reivindicaciones regionales. En términos generales han tenido un carácter episódico, es decir, una fase de gestación, explosión y luego de repliegue o invisibilización. Resulta difícil generalizar, pero se han producido con una cierta recurrencia.

Entre los más destacados, hay que mencionar:

- La paralización y movilización regional en Punta Arenas (en la Patagonia) el 2011, como reacción a un alza en el precio de gas.
- En 2012, en la ciudad de Aysén, una movilización de pescadores artesanales creció y envolvió al conjunto de la región con demandas relativas a salarios, infraestructura, creación de una Universidad, políticas relativas al uso de las aguas, la minería y silvoagropecuarias.
- El mismo año 2012, se verificaron fuertes protestas y enfrentamientos con la Policía cuando los habitantes de Freirina, demandaron el cierre de una planta faenadora de cerdos, que generaba gran contaminación ambiental.



- Más recientemente, en 2016, los pescadores de la Isla Grande Chiloé en el sur, cortaron los accesos a la isla en protesta por la “marea roja”, una contaminación en el mar que afecta a toda la producción local y que implica a la industria salmoneera.

En todos estos sucesos se han generado fuertes enfrentamientos con la Policía, que el gobierno ha reforzado enviando efectivos desde Santiago. Los trabajadores y pobladores han realizado cortes de ruta, marchas, bloqueos y sus estructuras organizativas han enfatizado en la realización de “asambleas” y la coordinación de redes locales y territoriales. Los diversos gobiernos de centroderecha y centroizquierda, luego de responder con represión se han abierto a negociaciones sectoriales. Los movimientos regionales han puesto también en la agenda, la cuestión de la descentralización, fuertemente resistida por las elites políticas y empresariales de Santiago.

- **Derechos Humanos**

El movimiento de DDHH que alcanzó una evidente visibilidad y apoyo ciudadano en los primeros años de la transición a la democracia, en los noventa, ha tendido a declinar y modificar sus actorías. Si en los noventa cumplían un papel relevante las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos, las agrupaciones de Ex presos y algunas ONG, hoy en día, el movimiento ha tendido a concentrarse en los *Sitios de Memoria*¹⁴ y en las causas judiciales que llevan adelante una nueva generación de Abogados de los DDHH, denunciando a diversos generales del alto mando que ejercieron funciones en democracia y estuvieron vinculados a casos de violaciones de derechos humanos.

- **No + AFP**

“No + AFP” es un movimiento ciudadano que surge en 2013, pero que se expresó públicamente a partir de 2016, convocando a masivas marchas en Santiago y regiones, que alcanzaron ese año a movilizar a unos 200 mil santiaguinos y cifras cercanas a un millón, en el nivel nacional. Demandan el retorno a un “sistema de reparto solidario” y el fin del sistema de pensiones actual, organizado a partir de la capitalización individual

¹⁴ Los sitios de memoria son centros de represión recuperados en que se organizan actividades de memoria que convocan a familiares, viejos militantes y a las nuevas generaciones. Entre los más emblemáticas de Santiago, están “Villa Grimaldi” y “Londres 38”. Aunque con un tenor distinto también el Museo de la Memoria concentra un alto número de visitas y de iniciativas culturales de memoria.



Chile

y administrado por empresas privadas, las Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP). El efecto ha sido una alta concentración de capital, que favorece a la banca y a los grupos empresariales al tiempo que paga pensiones equivalentes a un tercio de los salarios que percibía el trabajador en su fase activa.

A pesar de las grandes movilizaciones del movimiento “No + AFP” sus logros han sido menores, habida cuenta del sistema político chileno por permeable a los cambios y a los compromisos de la mayor parte de la clase política con el mundo empresarial.



4

ADENDA: ESTALLIDO SOCIAL EN CHILE¹⁵

La semana del 14 al 18 de octubre, los estudiantes secundarios llamaron a evadir el pago de los boletos del Metro de Santiago, como una forma de protesta frente a una reciente alza de las tarifas. “Evadir, no pagar, otra forma de luchar” fue la consigna que los estudiantes coreaban a la entrada de las estaciones de Metro, desde el lunes 14 en adelante. El conflicto comenzó a escalar, contando con el apoyo de gran parte de la población, cuando la tarifa alcanzaba, en horas punta, a 830 pesos chilenos (1,2 dólares en moneda americana).

El día jueves 17, mientras las estaciones eran custodiadas por las Fuerzas Especiales de Carabineros, el conflicto se radicalizó con ataques a las instalaciones de algunas estaciones, especialmente los torniquetes. El viernes 18, el conflicto se expandió y se multiplicó con manifestaciones en estaciones de alta concurrencia de usuarios, que alteró el funcionamiento regular de Metro, que transporta diariamente a aproximadamente 2,8 millones de santiaguinos. Se empezaron a cerrar estaciones y se incrementó la represión en distintos lugares, alterándose todo el sistema de transporte de una ciudad de 7 millo-

¹⁵ Un seguimiento del Estallido social chileno, lo realicé a través de una serie de artículos, recientemente publicados. Ver: Mario Garcés. *Estallido social y una nueva Constitución para Chile*. LOM Ediciones, Santiago, marzo de 2020.



nes de habitantes. Cuando anochece la policía se vio superada y el gobierno amenazó a los manifestantes con aplicarles la Ley de Seguridad Interior del Estado y no ofreció ninguna salida al alza de tarifas. A las 20,30 horas comenzaron a sonar las cacerolas en distintos barrios de Santiago y muchos manifestantes se congregaron a la entrada de varias estaciones del Metro y con mayor presencia de jóvenes de los barrios populares, vino el estallido de la rabia acumulada por unas mayorías que viven cotidianamente la precariedad social y la desigualdad estructural que el neoliberalismo materializó y naturalizó en la sociedad chilena, desde la dictadura de Pinochet. Se iniciaron entonces ataques e incendio de algunas estaciones de Metro más el saqueo de locales comerciales y supermercados. A estas alturas el Metro había suspendido todas sus operaciones en la ciudad y el gobierno se reunió de urgencia en La Moneda, para decretar, pasada la medianoche, el “estado de emergencia”, que entregó la mantención del orden público a los militares.

El sábado 19, con estado de emergencia en ejercicio, las manifestaciones tomaron un doble giro: a) junto a la expresión pública del malestar mediante caceroleos y manifestaciones en plazas y grandes avenidas, se multiplicaron los saqueos a supermercados y farmacias; y b) la protesta se extendió a las provincias y se hizo nacional, de norte a sur del país, al menos desde Iquique hasta Punta Arenas, con mayor intensidad en Valparaíso y Concepción, las dos ciudades mayores después de Santiago.

En esta fase de la movilización, el estado de emergencia fue desafiado y desobedecido por la población, al punto que la noche del sábado se impuso el “toque de queda” en Santiago, Valparaíso y Concepción. Tampoco el toque de queda alcanzó los efectos esperados y las manifestaciones públicas y saqueos continuaron.

Chile vivía entonces, *el mayor “estallido social” desde que se recuperó la democracia*, es decir en los últimos 30 años. Un estallido que nadie podía imaginar o prever, aunque muchos admiten, que los síntomas existían desde ya bastante tiempo. El presidente Piñera, en la sucesión de errores y el descrédito de su gobierno, declaró el domingo 20 de octubre, que “estábamos en guerra”.

Este estallido social, difícil de prever en su magnitud, se verifica en un contexto francamente crítico. Por una parte, desde el gobierno y el Estado, las instituciones viven su peor momento de credibilidad y legitimidad, producto no solo de la corrupción –de la que ya no se salvan ni las Iglesias– sino que además de su abismante distancia para con la sociedad y particularmente para con el pueblo. Por otra parte, desde el punto de vista de las clases populares y sus luchas, esta movilización que conduce a un “estallido” se hace sin un convocante central, sin orgánicas conocidas (ni partidos, ni la CUT, ni coordinaciones territoriales) por lo que adquiere un “cierto” carácter espontáneo, que



hay que matizar, en el sentido que los estudiantes secundarios y diversos movimientos sociales generaron sus propios procesos de organización y de expresión pública que preceden a este estallido y de los que hemos comentado en este trabajo: el movimiento mapuche desde fines de los 90; el movimiento estudiantil, secundario y universitario (mochilazo, en 2002; revolución pingüina, en 2006; movimiento por la educación pública, en 2011); el movimiento “No + AFP” desde 2016; el “mayo feminista” de 2018; los diversos movimientos socio ambientalistas y de lucha por el “agua y los territorios”; las luchas y huelga de los profesores en 2018, etc.

La crisis social y política chilena, que desencadenó el Estallido Social del 18 de octubre, se ha prolongado por varios meses y solo la actual pandemia del coronavirus está generando un cierto repliegue de los grupos sociales movilizados.

Algunos hitos y experiencias relevantes han sido los siguientes:

- a) El 25 de octubre, es decir, a una semana de iniciadas las movilizaciones, se produjo en Santiago una masiva concentración ciudadana, que congregó, según cifras oficiales, a 1,2 millones de personas. Y cuando se cumplían 5 semanas del estallido, se estimaba oficialmente, que habían participado unos 4,2 millones de personas en diversas movilizaciones en el nivel nacional.
- b) El gobierno, luego de la magnitud de la movilización social, admitió que había razones para el malestar y propuso una “agenda social”, sin abandonar su estrategia represiva. La agenda social fue extremadamente débil y la represión se sostuvo, haciéndose visible una masiva y sistemática violación de los Derechos Humanos.
- c) En el campo ciudadano y popular, se fue definiendo un camino y un horizonte compartido, que enfatizó en: mantener activa la movilización; fortalecer el movimiento desde las bases, a través de Asambleas Territoriales y Cabildos; y la necesidad de lograr una Asamblea Constituyente.
- d) Junto a la demanda por el cambio de la Constitución, mediante una Asamblea Constituyente, las principales demandas de los movimientos sociales priorizan en el tema de las pensiones (fin de las AFP); reforma en el sistema de la salud; educación pública, gratuita y de calidad; alza de los salarios y cambio en la legislación laboral; nacionalización de las riquezas básicas (en especial el cobre y el litio) así como de los servicios públicos (Agua y electricidad); acceso a la vivienda. En suma, un Estado garante de derechos económicos, políticos y sociales.
- e) El 12 de noviembre un paro nacional incrementó nacionalmente la movilización y el gobierno se vio francamente debilitado. La “clase política” chilena se reunió de urgencia en el Parlamento y propuso un “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución”. En este acuerdo se propuso realizar un Plebiscito, para el



- 25 de abril de 2020, que incluye la opción de apruebo o rechazo de una nueva Constitución y la opción de si ésta debe ser elaborada por una Convención Mixta (mitad de parlamentarios en ejercicio y mitad de constituyentes elegidos) o una Convención Constituyente con todos sus miembros elegidos.
- f) El Acuerdo de los políticos chilenos, fue rechazado o visto con desconfianza por el pueblo movilizado, por su carácter auto referido, así como por los vetos y prescripciones para una futura Constituyente (elección de los constituyentes, según la forma en que actualmente se elige el Parlamento, o sea mediante listas partidarias; y dos tercios de los votos para la aprobación del nuevo articulado de la Constitución, o sea, con un tercio se pueden vetar los acuerdos).
 - g) Diversos organismos de Derechos Humanos, tanto nacionales como internacionales, hacia fines de noviembre, es decir, luego de dos meses de movilizaciones, cifraban en 26 las víctimas fatales; 11.564 heridos, 238 por daño ocular; 20.645 detenidos y la Fiscalía investigaba 2.670 casos de violación de los Derechos Humanos, 422, de ellos, niños y niñas. La ONU, a fines de noviembre, subió a 350 los casos de daño ocular.
 - h) Durante enero y febrero, a pesar del receso veraniego, las movilizaciones continuaron y el 8 de marzo de 2020, se registró la mayor movilización de mujeres, de aproximadamente 1 millón y medio de mujeres, solo en la ciudad de Santiago.
 - i) Finalmente, habría que agregar que el movimiento ciudadano y popular es diverso y heterogéneo en su composición: jóvenes, mujeres, trabajadores y trabajadoras, profesionales, pero también en sus actorías: Colectivos Feministas, Asambleas Territoriales, Barras Bravas del fútbol, Asociaciones de Estudiantes, Centrales sindicales. Y, por otra parte, habría que agregar también, que tiene un carácter procesual, es decir, se ha venido constituyendo en su propia experiencia de un pueblo “en movimiento”.

En suma, el estallido social chileno, que ha desencadenado una profunda crisis social y política, se mueve en la dialéctica de un gobierno y una clase política ampliamente deslegitimada, que busca recuperar el control de la situación- por vía represiva o acuerdos en las alturas- y un pueblo movilizado, que expresa su descontento y que paulatinamente genera sus propias formas de organización y de elaboración de propuestas encaminadas a cambiar la Constitución Política del Estado e introducir modificaciones sustantivas al modelo neoliberal vigente. Los resultados de su acción serán parte del proceso político venidero, que ya ha sufrido modificaciones en el campo institucional. El principal de ellos, es que el Plebiscito propuesto para el Parlamento para el 26 de abril de 2020 se ha postergado para el 25 de octubre, como producto de la pandemia del coronavirus.

Paraguay





Paraguay

MAPEO DE MOVIMIENTOS SOCIALES: PARAGUAY

Dania Pilz
Comunicadora
DECIDAMOS

INTRODUCCIÓN

Una aproximación a la acción colectiva en Paraguay, en los dos últimos años principalmente, nos presenta un panorama donde las protestas sociales continúan atomizadas, discontinuas e invisibilizadas.

La atomización está relacionada con la escasa población paraguaya –apenas 7 millones (DGEEC, 2019)–, y una densidad poblacional elevada únicamente en la zona central del país. A esto se suma la falta de recursos para el transporte de los manifestantes para las diferentes concentraciones y la poca difusión de las movilizaciones sociales, especialmente campesinas, indígenas o de demandas locales en el interior del país (Villalba, 2020), y el constante amedrentamiento del Estado, a través de la represión policial o la propuesta de leyes que buscan limitar las formas de protesta e incluso, castigar a quienes participan o recurren a determinados tipos de expresiones –manifestaciones, cierres de rutas, ocupaciones de tierras, acampar en la capital del país– todas acciones para presentar demandas y exigir derechos (Pilz, 2019).

En cuanto a los actores, cabe destacar que desde el año 1989 al 2019, ha sido el movimiento campesino, a través de sus diversas organizaciones y federaciones, el que ha contado con recursos (humanos, redes, organización) y capacidad de convocatoria para mantener activa la movilización social en Paraguay (Villalba, 2020). Entre las principales marchas, que todos los años pone en debate la situación de los/as campesinos y sus demandas, está la de la Federación Nacional Campesina (FNC), que, en el 2019 entre marzo y abril, movilizó a varias organizaciones, incluso a grupos indígenas que se sumaron.



Sin embargo, en los últimos años se ha apreciado un debilitamiento que obedece a múltiples causas. Una de ellas constituye la migración masiva de familias enteras a los centros urbanos de las principales ciudades del país, como consecuencia de la escasa cotización de los productos agrícolas y del avance desmedido de los agronegocios que además utilizan de manera descontrolada agrotóxicos nocivos para la salud. Asimismo, la represión selectiva y criminalización de integrantes o personas vinculadas a movimientos campesinos también ha implicado el debilitamiento de estas organizaciones. Ante esta situación, una estrategia de resistencia ha sido la organización en comités de productores o cooperativas agrícolas (Martens y Orrego, 2019, citados por Villalba, 2020).

Cabe señalar que, en general, ha habido pocos casos de represión masiva a las movilizaciones. Sin embargo, lo que se viene acentuando es la represión selectiva a dirigentes, principalmente campesinos, práctica extendida durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018). “Desde la asunción de Horacio Cartes, en agosto de 2013 a agosto de 2015, se registraron 43 casos considerados de criminalización y judicialización, en los que se dieron represiones violentas (87 personas heridas o torturadas) y destrucción de bienes (16 casos donde se quemaron viviendas, se destruyeron cultivos y se robaron bienes de familias campesinas), así como también han sido imputadas 460 personas, detenidas 273 y condenadas 38” (Areco y Palau, p.33). También se ha imputado a estudiantes de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (FENAES), en respuesta a sus movilizaciones y demandas de mejor educación (Palau, et al. 2018). Muchos de estos casos de imputación continúan como causas abiertas y recientemente fueron sobreseídos estudiantes imputados.

En este contexto, con sus matices, siguen teniendo protagonismo movimientos sociales históricos, como el campesino, el sindical, el de mujeres, el estudiantil, a los que se han sumado otros que surgieron ante una serie de demandas sociales, el de los ciudadanos autoconvocados, de diversidad sexual, el urbano y el ambientalista¹⁶.

16 Un estudio de la organización Base IS del año 2018 “Canalización de demandas de los movimientos sociales al Estado paraguayo” (Palau, Coronel, Irala y Yuste), ofrece un panorama bastante amplio de las organizaciones que forman parte del movimiento social, a partir de ciertos criterios de inclusión, que si bien deja a algunas fuera, constituye una radiografía de los movimientos sociales de Paraguay.



BREVE CARACTERIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES



1

Movimiento campesino

En los últimos años, este movimiento social histórico ha perdido cierta fuerza por factores como: la migración masiva de familias campesinas, ante el avance de la pobreza en el ámbito rural –datos al 2018 indican que más de la mitad de las personas en situación de pobreza monetaria (unas 916.000) se encuentra en áreas rurales–; falta de una política efectiva del Estado paraguayo a favor de la Agricultura Familiar Campesina (AFC), que sigue sufriendo una disminución de territorio; la pérdida de precios de productos agrícolas y del avance de los agronegocios; más la represión y criminalización de dirigentes campesinos; factores a los que se suma las divisiones al interior de las organizaciones.

Sin embargo, aun así, el movimiento campesino sigue siendo uno de los que tiene mayor presencia y visibilidad, por su capacidad de convocatoria, movilización y presentar demandas ante el Estado.

En un estudio realizado por Palau, et al. (2018), se señala que el declive se da a partir del 2012, entre otros motivos por, la expansión de los agronegocios en territorios campesinos, el agotamiento o la ritualización de los repertorios de acción clásicos, la falta de aprovechamiento adecuado de las oportunidades políticas.

Estos elementos provocaron la fragmentación del movimiento campesino, que se encontraba en un momento de resistencia, y donde opta por consolidar los asentamientos e iniciar experiencias de producción campesina. Este momento está caracterizado por la fragmentación y la profundización de las diferencias de posicionamientos políticos. Ello es-



taría provocando que la tendencia de las principales luchas sea territorial, impulsadas en su mayoría por comisiones y organizaciones locales, articulándose de manera más amplia sólo en momentos y por temas específicos. (Palau et al., 2018, p.62).

Entre las principales organizaciones campesinas se encuentra la Federación Nacional Campesina (FNC), que desde el año 1993 realiza una marcha en el mes de marzo, movilizándolo a campesinos y campesinas en la capital del país, siendo esta la marcha con mayor visibilidad y capacidad de presentar demandas.

En cuanto a los repertorios de acción, las organizaciones campesinas siguen recurriendo a formas de lucha tradicionales: movilizaciones nacionales, regionales y locales, cierres de rutas, ocupaciones de tierras y más reciente, acampar en la ciudad frente a las instituciones públicas. Las principales demandas del movimiento siguen siendo el acceso y mejor distribución de tierras, políticas de desarrollo para el campo en el marco de una reforma agraria integral, el seguro agrícola, la condonación de deudas en el marco de la reactivación productiva nacional, la refinanciación y reestructuración de los créditos vencidos, la regularización de las deudas judicializadas y la reactivación económica productiva para la Agricultura Familiar.

Las organizaciones campesinas recurren a las movilizaciones tanto permanentes como en fechas simbólicas, por ejemplo, la tradicional marcha campesina que se viene realizando todos los años en el mes de marzo para presentar tanto los reclamos históricos como nuevos que se van sumando. También están las movilizaciones en torno a las acciones represivas, sobre todo relacionadas con las ocupaciones de tierras, y en los últimos años ante las exigencias de respuestas de políticas de comercialización para la producción nacional.

Entre otras características, las organizaciones campesinas tienen modelos organizativos formales, que incluyen direcciones departamentales o regionales (Palau, et al., 2018).

Principales organizaciones y movimientos campesinos, con alcance nacional

- Federación Nacional Campesina (FNC)
- Movimiento Campesino Paraguayo (MCP)
- Organización de Lucha por la Tierra (OLT)
- Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos (CTCU)
- Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay (CO-CIP)
- Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC)
- Organización Campesina Regional de Concepción (OCRC)



Paraguay

- Coordinadora de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indígenas (Conamuri).

Otras organizaciones tienen un alcance más limitado en términos territoriales, con acciones de protesta y exigencias de demandas que tienen como principal referente a las autoridades locales, entre las que se pueden señalar, la Coordinadora de Organizaciones Sociales de Repatriación (COSOR) y la Asociación de Mujeres Campesinas y Populares de Caaguazú (AMUCAP-C).



2

Movimiento sindical

El movimiento sindical, desde la crisis que vivió en la década de los noventa, no logró recuperarse. La presencia de este movimiento en reclamo de las reivindicaciones laborales y otras demandas, en los últimos años ha sido esporádica y sigue caracterizándose por las divisiones internas.

Tras la caída del régimen en el año 1989, el movimiento sindical pudo volver a organizarse y desarrollar una serie de acciones impensables durante la dictadura. Sin embargo, la euforia inicial pronto se vio afectada por prácticas represivas similares a épocas anteriores: detenciones, cooptación de líderes y organizaciones sindicales e incluso corrupción de dirigentes sindicales. Al mismo tiempo, el crecimiento cuantitativo de sindicalizados no fue acompañado por un crecimiento cualitativo. El auspicioso incremento de sindicalizados/as registrado después del año 1989 no logró ni mantenerse ni continuar con el ritmo inicial (Pilz, 2005).

La lucha por instaurar la democracia en el país no se trasladó a los organismos sindicales que, ante discrepancias, se dividieron. Como consecuencia de la situación, en los primeros años del 2000, algunos dirigentes buscan la recomposición del movimiento y una de las estrategias pasa por crear “nuevas centrales” que son el desprendimiento de las existentes, así surgen la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), una división de la CUT; la Central General de Trabajadores (CGT), división de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), entre otras que se crean, como las de los trabajadores del Estado. Fruto de esta situación, en el año 2019, se tienen diez centrales nacionales,

que buscan representar a un total de aproximadamente 5.019.034 personas, que tienen 15 y más años de edad, grupo de edad considerado como población en edad de trabajar (EPHC, 2019).

Las centrales obreras se caracterizan por una estructura formal, donde las figuras principales son el Secretario General o Presidente junto con una comisión directiva que incluye varios cargos y representan a secretarías de la organización –de capacitación, de movilización, de comunicación, entre otras–.

Cabe destacar que, las condiciones laborales de los y las trabajadores/as fueron deteriorándose año tras año, y las causales de los principales conflictos fueron los reclamos por mejores salarios, la negativa de la patronal a firmar contratos colectivos, el despido de trabajadores/as, algunos/as incluso con estabilidad laboral o sindical; mejores condiciones laborales, acceso al seguro social, el derecho a las vacaciones, entre otros.

La tendencia es el sistemático deterioro de las condiciones laborales, junto con el progresivo aumento del desempleo y de la pobreza, y como consecuencia la inestabilidad laboral y el crecimiento del empleo informal.

Las movilizaciones, paros y huelgas siguen siendo los mecanismos más comunes para reclamar y exigir a la patronal y al Estado mejores condiciones y el respeto a los derechos laborales garantizados en las leyes nacionales e internacionales. Una acción que también toma protagonismo en los últimos años son las mesas de diálogos, tanto tripartitas como bipartitas.

Las manifestaciones, cada vez más esporádicas, pueden darse en cualquier momento, cuando surge algún conflicto laboral. Si bien, con menos fuerza, el 1 de mayo sigue siendo una fecha de movilización. En general, las demandas están dirigidas hacia la patronal y al Estado.

Principales Centrales Sindicales

- Central Nacional de Trabajadores (CNT)
- Central Nacional de Trabajadores Legítima (CNT-L)
- Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
- Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A)
- Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT)
- Central General de Trabajadores (CGT)
- Central Sindical de Trabajadores del Paraguay (CESITP)
- Confederación de la Clase Trabajadora (CCT)
- Confederación Nacional de Trabajadores (Conat)
- Central Cristiana de Trabajadores (CCT)



3

Movimiento de mujeres / movimiento feminista

La movilización del 8M (8 de marzo) del año 2017 marcó un hito importante para este movimiento, no sólo por la cantidad de participantes, sino también por sus planteamientos y por la aceptación social que tuvo la movilización. Sin embargo, si bien, el 8M como el 25 de noviembre fueron muy importantes para abrir y canalizar las diversas inquietudes de diferentes colectivos de mujeres, logrando una articulación amplia con la participación de mujeres urbanas y rurales en torno a denuncias de violencia, acosos, amenazas, feminicidios; otros temas y demandas, no consiguen una participación y adhesión masivas de los diferentes colectivos, generando la percepción de luchas sectoriales –políticas, domésticas, etc.-

A partir del año 2016, una serie de colectivos de mujeres jóvenes urbanas aparecen con un discurso feminista más confrontativo y con mayor activismo e intervención en los espacios públicos. Asimismo, mujeres que vienen llevando adelante luchas en torno a otras reivindicaciones en las zonas rurales, hoy también tienen una agenda feminista. La movilización del 8M del año 2017 dio un fuerte impulso a la agenda feminista y a la visibilización de la diversidad. En este sentido, se puede destacar una gran *diversidad de feminismos*:

- **Feminismo institucional:** cuyas representantes participan mayoritariamente en ONG y organismos internacionales. Han dado una batalla sostenida en las últimas décadas y han logrado los mayores avances legislativos en materia de género (código civil, ley contra la violencia doméstica, ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia, igualdad salarial para el empleo doméstico, predominantemente femenino, y casi logran la paridad). Han sido responsables de gran parte de la producción académica sobre género y feminismos. Participan de varios espacios institucionales de consulta con el Estado y dirigen fuertemente sus demandas hacia allí. Forman parte de la articulación que organiza las dos grandes marchas anuales: del 8 de marzo y del 25 de noviembre.

Cabe destacar a la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP), una red de or-



ganizaciones feminista fundada en 1987 luego del Encuentro por nuestra igualdad ante la Ley. La CMP participó intensamente de los procesos del cambio de código civil a inicios de los 90, la ley contra la violencia doméstica aprobada en el 2000, entre otros logros.

- **Feminismo campesino:** eminentemente rural, luchan por el cambio del modelo productivo extractivista con la tierra (sojero y ganadero) que envenena a su entorno. Se organizan para trabajar cuestiones que las afectan directamente –autonomía económica, violencia, derechos reproductivos, participación política dentro de la organización–. Luchan por la salud de sus hijos/as y sus familias. Se organizan en comités de producción en sus territorios, principalmente mixtos, aunque en los últimos años se han fortalecido muchos comités de mujeres, incluso la presencia de organizaciones lideradas por mujeres campesinas –CONAMURI, AMUCAP-C–. Entre sus formas de lucha están la ocupación y movilización para exigir la implementación de la reforma agraria, recuperación de tierras malhabidas y denuncias de fumigaciones ilegales; otra modalidad de acción son los cortes de ruta locales.

Se han sumado a las dos grandes movilizaciones anuales: del 25 de noviembre y el 8 de marzo en Asunción y se están articulando para realizar las movilizaciones en sus ciudades más cercanas.

- **Feminismo estudiantil:** sus luchas son contra la violencia dentro de sus espacios (acoso, discriminación, violencia sexual física y psicológica por parte de compañeros, docentes y personal de las universidades y colegios). Luchan contra la impunidad en los casos que han sido judicializados. En el caso de las universidades, se articulan para buscar la adopción de protocolos contra las violencias de género.

Existen varios colectivos de mujeres y mixtos en diferentes universidades. Una organización es la Plataforma Universitaria Feminista (PUF), relevante tanto por aglutinar a mujeres estudiantes de diferentes facultades como por visibilizar y colocar en la agenda una problemática que estaba intencionalmente invisibilizada, como la estructura de poder patriarcal en las universidades (Palau et al., 2018).

Cabe también destacar a los y las estudiantes secundarios/as, que se organizan en organizaciones mixtas y buscan, entre otras demandas la implementación de la Educación Sexual Integral –ESI– en colegios públicos y privados, así como la reincorporación de la perspectiva de género dentro de la educación (la perspectiva de género fue prohibida en el 2017 por resolución ministerial). Principalmente actúan en marchas, presentando notas a las autoridades y generando diálogos sobre las problemáticas en sus espacios educativos. Forman parte de la articulación que organiza las dos grandes marchas anuales: del 25 de noviembre y el 8 de marzo.



- **Feminismo autónomo urbano:** existen pequeños colectivos urbanos, bastante horizontales e independientes. Algunos deciden no trabajar con otras organizaciones y articulaciones. Tienen integrantes jóvenes y abordan temas como las violencias dentro de los espacios activistas, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, la discriminación LGBTI-fóbica, entre otros. Incorporan de manera más transversal la visibilidad de las identidades no binarias y las disidencias sexuales, así como el antiespecismo. Se autogestionan económicamente. Trabajan con grupos de contención, talleres sobre sus áreas de trabajo, realizan acciones directas esporádicas. Han llevado a cabo la búsqueda de una compañera del ámbito metalero que estaba desaparecida y esclarecieron su feminicidio sin ayuda de las autoridades. Algunos grupos dirigen algunas demandas hacia el Estado, pero varios deciden no hacerlo y se centran en las problemáticas que afectan directamente su entorno.



4

Movimiento estudiantil y juvenil

En el año 2012 emerge el Frente Estudiantil por la Educación, que, a partir de la aprobación de Ley de Educación Superior, articula a estudiantes de diferentes facultades y es hoy uno de los principales actores universitarios.

Desde el año 2015, tiene nuevamente una presencia significativa el movimiento estudiantil, tanto secundario como universitario, que surge a partir de denuncias de corrupción y demanda de una mayor inversión en educación. En setiembre de 2015, estudiantes de colegios públicos y privados protagonizaron una histórica marcha para exigir el derecho a una educación de calidad y de equidad. En el 2016, estudiantes secundarios forzaron la destitución de la ministra de Educación.



Paraguay

Los/as universitarios/as intentaron provocar cambios en la Universidad Nacional de Asunción (UNA), bajo la bandera de la “Reforma Universitaria” que fue retomada en los años 2016-2017 en el movimiento llamado “la UNA no se calla”. Es importante señalar que una característica de este movimiento es la discontinuidad de su accionar y la rotatividad de sus integrantes, así como la continuidad de sus principales reivindicaciones.

Las crisis detonadas y desarrolladas en las dos universidades principales, la UNA (2015, 2016, 2017) y la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) (2017) (privada) fueron saludables para ambas instituciones. En el caso de la UNA generó una ola de saneamiento administrativo y de gestión académica¹⁷ que fue el inicio de un proceso de reforma que incluyó la reforma del Estatuto de la UNA, y de la estructura y dinámica de gobierno hacia su democratización, aunque sigue habiendo considerables pendientes. En cuanto a la UCA, los diversos conflictos emergentes, muestran el denominador común de la necesidad de su democratización, y del saneamiento de las relaciones y prácticas patriarcales, autoritarias y machistas reclamadas tanto por estudiantes hacia docentes, como por estudiantes, docentes y funcionarios hacia el rectorado. En este caso, lo saludable es sólo en el sentido de la puesta en evidencia y difusión de los problemas institucionales, porque tanto el rectorado como la Conferencia Episcopal Paraguaya no han cedido en su posicionamiento cerrado y autoritario¹⁸ (Molinier, 2018).

Las organizaciones estudiantiles se caracterizan por una diversidad de estructuras organizativas: plenarias, asambleas, direcciones nacionales, regionales y de base; secretarías. Entre las características, sobre todo de las organizaciones estudiantiles secundarias, está el permanente recambio de autoridades, propio del ciclo de vida estudiantil.

Tanto los secundarios como universitarios, recurren a movilizaciones, sentadas, huelgas, toma de facultades y colegios. Las demandas se dirigen principalmente al Estado, que desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) tiene que dar respuestas a varias de las demandas o interceder ante otras.

Ambos sectores, secundarios y universitarios, se manifiestan de modo permanente. Si bien, el mes de setiembre ya se ha constituido en un mes de movilizaciones estudiantiles.

17 Serie de análisis y artículos de opinión publicados en revistas (ACCION, Sociedad y Economía) y diarios asuncenos, 2015, 2016 y 2017

18 <https://medium.com/@camicorv/entre-moderadores-y-garroteros-avanza-la-digna-rebeld%C3%ADa-estudiantil-401496a4db2a> y serie de notas periodísticas de diarios asuncenos entre el 01.08 al 30.12.17.



Principales organizaciones

- Organización Nacional Estudiantil (ONE)
- Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (FENAES)
- Frente Estudiantil por la Educación (FEE)
- Plataforma de Universitarias Feministas (PUF)
- Red de Consejos Locales de Juventud (RED ENREDATE)
- Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay (UNEPY)



5

Movimiento de ciudadanos autoconvocados

Un fenómeno que viene ganando protagonismo desde el año 2018, es la presencia del “movimiento de ciudadanos autoconvocados”, que a través de una serie de acciones ha sido un factor importante para lograr la imputación de algunas autoridades y renuncia de senadores y diputados.

El movimiento se caracteriza por la participación de distintos sectores y grupos de la sociedad que representan a la “ciudadanía indignada” –comisión escrache, estudiantes, trabajadores/as, grupos políticos–. Una de las características está dada por la espontaneidad de las convocatorias, que se dan principalmente a través de las redes sociales y el uso del WhatsApp. Si bien, al principio la presencia de este movimiento era más episódica, está cobrando cada vez más protagonismo y presencia ante situaciones que involucran principalmente a autoridades y representantes públicos. Aparecen ciertos liderazgos, que se tornan en las figuras referentes, que van variando según la acción del momento.

Tras las internas de los partidos para las elecciones generales del 2018, la inclusión de algunas figuras cuestionadas por tráfico de influencia y corrupción (que tomaron luz



pública a fines del 2017), generó manifestaciones ciudadanas que con presión lograron que algunos a pesar de ser electos, como los senadores Jorge Oviedo Matto, José María Ibáñez y Óscar González Daher, terminaran renunciando al Congreso.

Entre las acciones que realizan están marchas, manifestaciones, diferentes formas de es-craches, en distintas ciudades del país –aunque principalmente en la capital y ciudades del departamento central– para exigir el fin de la corrupción y la impunidad, y desde julio de 2019, el juicio político del presidente de la República y su vicepresidente, Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez, respectivamente, por el acuerdo sobre Itaipú¹⁹. En general, las demandas se dirigen principalmente a las autoridades nacionales.



6

Movimiento de diversidad sexual

Diversas organizaciones paraguayas trabajan a través del activismo para conseguir una mayor igualdad de derechos, luchar contra la homofobia y todo tipo de discriminación basada en orientación sexual e identidad de género. Actualmente existen y tienen presencia pública varias organizaciones tanto de mujeres como de hombres, que además de plantear denuncias en torno a la violación de los derechos humanos de las personas LGTBI, se organizan para proponer demandas de políticas públicas y el cumplimiento de las normativas vigentes.

El movimiento de la diversidad sexual, surge organizacionalmente en el año 1990 con la conformación de la Comunidad de Homosexuales del Paraguay (CHOPA), experiencia que da apertura a la conformación de otras organizaciones, como el caso del Grupo

¹⁹ Un polémico acuerdo con Brasil relacionado con la central hidroeléctrica de Itaipú, generó una crisis política afectando al presidente Mario Abdo Benítez. El acuerdo fue firmado el pasado 24 de mayo, pero apenas se hizo público a fines de julio. Fue duramente criticado por la oposición, que lo tildó de secreto y dijo que se trataba de una cesión de la soberanía de Paraguay que podría derivar en el aumento de los precios de la energía eléctrica en el país. Se habló de la posibilidad de someter a un juicio político al presidente y vicepresidente.



Paraguay

de Acción Gay Lésbico (GAG-L), en el año 1999. Mientras que, en el 2003, se funda la primera organización de mujeres lesbianas denominada grupo por los derechos de las lesbianas AIREANA. Alrededor de estas organizaciones se impulsan la plena inclusión de las personas en una sociedad más igualitaria, democrática y pluralista. Este intento busca además vincularse claramente con las agendas regionales del movimiento, lo que lleva a integrar las redes regionales de derechos humanos (Palau, et al., 2018).

Actualmente, el conjunto de organizaciones representa a toda la diversidad sexual –trabajadoras sexuales; travestis, transexuales y transgénero; lesbianas, gays–.

Entre las principales acciones está la Marcha por el Día del Orgullo Gay, que se conmemora cada 28 de junio, oportunidad en la que los participantes reivindican el respeto de sus derechos. La comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) marchan desde hace varios años y cada vez se van sumando más grupos. Otra de las formas de manifestación constituye el Besatón, una actividad impulsada sobre todo por la organización SOMOSGAY, que se realiza “contra la violencia homofóbica, lesbofóbica, bifóbica y transfóbica”²⁰.

Las demandas del colectivo además de dirigirse al Estado también tienen por objetivo concienciar a la sociedad en general, de manera a evitar la discriminación en distintos ámbitos.

Entre las **principales organizaciones y colectivos** están:

- Escalando, Asociación de mujeres trans trabajadoras sexuales
- Panambí, Asociación de travestis, transexuales y transgénero del Paraguay
- Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas
- GAG-LT, Grupo de Acción Gay Lésbico Transgénero
- La Mansión 108
- SOMOSGAY
- LESVOS, organización de mujeres lesbianas
- Federación LGBT Paraguaya

²⁰ <http://somosgay.org/infonoticias/infodetalle/por-que-nos-besamos-en-el-besaton>



Paraguay



7

Movimiento urbano

El movimiento urbano está conformado por diferentes tipos de organizaciones que tienen reivindicaciones vinculadas al derecho a vivir en la ciudad. Entre ellas organizaciones barriales, que han tenido una presencia discontinua y que, en ciertos momentos lograron colocar sus reivindicaciones en la agenda nacional y sumar solidaridades a sus luchas. Este movimiento tiene más presencia y visibilidad en la capital del país (Palau, et al., 2018).

Entre las organizaciones con mayor visibilidad está la Coordinadora General de Organizaciones Sociales y Comunitarias de los Bañados de Asunción (Cobañados), que reclama al Estado respuestas en torno a las inundaciones que permanentemente obligan a las familias a abandonar sus casas ante cada crecida.

La Cobañados es una articulación de organizaciones comunitarias de los Bañados de Asunción, que articula a 8 coordinadoras zonales que a su vez están compuestas en promedio por 15 organizaciones de base (grupos juveniles de barrio, de pescadores, cooperativas de recolectores y recicladoras, guarderías comunitarias, etc.). La Cobañados reivindica su derecho a vivir en la ciudad para los y las bañadenses y está resistiendo al proyecto desde hace más de 15 años, pidiendo la implementación de una Defensa Costera como solución a las inundaciones²¹. Las principales acciones que realizan constituyen las carpas de resistencia, mesas de diálogo con autoridades locales y nacionales, y movilizaciones.

²¹ <https://psh.urbamonde.org/#/es/community/217>



8

Movimiento ambientalista

El movimiento ambientalista se caracteriza por estar conformado fundamentalmente por dos tipos de organizaciones, una, las que están vinculadas principalmente al derecho a consumir alimentos sanos de origen campesino (red Agroecológica y Mercadito Campesino), constituyéndose en un “puente” entre el campo y la ciudad y a una crítica al actual modelo productivo (Plataforma Ñamoseke Monsanto). También en los últimos años, algunas organizaciones y asociaciones de productores/as vienen planteando entre sus reivindicaciones el derecho a una alimentación sana y la producción agroecológica, aliándose con grupos más urbanos. Las otras, constituidas por las que se manifiestan ante agresiones al medio ambiente, que se caracterizan por un activismo ambiental muy importante, pero a la vez esporádico y poco articulado (Palau, et al., 2018).

En el estudio de Palau, et al. (2018), destacan que dentro del movimiento ambientalista están aquellas organizaciones que comparten una crítica al actual modelo de desarrollo productivo y reivindican alternativas de comercialización, consumo y la agricultura campesina. Son organizaciones y colectivos que ante la crisis ambiental solicitan el cumplimiento de políticas existentes que atiendan este flagelo.

En cuanto a cómo se ven, las organizaciones y colectivos ambientalistas

se autoidentifican o como grupos o como plataformas/redes, básicamente compuestas por ciudadanos y ciudadanas, relacionadas a espacios de acción donde prevalece la heterogeneidad y la diversidad entre sus miembros, como en el tipo de organizaciones con formas organizativas flexibles y sin financiamiento externo, compartiendo una identidad vinculada a la transformación del mundo de la vida, como las demandas de valoración del mundo campesino y resaltando las vinculaciones entre el mundo rural y urbano. (Palau, et al., 2018, p.84).

Entre las demandas del movimiento están la comercialización de la producción campesina y alternativas al mercado de consumo de alimentos, demandas que implican una crítica al actual modelo de desarrollo y apuntan a instalar prácticas y valores vinculados



a la soberanía alimentaria (Palau, et al., 2018). En cuanto a los modos de acción, sobre todo de aquellas organizaciones vinculadas al derecho a consumir alimentos sanos de origen campesino, apelan principalmente a las ferias de productos campesinos y de semillas, en espacios públicos, sobre todo en las plazas de la capital.

En tanto que aquellas organizaciones que se manifiestan ante agresiones al medio ambiente, han recurrido a otro tipo de acciones, como la protesta, bloqueos de rutas y manifestación frente a ministerios, como el caso concreto que se dio para impedir la tala de árboles en el Jardín Botánico de Asunción en los meses de setiembre y octubre de 2019.

Referencias consultadas

- Areco, A. y Palau, M. (2016). Judicialización y violencia contra la lucha campesina. Asunción: Base Is.
- Molinier, L. (2018). Educación pública gratuita y de calidad, sin discriminaciones (nota de política). Asunción: Japolí.
- Palau, M; Irala, A; Coronel, C; Yuste, JC (2018). Canalización de demandas de los Movimientos Sociales al Estado. Asunción: BASE-IS.
- Pilz, D. (2005). Pérdida de protagonismo del movimiento sindical y deterioro de las condiciones laborales marcan el final de una década, en Informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, 2005. Asunción: CODEHUPY.
- Pilz, D. (2019). Represiones a las protestas siguen siendo la constante. Derecho a la reunión, manifestación y asociación. En: CODEHUPY (ed.) *Derechos Humanos. Paraguay 2019*. Asunción: CODEHUPY.
- Villalba, S. (2020). *La dimensión política de los movimientos sociales: el caso de Paraguay*, artículo elaborado para la Mesa Nacional de la Plataforma Mercosur Social y Solidario (PMSS).



LA JUSTICIA
ES CORRUPTA
CIEGA-SORDA-
MUDA

EL PUEBLO
NO

Uruguay





Uruguay

MAPEO DE MOVIMIENTOS SOCIALES EN URUGUAY

Ignacio Arboleya
Ingeniero Agrónomo

Alvaro Moreno
Arquitecto
Centro Cooperativista Uruguayo CCU

INTRODUCCIÓN

Es importante aclarar algunas particularidades del contexto del país que se están viviendo en estos últimos días, lo cual seguramente modifique la realidad que se pretende plasmar en este mapeo.

El Uruguay actualmente está transitando por un proceso electoral que tiene altas probabilidades de resultar en un cambio de signo en el gobierno central, luego de tres períodos de gobierno de la izquierda (2005-2019). En efecto, en el próximo balotaje del 24 de noviembre se pronostica un favoritismo claro del Partido Nacional, liderando una coalición multipartidaria integrada por partidos de centro derecha y de derecha.

Existe un número de razones por las cuales el Frente Amplio perdió una cifra aproximada a los 200.000 votos (un 8%) respecto al 2014. Pero ello además de necesitar un análisis con mayor perspectiva, excede el alcance de este trabajo.

Un posible escenario de cambio del signo del Gobierno sin dudas va a generar cambios en la dinámica política y social del país y en las agendas y estrategias de los movimientos y organizaciones sociales.

Como se verá más adelante, tanto los movimientos sociales tradicionales como los emergentes se han ido fortaleciendo a lo largo de estos quince años de gobiernos progresistas. En efecto, si bien los movimientos han mantenido su independencia respecto



Uruguay

al gobierno y han planteado su agenda muchas veces interpe­lándolo, en general han encontrado respuestas a buena parte de sus planteos y se han generado políticas e instrumentos de política acordes.

Frente a un nuevo gobierno de sesgo conservador, es previsible un mayor protagonismo de los movimientos sociales para la defensa de los logros materiales y derechos obtenidos. Por un lado el posible nuevo gobierno plantea una fuerte reducción del gasto público y por otro algunos de los partidos integrantes de esa coalición opositora cuestionan los avances alcanzados en la agenda de derechos.

Pero también frente a un escenario de triunfo del FA, el contexto político sufrirá cambios ya que lo hará por primera vez sin contar con mayoría parlamentaria y esto tendrá un efecto directo sobre el avance en la agenda de derechos (muchos de estos avances se lograron sólo con los votos del oficialismo). Por lo que será vital la capacidad de movi­lización, propuesta y negociación de los movimientos.

En otro orden, nuestro país al igual que el contexto regional y mundial viene sufriendo nuevas formas de participación social, de participación ciudadana, la cual genera nuevas dinámicas de movilización, de agrupación y de sociabilización. Relacionada con la tecnología, con el uso de las redes sociales, característica que no es tan solo una nueva forma, sino que también incide en el objeto de lucha, en el fin del propio movimiento.

Por último, aclarar que este documento, es un primer mapeo de las organizaciones más protagónicas de la dinámica social del Uruguay, trabajo al que sin dudas es necesario continuar profundizando, con mayor análisis, marco teórico, investigación y datos.



Uruguay

BREVE CARACTERIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN URUGUAY

Se entiende pertinente aclarar que se utiliza el término “Movimiento” en su más amplio significado.

Desde este enfoque se describen algunos movimientos de larga data en el país (como el sindical o el cooperativo) así como movimientos o alianzas más recientes emergentes de las movilizaciones en torno a la llamada nueva agenda de derechos, movilizaciones que lograron acompañar y promover cambios en el marco jurídico nacional. Es el caso de los movimientos por la legalización del aborto, la legalización de la marihuana, los movimientos en pos de reconocer y legislar atendiendo a la diversidad sexual, a favor del matrimonio igualitario, entre otros.

Movimientos que han generado nuevas formas de movilización, con gran participación fundamentalmente de la juventud. Características que difieren de los movimientos más tradicionales, al menos hasta ese entonces.



1

MOVIMIENTO SINDICAL

Con una larga tradición sindical, en el Uruguay el movimiento obrero está representado por la central única de trabajadores Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), que agrupa los diferentes sindicatos.



Uruguay

En su misión define sus objetivos: *“la afiliación sindical, organización y formación de los trabajadores del país. Plantea como Visión el construir entre todos una sociedad más justa y solidaria, donde los medios de producción y de servicios estén en manos de los trabajadores. Para llegar a un Uruguay, un mundo, en el cual no existan explotados”*²².

Su rol histórico de liderazgo de las luchas populares, principalmente en tiempos de dictadura (1973 – 1985), fue fundamental para el diálogo social, intersectorial, vinculándose a otros movimientos sociales, como el estudiantil y el cooperativista.

En años posteriores a la dictadura con el avance de los modelos neoliberales, fue un actor clave frente a la privatización de las empresas públicas, promoviendo un referéndum y posterior plebiscito que con apoyo de la población lograron dejar trunco estas transformaciones impulsadas por los partidos tradicionales.

Desde el ascenso del Frente Amplio al gobierno en 2005, con diferentes políticas públicas que atendieron a tradicionales demandas del PIT-CNT, este se ha fortalecido como actor de incidencia dentro de la agenda nacional.

Un posible indicador de esto podría ser el aumento de sus afiliados, que ha incrementado de 110.000 trabajadores en 2005, a 400.000 en la actualidad²³. Crecimiento que entre otros factores, se podría asimilar a la formalización del mercado laboral, institucionalización de espacios de lucha, reconocimiento gubernamental del órgano gremial²⁴, y empoderamiento de la organización sindical. La propia restauración de los Consejos de Salarios, ámbitos tripartitos de negociación salarial, se podría concebir entre otras como una de las causales de este proceso (Antía et al, 2013).

Asimismo, desde algunos análisis sobre este nuevo contexto del movimiento sindical, se plantean complejidades:

Uno de los principales problemas que están planteados en este tema, es que la sindicalización de los nuevos grupos se ha venido desarrollando con gran celeridad y en consecuencia con serios problemas en cuanto a la necesaria internalización en los nuevos sindicalizados de una cultura y de grandes objetivos que acompañen a las reivindicaciones específicas más allá de una mera defensa corporativa. Esta visión global de la sociedad fue una de las mejores tradiciones del movimiento sindical uruguayo que es indispensable recuperar, actualizar y generalizar en la creciente masa de asalariados a sindicalizar. Portillo (2012).

22 <https://www.pitcnt.uy>

23 Fernando Pereira, presidente del PIT CNT, en Semanario Búsqueda 7/06/2018.

24 Ejemplo la Ley 17940 de Promoción y Protección de la Libertad Sindical del 2006.



Uruguay

Si bien recientemente no se han vivido grandes movilizaciones, es de destacar la aprobación de la Ley 19.196, conocida como Ley de responsabilidad penal empresarial, aprobada en el 2014, promovida principalmente por el sindicato de la construcción Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) y metalúrgicos Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA), sindicatos que lograron generar un gran apoyo popular, y que su validez en el tema puede ser reconocida en sus resultados, con una baja de la accidentalidad en el trabajo²⁵.

Frente a la implantación de una nueva planta de celulosa UPM (2), la que se plantea como la mayor inversión de la historia del Uruguay (4.000 millones de dólares), el PIT-CNT ha hecho pública su valoración positiva, enfocado en el importante aumento de puestos de trabajo que conlleva la inversión, principalmente en la etapa de construcción de la planta. Esta posición busca darle la prioridad a la generación de puestos de trabajo en un momento de aumento de la tasa de desempleo. Sin embargo choca con la visión de los movimientos ambientalistas que como se verá más adelante se oponen fuertemente a su instalación.



2

MOVIMIENTO COOPERATIVISTA

El cooperativismo en el Uruguay es un actor de vasta tradición, con sus primeras experiencias a comienzos del siglo pasado, y que en los últimos años ha logrado una madurez institucional, aunando las diversidades del movimiento dentro de su organización gremial de 3er grado CUDECOOP (Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas).

²⁵ El total de accidentes de trabajo registrados por el Banco de Seguros del Estado (BSE) cayó 21,37% entre 2013 y 2015, al año siguiente de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador. Para 2016, según cifras provisionales del BSE, la disminución se situó en 28,4%. La baja de accidentes tuvo sus cotas más altas en la construcción: 34% para 2015 y trepó a 46,9% en 2016; en la industria manufacturera, los guarismos son 21% y 41,5%; en el transporte, 8% y 21%; en agricultura y frigoríficos (este último es un sector muy castigado; más de 40% de sus trabajadores terminan su período laboral con una discapacidad de por vida), la caída de accidentes laborales y enfermedades profesionales fue de 24% y 33,7% en 2016. (La Diaria 18/11/2017)



El movimiento se ha consolidado como un actor influyente en diferentes políticas públicas, principalmente desde el 2008 con la aprobación de la Ley 18.407 (Ley de Cooperativas), la que consagra una de las reivindicaciones de más larga data del Movimiento Cooperativo Nacional, la creación del Instituto Nacional del Cooperativismo, personería jurídica de derecho público no estatal, integrada por representantes del Poder Ejecutivo como también por representantes designados por el propio movimiento cooperativo a cargo de CUDECOOP.

Actualmente el movimiento está representado por su confederación (CUDECOOP), la cual reúne las diferentes clases cooperativas (Trabajo, Consumo, Agrarias, Vivienda, Ahorro y crédito, Seguros), esta composición plantea una compleja heterogeneidad del movimiento (de intereses ideológicos, políticos, etc.). Es así que el movimiento cooperativo participa de varios frentes, desde movilizaciones populares en reclamo de tierras para viviendas, hasta temáticas vinculadas a la competitividad de las cooperativas con otras formas empresariales que forman parte de la agenda de otras modalidades (cooperativas de trabajo, cooperativas agrarias, cooperativas de consumo o de ahorro y crédito).

Respecto a la agenda de CUDECOOP, en su última planificación plantea:

*“El Plan Estratégico de CUDECOOP para el período 2019 – 2020, aprobado por el Consejo Directivo del 11/04/19, se ha desarrollado en función de 6 dimensiones estratégicas (Representación gremial a nivel Nacional; Representación gremial a nivel Internacional; Gestión de política pública; Gobernanza del Movimiento y gestión de la Confederación; Desarrollo cooperativo y Comunicación, identidad y visibilidad pública). A cada una de estas dimensiones le corresponde un Objetivo Estratégico y un conjunto de Metas Estratégicas.”*²⁶

Recientemente frente a las elecciones nacionales, ha generado espacios de intercambio y aportes desde el cooperativismo a los principales partidos políticos. En el ámbito internacional, es de resaltar que CUDECOOP se encuentra presidiendo el órgano cooperativo continental, ACI Américas.

26 <http://www.cudecoop.coop>



Un caso: FUCVAM, cooperativismo de vivienda

Es de resaltar la particularidad del Cooperativismo de Vivienda como Movimiento Popular referido al hábitat, actualmente singular ya que podría concebirse como el actor social más consolidado con objeto en lo urbano a nivel nacional. Movimiento liderado tradicionalmente por la Federación Uruguaya de Cooperativistas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), en la actualidad también en relación con otras federaciones, principalmente la Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo (FECОВI) y la Federación de Cooperativas de Viviendas Sindicales (FECOVISI).

La fortaleza de este sector del cooperativismo dentro de la movilización popular tiene orígenes en el rol que FUCVAM logró llevar adelante durante la dictadura. Donde la no clausura de la federación fue un hecho relevante (sí fueron clausurados sindicatos, organizaciones estudiantiles entre otros), ya que le permitió transformarse en un actor significativo dentro de los movimientos populares contrarios a la dictadura, en esto se enmarca la creación de la Intersocial, junto al PIT, la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) donde generaron un frente de resistencia. Este proceso generó en el cooperativismo de vivienda una base social muy fuerte, desarrollando líneas claras de trabajo en lo comunitario, en la solidaridad, tanto dentro de las propias cooperativas, como también en la relación barrial y con la ciudad. Estas características se han perpetuado hasta nuestros días.

Es de resaltar el desarrollo territorial que ha tenido como movimiento popular, generando desde sus comienzos (1968) experiencias de cooperativas en gran parte del país, incluso en localidades de muy poca población. Esto ha planteado una composición que representa diferentes realidades del hábitat nacional.

En los últimos años el desarrollo que el cooperativismo ha tenido en el interior del país plantea una continuidad, dado que en esta nueva expansión (2008-2018), ha sido notoria la cantidad de cooperativas del interior, con aproximadamente el doble de cooperativas que en el caso de Montevideo presentadas a la solicitud de préstamo²⁷.

Por otra parte, el aumento de inversión en vivienda cooperativa que se ha dado desde los gobiernos del FA (el mayor en la historia del sistema), así como nuevas

²⁷ Según datos del Ministerio de Vivienda, en el periodo 2008-2018 se presentaron 13766 viviendas cooperativas en el interior del país, mientras en Montevideo 7259 viviendas.



herramientas que atienden a las tradicionales demandas del movimiento, al igual que lo visto en el movimiento sindical, esto ha elevado el número de cooperativistas, incorporando a miles de familias al sistema cooperativo, lo que, en menor medida, pero ha incrementado la masa crítica del movimiento.

En la actualidad FUCVAM viene incrementando el volumen de movilizaciones, apoyada en reivindicaciones tradicionales, como ser un aumento de tierras para cooperativas, y principalmente la rebaja a 2% de la tasa de interés del préstamo (actualmente en un 5%). Estas movilizaciones han generado una ruptura de diálogo con el gobierno, el cual ha sido sumamente fluido en estos últimos 15 años, con aportes para la mejora del sistema, de la política pública. Estas diferencias se ven manifiestas recientemente con la exigencia por parte de FUCVAM de la renuncia de la ministra de Vivienda. Este cambio de tono dentro del movimiento, podría estar relacionada a la asunción de una nueva directiva a la dirección de FUCVAM.

Dentro de lo que podríamos identificar como plataforma reivindicativa de FUCVAM, resalta la ya comentada rebaja de la tasa de interés del préstamo, de 5% a un 2%, la exoneración del IVA para la compra de materiales, y quizás el punto de mayor complejidad estructural, la reinstauración del antiguo Fondo Nacional de Vivienda, ya que hoy día la inversión del sistema de vivienda se adjudica con una partida presupuestaría del Plan Quinquenal del gobierno. A estos tres puntos podemos incorporar tradicionales exigencias referidas a tierras, que en la actualidad se complementan con tierras con servicios (infraestructura), en áreas consolidadas de la ciudad.

Nota: Las organizaciones colectivas de la Agricultura Familiar

Las formas cooperativas y asociativas vinculadas a la Agricultura Familiar son de larga data. Con más de cien años de trayectoria, las diversas formas asociativas con espíritu cooperativo han buscado resolver diferentes necesidades de los productores rurales, especialmente los familiares. Al igual que en otras partes del mundo, a la par de una acción de representación gremial en principio buscaron superar las restricciones y desafíos que planteaban los mercados agropecuarios. Estos se caracterizan por concentrar la demanda de la producción frente a una múltiple oferta y, por otro, en concentrar la oferta de insumos y servicios frente a una amplia diversidad de la demanda. Muchas de estas organizaciones de la economía social nacieron como una respuesta organizada de la producción familiar y de mediana escala a este problema.



Posteriormente comenzaron a atender los desafíos que planteaban los procesos de modernización tecnológica que podrían tener consecuencias excluyentes para la producción familiar y media por sus exigencias de escala y capital, a afrontar la articulación para ganar poder negociador o competitividad frente a otros actores empresariales, y a incorporar una creciente agenda de temas vinculados al desarrollo rural.

En los últimos años se han generado nuevos desafíos a las organizaciones asociativas, debidos a los cambios en los mercados fruto de los procesos de globalización, así como del rol del Estado y sus posibilidades de acción frente a este fenómeno. Un grupo de estos desafíos se vincula a los requerimientos de escala, tecnificación y financiamiento que supone la nueva dinámica productiva que imponen estos mercados globalizados. Por otra parte, también es un desafío la identificación de las nuevas formas de organización y articulación para disminuir estas amenazas sin perder o dándole una nueva dimensión a los principios y valores que sustentan esta forma de hacer economía²⁸.

Desde el punto de vista jurídico, en el medio rural uruguayo se pueden distinguir tres grandes formas de organización de la Agricultura Familiar que implementan prácticas asociativas con valores cooperativos:

- Las cooperativas propiamente dichas (agrarias o de trabajo)
- Las Sociedades de Fomento Rural que tienen su origen en las Comisiones de Fomento Rural y que fueron creadas con fines básicamente sociales pero que rápidamente incorporaron servicios a sus socios.
- Organizaciones gremiales agropecuarias (con el formato jurídico de asociaciones civiles) que implementan servicios a sus asociados y que frecuentemente articulan acciones con cooperativas o el sistema de fomento rural.

Las organizaciones están presentes en todo el territorio nacional, aunque en general son más numerosas y desarrolladas en aquellas regiones donde los rubros y/o procesos productivos facilitan o propician la asociatividad. Es así que, en la cuenca lechera, en las zonas hortifrutícolas o agrícolas suele haber un mayor número de organizaciones o al menos más antecedentes de organización que en regiones de ganadería extensiva.

²⁸ CCU – FIDA MERCOSUR: Contribución del cooperativismo al desarrollo de la agricultura familiar en el Uruguay. 2014.



Uruguay



3

MOVIMIENTO FEMINISTA

En sintonía con el impulso que este movimiento viene teniendo a nivel regional, e incluso mundial, en Uruguay se encuentra en un momento de auge, de consolidación, ya no solo como actuaciones puntuales (marcha 8M, movilizaciones frente a femicidios) sino planteando una agenda de trabajo, involucrada en diferentes ámbitos institucionales.

Si bien cuesta identificar un liderazgo por parte de un grupo o una representación unívoca, el movimiento feminista en el Uruguay se agrupa principalmente en la Intersocial Feminista y la Coordinadora de Feminismos del Uruguay, esta última con un marcado perfil antipatriarcal y anticapitalista. Estas agrupaciones están integradas por colectivos sumamente diversos, que generan una composición muy heterogénea (agrupaciones estudiantiles, políticas, gremiales, de colectivos afro, etc.).

Los frentes de lucha del feminismo, al igual que en otros países, vienen interpelando a los propios movimientos populares, es así que han surgido espacios dentro del ámbito sindical y cooperativo, con la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad sexual del PIT CNT, Área de Género y Desarrollo Social de FUCVAM, Comisión de Género de CUDECOOP.

Los logros generados en la llamada nueva agenda de derechos (legalización del aborto, matrimonio igualitario, del consumo de marihuana, ley integral para personas trans, etc.) encuentran apoyo fundamental dentro de este movimiento, lo cual plantea un frente de resistencia a posibles retrocesos enunciados por la coalición de derecha, que más allá del ascenso o no a la presidencia, conforma desde ya una mayoría parlamentaria (17 de 33 senadores) en el próximo periodo 2020 – 2025.

Muestra de esto es la consigna de la Intersocial Feminista de la marcha del pasado 8M:

*“Este 8 de marzo la INTERSOCIAL FEMINISTA convoca a parar y marchar para resistir todo avance fascista y de antiderechos. No vamos a permitir ni un paso atrás de los derechos conquistados en nuestro país. Por eso decimos: ANTE EL FASCISMO MÁS FEMINISMO.”*²⁹

²⁹ <http://www.cotidianomujer.org.uy/sitio/97-activismo/2048-8m-proclama-de-la-intersocial-feminista>



Uruguay

Es de resaltar que la marcha del 8M se ha transformado en una de las movilizaciones de mayor concurrencia principalmente en la capital, pero que tiene alcance territorial en ciudades del interior del país.

Por otra parte, dentro del Movimiento Feminista podemos identificar espacios de lucha contra la trata de personas, fundamentalmente vinculadas a la explotación sexual. Desde el 2018 se cuenta con una Ley de combate y prevención a la trata de personas³⁰, la cual se reconoce por actores del movimiento como un avance sustantivo al problema. Esta ley plantea soluciones interinstitucionales (capacitación, el tema habitacional, etc.) más allá del acompañamiento psicosocial.



4

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Movimiento integrado principalmente por los gremios de estudiantes de secundaria, Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU), formación docente y estudiantes universitarios, agrupados en la Coordinadora de Estudiantes.

Este es uno de los movimientos tradicionales del país, que tienen su anclaje en las movilizaciones del 68, previas a la dictadura, las que se potenciaron durante el gobierno de facto. Ha mantenido alianzas junto al movimiento de trabajadores, compartiendo movilizaciones.

Recientemente se ha movilizó frente a la propuesta de Reforma Constitucional impulsada por parte del Partido Nacional, en búsqueda de incrementar medidas de seguridad pública con presencia de militares en el patrullaje entre otras “soluciones”. El movimiento estudiantil se ha manifestado activamente con el “No a la Reforma”, generando marchas, concentraciones, talleres de información, colocando carteles en los centros educativos, haciendo visible y generando reflexión en torno al tema.

³⁰ Ley N° 19643, aprobada en julio 2018.



Uruguay



5

MOVIMIENTO POR DD.HH

Relacionado con la búsqueda de los desaparecidos de la dictadura, este movimiento está integrado por las organizaciones de Familiares, Hijos de desaparecidos, que a 35 años del fin de la dictadura continúan en búsqueda de Verdad y Justicia.

La marcha por los desaparecidos de cada 20 de mayo (desde 1996), conocida como “La Marcha del Silencio” continúa siendo la movilización con mayor participación popular del país, este año su consigna fue “¡Que nos digan dónde están!, contra la impunidad de ayer y hoy”.

Recientemente el hallazgo en un cuartel del Ejército Nacional de los restos de Eduardo Bleier, militante comunista desaparecido por la dictadura militar, ha motivado nuevas instancias jurídicas, que podrían encaminar a la justicia. Es de esperar que esto tenga repercusiones dentro de este movimiento. Por otra parte, las decisiones frente al tema que tome el nuevo gobierno (en caso de ser la coalición de derecha) seguramente también van a repercutir en futuras movilizaciones.



6

MOVIMIENTO AMBIENTALISTA

La implantación de una nueva planta de celulosa (la tercera), la llamada UPM 2, ha generado movilizaciones contrarias a su desarrollo. Estas movilizaciones son encabezadas por el Movimiento UPM 2 NO, que se define como un movimiento ciudadano³¹ que cuestiona la construcción de la planta desde sus diferentes dimensiones (económico, energético, social, ambiental).

Este movimiento como se ha mencionado previamente, va a contra marcha de lo declarado por la central sindical, y claramente contrario a la política sobre el tema que ha desarrollado el gobierno del FA.

Recientemente han generado movilizaciones contrarias no solo a la planta de celulosa, sino a las obras de infraestructura que conlleva la inversión, principalmente la construcción del llamado “tren de UPM”. Línea férrea que conectará la planta de celulosa ubicada en el centro del país, con el puerto de Montevideo, trazado que atraviesa numerosas localidades, y el cual espera una frecuencia alta de tránsito del ferrocarril, que según estudios va a tener repercusiones en las construcciones linderas a la vía del tren, como también desde lo social – urbano fragmentando las diferentes localidades que atraviese.

Es de resaltar que la última movilización realizada en el centro de Montevideo (09/2019) contó con un operativo de represión policial poco común en los últimos años (utilización de balas de goma, manifestantes presos, heridos, etc.).

31 “Somos un movimiento ciudadano que está en contra de la instalación de una segunda planta de UPM por sus consecuencias perjudiciales para el Uruguay. De concretarse el proyecto, quitará fuentes de trabajo, aumentará nuestra deuda externa, incrementará el porcentaje de tierra erosionada, agregará contaminación al Río Negro, inundará San Gregorio de Polanco, expulsará más gente del campo, expropiará centenares de predios, partirá ciudades al medio con su ferrocarril, modificará la legislación laboral de todo el país y alterará nuestros planes de estudio” <https://upm2no.org/>



Asimismo, al movimiento UPM2 NO, se puede relacionar a otros frentes de la lucha ambientalista, como ser la construcción del puerto de aguas profundas en la costa de Rocha, la construcción de la regasificadora en Puntas de Sayago Montevideo, la implantación del proyecto de megaminería (Aratiri), entre otros.



7

MOVIMIENTO NO A LA REFORMA

Surge frente a la propuesta de reforma constitucional “Vivir sin miedo” impulsada desde el Partido Nacional que fue votada el pasado 27 de octubre, donde generó un movimiento popular en rechazo de esta, movimiento no partidario, que se define como:

*“Somos una articulación nacional compuesta por personas, organizaciones y colectivos, trabajando desde 2018 para evitar que la reforma constitucional impulsada por la campaña Vivir sin Miedo sea aprobada en octubre. Estamos convencidos y convencidas de que esta propuesta no solo no resolverá los problemas de seguridad, sino que los empeorará.”*³²

Este movimiento tiene antecedentes en el movimiento por el “No a la Baja”, el que logró la no aprobación de la baja de la edad de imputabilidad puesta a votación en el 2014.

Ambos movimientos lograron liderar el freno a estas propuestas desde sectores conservadores, y comparten no ser parte de ningún partido político, ni parte de otras estructuras sociales, si bien mantuvieron apoyo del movimiento sindical, los gremios docentes, el movimiento cooperativo de vivienda, de trabajo, del FA, y principalmente del movimiento estudiantil.

Este movimiento contó con una impronta fuertemente joven, que logró generar espacios de movilización, de reflexión sobre el tema, y una gran marcha en el centro de Montevideo.

Finalmente, la reforma no fue aprobada, pero de todas formas llama la atención el gran apoyo que tuvo en su votación (46%).

³² <https://www.noalareforma.uy>



Uruguay



8

OTROS MOVIMIENTOS

Existen otras expresiones sociales que son interesante de mapear, como ser movimientos que están surgiendo desde otras dimensiones, en su mayoría que responden a cuestiones más puntuales, sean temáticos (ley trans) o por anclaje territorial (comisiones barriales).

Movimiento por la Ciudad

Refleja algunas de las dinámicas que se vienen llevando adelante en los espacios urbanos, principalmente de Montevideo, movilizaciones sociales que han logrado modificar rumbos de políticas urbanas, o de inversiones en sectores de la ciudad. En esto es interesante lo generado en contra a la construcción de una terminal fluvial en la rambla de Montevideo, en el actual Dique Mauá.

Ante la propuesta de esta inversión se generó un movimiento autoconvocado “Asamblea permanente por la Rambla Sur” con movilizaciones urbanas, creativas, con espectáculos culturales, talleres de intercambio con académicos, etc. Esta movilización logró finalmente poner en discusión la propuesta de terminal, y recientemente se realizó un Concurso Público de Ideas para ese espacio de la ciudad.

En sintonía con la experiencia del Dique Mauá, otras experiencias como lo que se viene desarrollando en la “Comisión Plaza Uno”, comisión barrial de la Ciudad Vieja de Montevideo que realiza reuniones, talleres, asambleas para trabajar el tema de la vivienda, la gentrificación, la inmigración, los espacios públicos, etc. Este colectivo ha logrado participar en diálogo con la Intendencia de Montevideo y FUCVAM, en el desarrollo de experiencias cooperativas en el barrio. Así como poner a discusión popular los destinos de determinados espacios vacantes de esta porción de la ciudad.

Estas experiencias son algunas de las que se vienen desarrollando actualmente, que junto a otras podrían identificarse como un movimiento por la ciudad, si bien no tienen hoy día un representante que agrupe estas miradas.

Estas movilizaciones se pueden identificar muy en sintonía con el vigente Derecho a la Ciudad promovido desde Hábitat III, donde ya no es tan solo el derecho a acceder democráticamente a los servicios, beneficios que brinda la ciudad, sino a ser parte de su construcción, a participar de las decisiones que hacen a la ciudad.

Movimiento Agroecológico

La agroecología en Uruguay se vincula desde el inicio a una postura crítica del modelo dominante de agricultura industrial y a la construcción de pensamiento alternativo. Impulsada desde la década de los 80 por estudiantes, docentes universitarios, agricultores/as, Organizaciones No Gubernamentales y consumidores/as.

Plantea la necesidad de proteger la naturaleza, fortalecer procesos ecológicos en los sistemas agrarios; junto con la preocupación sobre la concentración, extranjerización y acceso a la tierra; la problemática social y económica de la Agricultura Familiar y la soberanía alimentaria.

Se opone al modelo neoliberal y su expresión en la gestión de los bienes de la naturaleza- el capitalismo productivista agrario- que determina severas consecuencias ambientales, sociales y económicas.

El movimiento plantea su preocupación por la profundización del modelo industrializado de agricultura mediante la intensificación de los sistemas, uso de insumos, concentración de los medios de producción y segregación de la Agricultura Familiar.

Distintos actores impulsaron la construcción de un Plan Nacional de Agroecología, dando cuenta de una larga historia de crítica, resistencia, investigación, construcción de alternativas. Manteniendo un compromiso multidimensional: político, social, cultural, ecológico – productivo, técnico y ético; en la construcción de sustentabilidad de los sistemas agroalimentarios.

Proponiendo iniciar procesos de transición agroecológica, construyendo opciones de desarrollo sostenibles que se plantean desde lo agrario pero que lo trascienden porque se trasladan y emergen en toda la sociedad.

En diciembre del 2018, el Parlamento emitió la Ley 19.717 que declara de interés general la agroecología y crea una Comisión Honoraria que tiene como principal cometido trabajar para elaborar un Plan Nacional de Producción con Bases Agroecológicas.



Uruguay

El movimiento social por la agroecología y la soberanía alimentaria integrado por la Red de Agroecología del Uruguay, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología capítulo Uruguay, junto a la Red de Huertas Comunitarias del Uruguay y la Red de Grupos de Mujeres Rurales, fue determinante para la propuesta y aprobación del “Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas”, del 11 de diciembre de 2018.

Según la Red de Agroecología, el logro de la ley “es como un hito, una acumulación de muchos años de desarrollo de la agroecología como una propuesta diferente en Uruguay, que sigue su paso a nivel de los sistemas de producción y de comercialización, pero que ahora logra un piso diferente o una capacidad de acción mucho mayor, al ser incluida dentro de las políticas públicas y dentro de lo que es una acción planificada del Estado junto con organizaciones sociales”.

Sin embargo, estos colectivos se movilizaron nuevamente para que el Gobierno elaborara el Decreto reglamentario de la Ley y convocara la constitución de la Comisión Honoraria.

Finalmente, en junio de 2019 se convoca la integración de la Comisión Honoraria por parte del Gobierno.

Movimiento por Ley Trans

Movimiento que surge en defensa de la Ley Integral para Personas Trans³³, frente la puesta a consulta de pro referéndum para su derogación, impulsado por parte de sectores conservadores vinculados a iglesias evangélicas, liderado por integrantes del Partido Nacional.

Este movimiento se organizó bajo la “Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans” y se plantea como:

“Este frente unido se conforma gracias a esfuerzos colectivos e individuales en pos de la aprobación de la ley y de la defensa de todos los derechos para todas las personas.

Nuestra acción es desde el amor, la alegría y sobre todo, la información y la militancia en las calles.”³⁴

³³ Ley 19.684 aprobada en octubre 2018

³⁴ <https://leytransuy.wixsite.com/misitio>



Uruguay

Este colectivo contó con gran apoyo del PIT-CNT, del Frente Amplio y otros partidos de izquierda, de colectivos feministas, del movimiento estudiantil y otras organizaciones populares. La consulta pro referéndum no logró el apoyo del 25% del electorado necesario para someter a la ciudadanía la iniciativa de derogar la ley.



© Santiago Mazarovich



Uruguay



© Rebelarte





PROBLEMATIZANDO NUESTRAS LECTURAS SOBRE LA POLITICIDAD DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

La idea de hacer un mapeo de los movimientos sociales en cada uno de nuestros países, surgió como parte de una tarea mayor, cuál era la de integrar la experiencia de los movimientos sociales a nuestros análisis políticos y de coyuntura, tanto en el ámbito nacional como regional. El diagnóstico inicial para emprender esta tarea era que, en muchos casos, la dinámica de los movimientos sociales se la tiende a ignorar o invisibilizar, de tal manera que la coyuntura se la entiende, básicamente, como la situación política en el Estado y de los actores tradicionalmente definidos como políticos, es decir, los partidos y alianzas políticas.

Desde este punto de vista, tal vez, el primer paso para integrar a los movimientos sociales en el análisis político tiene que ver con hacernos parte de una noción ampliada de lo político, que de distintas maneras dan cuenta los informes que se realizaron desde cada uno de nuestros países.

Entre los autores que han enfatizado en esta perspectiva, hay que mencionar, en primer lugar, a Antonio Gramsci que, al ampliar su mirada sobre el Estado, como sociedad política (o Estado, en sentido estricto) y sociedad civil (o aparatos de la hegemonía) amplió la noción de la política. Para Gramsci, la política no se reducía solo a los aparatos del Estado que aseguran el *dominio* en una sociedad, sino que también a diversas iniciativas públicas y privadas que colaboran con el Estado, pero más importante aún

que le permiten a la clase dominante ejercer dirección intelectual y moral a la sociedad, lo que hace posible la hegemonía³⁵.

Más recientemente, Pierre Rosavallon, propuso la distinción entre “lo político” y “la política”:

Lo político, tal como lo entiendo, corresponde a la vez a *un campo* y a *un trabajo*. Como campo designa un lugar donde se entrelazan los múltiples hilos de la vida de los hombres y las mujeres, aquello que brinda un marco tanto a sus discursos como a sus acciones. Remite al hecho de la existencia de una “sociedad” que aparece ante los ojos de sus miembros formando una totalidad provista de sentido. En tanto que trabajo, lo político califica el proceso por el cual un agrupamiento humano, que no es en sí mismo más que una simple “población”, toma progresivamente los rasgos de una verdadera comunidad...³⁶.

Al hablar sustantivamente de *lo* político, califico también de esta manera a una modalidad de existencia de la vida comunitaria y a una forma de acción colectiva que se diferencia implícitamente del ejercicio de *la* política. Referirse a lo político y no a la política es hablar del poder y la ley, del Estado y la nación, de la igualdad y de la justicia, de la identidad y de la diferencia, de la ciudadanía y la civilidad, en suma, de todo aquellos que constituye la *polis* más allá del campo inmediato de la competencia partidaria por el ejercicio del poder, de la acción gubernamental del día a día y de la vida ordinaria de las instituciones.³⁷.

Parece que ambos autores, nos invitan a repensar nuestras nociones de la política, condición estrictamente necesaria para valorar y reconocer la *dimensión política* de los movimientos sociales. Hasta aquí, muy probablemente, no agregamos nada nuevo a los saberes de nuestras organizaciones, que se desarrollaron, desde los años 80, en el campo de la Educación Popular. Desde esa experiencia, se reconocía que la Educación Popular era política, porque formaba parte de las prácticas de las organizaciones populares en sus luchas por su propia liberación o emancipación. La Educación Popular debía contribuir al proceso a través del cual el pueblo se constituía en sujeto político.

35 Gramsci, a propósito de su estudio de la historia italiana sostenía como criterio metodológico, que “la supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos, como “dominio” y como “dirección intelectual y moral”, y agregaba, “Un grupo social puede e incluso debe ser dirigente aun antes de conquistar el poder gubernamental (ésta es una de las condiciones principales para la misma conquista del poder); después, cuando ejerce el poder y aunque lo tenga fuertemente en el puño, se vuelve dominante, pero debe seguir siendo también “dirigente”. A. Gramsci, Cuadernos de la Cárcel Nº 19, *Risorgimento Italiano*. Ediciones ERA, México, 1999, Volumen 5, p. 387.

36 Pierre Rosavallon. Por una historia conceptual de lo político. Ediciones FCE, Buenos Aires, 2003, pp. 15 y 16.

37 Pierre Rosavallon. Por una historia conceptual de lo político. Ediciones FCE, Buenos Aires, 2003, pp. 19 y 20.

Sin embargo, no siempre es evidente o se puede reconocer de modo inmediato la *politicidad* de los movimientos sociales. Complotan para ello, diversos factores, como el peso y el lugar de los Estados en la historia de América Latina que fueron configurando culturas políticas que atribuyen al Estado un papel central o determinante en la acción política.

Sin desconocer la importancia que adquiere en cada país, la relación con el Estado, la situación actual de los movimientos, según se puede seguir en los informes nacionales que incluimos en este dossier, nos muestran hoy una diversidad de situaciones, la convivencia de enfoques tradicionales y nuevos, múltiples actores e identidades que ingresan o complejizan las luchas políticas, nuevas subjetividades, la importancia de las redes, el impacto de las nuevas tecnologías, etc. Este conjunto de nuevas formas de expresión y de acción colectiva interrogan las visiones más tradicionales de la política y nos enfrentan a nuevos debates sobre los modos de concebir la política y la politicidad de los movimientos sociales. Así, tenemos que:

1. En América Latina, desde un punto de vista histórico y estructural, el desarrollo de muchos movimientos sociales tiende a producirse en espacios diferentes, por ejemplo, rurales y urbanos. Pero, de manera mucho más extendida, desde sujetos e identidades colectivas: trabajadores sindicalizados, estudiantes, mujeres y feminismos, juventudes, pueblos originarios, negritud, cooperativismo, agroecología, etc., todo lo cual resulta muy expresivo de la heterogeneidad de nuestros pueblos.
2. Los mapeos elaborados desde cada país, dan cuenta de esta diversidad y heterogeneidad, ya que describen sus formas de organización, sus demandas, las cuestiones identitarias implicadas, sus alcances, y así como indica el informe de Argentina, sus “gramáticas” (movimientistas, autonomistas o clasistas). Por cierto, esta noción puede ampliarse o combinarse con otras nociones, como la de matrices movimientistas (étnicas, de izquierda clásica, autonomistas, etc.).
3. Se pueden reconocer también movimientos sociales que no siempre logran influir o incidir sobre el Estado permaneciendo en “zonas marginales” de la política. Pero, también existen corrientes o tendencias más recientes, desde algunas organizaciones o movimientos sociales, que rechazan explícitamente actuar en la institucionalidad vigente en nuestros países. Suelen definirse como corrientes autonomistas, y desconfían o no esperan nada del Estado.
4. Otros movimientos, especialmente entre los jóvenes, que el informe de Brasil, califica como “novísimos”, buscan constituir el mundo virtual y el mundo real, en espacios y formas de sociabilidad, con sus propias formas de expresión en la música, el teatro, el cine, etc., y que poco esperan de las estructuras políticas tradicionales, pero que hacen visible su deseo de “cambiar”.

Siguiendo esta línea de análisis, se podría sugerir que mientras el análisis político clásico refiere al Estado, como una suerte de unidad en que se condensa la política, el análisis de movimientos sociales remite a la sociedad y su inevitable diversidad. Los movimientos tienden a inscribirse más en el campo de “lo político”, de acuerdo la distinción que realiza Rosavallon, lo que no significa que renuncien –la mayoría de ellos- a incidir en el campo de “la política”.

Esta diversidad de los movimientos sociales puede –y de hecho alcanza formas de unidad- en coyunturas específicas, una crisis inflacionaria en la Argentina, o un estallido social como el de reciente ocurrencia en Chile, pero también en algunas coyunturas electorales significativas. Incluso más, en determinados procesos políticos en que el Estado se hace más poroso con relación a la sociedad y abre interlocuciones o relaciones de colaboración con los movimientos sociales (por ejemplo, la fase más activa del PT brasileño, que precede a su propia crisis en el Estado; el Peronismo en sus vertientes progresistas; el Frente Amplio en Uruguay).

Pero, aun reconociendo la diversidad de sujetos colectivos implicados en los movimientos sociales, y, en consecuencia, la centralidad que pueden adquirir las cuestiones identitarias, se superpone entre los movimientos, aquellos de vieja data –el sindicalismo, por ejemplo- y aquellos que han alcanzado mayor impacto en el tiempo reciente: las mujeres y el feminismo, los “pueblos originarios”, los afrodescendientes, así como una diversidad de expresiones juveniles, presentes en toda la región.

Teniendo en cuenta estas observaciones, que pueden ser objeto de debates o diferencias, sería interesante, dar un segundo paso en nuestro propósito por integrar a los movimientos a nuestros análisis políticos y de coyuntura, que supondría abordar al menos los siguientes problemas:

1. La cuestión de la politicidad específica de los movimientos sociales, o dicho de otra manera, responder a la pregunta de ¿En qué sentidos son políticos los movimientos sociales? O, más claramente ¿Cuál es la dimensión política que hacen visible, declaran o se proponen los movimientos sociales en nuestros países?
2. En segundo lugar, habida cuenta de la heterogeneidad y las dinámicas de los propios movimientos, también sería importante interrogarse sobre la temporalidad de los movimientos ¿Cuáles suelen ser los tiempos de los movimientos sociales? ¿En qué sentidos coinciden o son distintos a los tiempos políticos del Estado?
3. Una tercera problemática, sería pensar en las tendencias a la unidad y a la diversidad presente en los movimientos sociales. En nuestros mapeos, los movimientos aparecen descritos cada uno en la especificidad de intereses, demandas, iden-

tidades, formas de organización, tipos de movilización, etc. Todo lo cual tiende a reforzar una mirada de la diversidad y la heterogeneidad. La pregunta, que es necesario hacerse, sin embargo, sería: ¿Es posible reconocer alianzas, sentidos políticos compartidos, movilizaciones que suman a diversos movimientos? ¿Estas alianzas tienen un carácter episódico necesariamente o se perciben esfuerzos de unidad en el pueblo? ¿De qué naturaleza son estos esfuerzos, instrumentales, retóricos, o de proyectos de cambios sociales?

4. Un cuarto problema se relaciona con los modos de construcción de los movimientos y su relación con el Estado. En realidad, se trata de dos problemas, que se pueden relacionar, pero que se pueden abordar -al menos analíticamente- por separado. Este es un viejo problema asociado a los movimientos, en el sentido que habitualmente los movimientos, para constituirse, generan redes, articulan valores, invierten emocionalmente, movilizan recursos materiales y no materiales, y como afirman algunos autores, actúan en el Estado o sobre el Estado, cuando el “campo de oportunidades políticas” los favorecen.

Estos temas y preguntas que sugerimos, tienen por objeto, afinar más la mirada sobre los movimientos, y subyacen a su problematización, al menos tres hipótesis:

- a) La naturaleza política de los movimientos sociales es distinta –aunque no necesariamente opuesta- a las de los partidos políticos o de los movimientos políticos que buscan actuar sobre el Estado.
- b) Las perspectivas del cambio social y político, que en el pasado vimos encarnado en sujetos colectivos específicos (la alianza obrero- campesina, por ejemplo) se ha modificado sustantivamente en favor de una diversidad de nuevos sujetos colectivos, con sus propios lenguajes, categorías, visiones de mundo y aspiraciones de cambio social.
- c) Los nuevos horizontes de cambio social, que encarnan los movimientos sociales modifican o enriquecen las nociones del cambio político en el Estado, dando, sin embargo, un mayor peso al cambio en la sociedad.

La diversidad de movimientos sociales, así como la cambiante situación política de nuestros países, especialmente luego de la crisis sanitaria, desencadenada por el coronavirus, muy probablemente nos coloque ante una nueva coyuntura regional, en que los movimientos sociales adquieran nuevas significaciones. La situación de Brasil puede volverse crítica, a propósito de la tardanza de su gobierno en tomar medidas más enérgicas frente la crisis, o en el caso chileno, en que la actual crisis sanitaria viene precedida de una crisis social y política de gran envergadura.



**PLATAFORMA
MERCOSUR**
SOCIAL Y
SOLIDARIO

